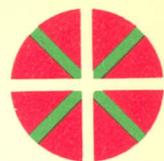


# Euskadi en la Comunidad Europea



INSTRUMENTOS DE FINANCIACION PUBLICA EN EL NUEVO MARCO  
COMUNITARIO Y LA ADAPTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA  
DEL PAIS VASCO AL MISMO.

GOBIERNO VASCO  
VICEPRESIDENCIA PARA ASUNTOS ECONOMICOS  
GABINETE TECNICO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA C.E.E.

19.11.01 N

EVS -

**GOBIERNO VASCO**  
VICEPRESIDENCIA PARA ASUNTOS ECONOMICOS  
GABINETE TECNICO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA C.E.E.

**INSTRUMENTOS DE FINANCIACION PUBLICA EN EL  
NUEVO MARCO COMUNITARIO Y LA ADAPTACION  
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO  
AL MISMO**

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
OFICINA EN ESPAÑA  
SERVICIO DE DOCUMENTACION  
Serrano, 41 - 5.ª planta  
28001 Madrid - Tel. 435 17 00



**VITORIA-GASTEIZ, 1985**  
SERVICIO CENTRAL DE PUBLICACIONES  
GOBIERNO VASCO

01 DIC. 1994

R.10417

92213

© Servicio Central de Publicaciones.  
Gobierno Vasco.  
I.S.B.N.: 84-7542-173-3  
Dép. Legal: VI-192/1985.  
Imprime: GRAFICAS SANTAMARIA, S.A. - Vitoria.

## INDICE

<b>PRESENTACION.....</b>	<b>9</b>
<b>0. INTRODUCCION.....</b>	<b>15</b>
<b>1. REGIMEN JURIDICO COMUNITARIO EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES ..</b>	<b>17</b>
<b>1.1. EL ARTICULO 92 DEL TRATADO CEE. ANALISIS.....</b>	<b>19</b>
1.1.1. Fundamento .....	20
1.1.2. Noción de ayuda .....	21
1.1.3. Principios de incompatibilidad. Sus condiciones .....	22
A. Los beneficiarios .....	22
B. Falsear la competencia.....	22
C. Que afecte al comercio entre Estados .....	23
1.1.4. Tipología de las ayudas. Excepciones al principio de incompatibilidad. ....	24
A. Ayudas compatibles de pleno derecho .....	24
B. Ayudas que pueden ser consideradas como compatibles.....	25
-Ayudas regionales .....	26
-Ayudas sectoriales.....	26
-Ayudas generales.....	28
-Otros tipos de ayudas.....	28
1.1.5. Ambito material.....	29

1.2. LOS ARTICULOS 93 y 94. PROCEDIMIENTO.....	29
1.2.1. La fase preventiva de control.....	30
1.2.2. La fase contenciosa.....	32
1.2.3. Procedimiento excepcional.....	33
1.2.4. El contenido de la decisión.....	34
1.2.5. Recursos.....	34
A. Recurso por incumplimiento de la decisión.....	34
B. Recurso por anulación de la decisión.....	35
C. Recurso por infracción del procedimiento.....	35
1.2.6. Sanciones.....	36
1.3. JURISPRUDENCIA.....	36
<b>2. LA POLITICA REGIONAL EN EL MARCO COMUNITARIO.....</b>	<b>39</b>
2.1. INTRODUCCION.....	41
2.2. LOS DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS REGIONALES EN ESPAÑA Y LA POLITICA REGIONAL COMUNITARIA.....	42
2.3. EL CASO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA.....	43
2.4. EL PAIS VASCO EN EL MARCO DE LAS REGIONES COMUNITARIAS.....	45
<b>3. LAS AYUDAS REGIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y SU COMPARACION CON LAS EXISTENTES EN EUSKADI.....</b>	<b>47</b>
3.1. LAS AYUDAS A LA INVERSION CONCEDIDAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y EL MARCO DE LA CEE.....	49
3.2. LAS AYUDAS REGIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS.....	51
3.2.1. Areas a las que afectan las ayudas.....	51
3.2.2. Nivel de Administración que concede las ayudas.....	51
3.2.3. Diferentes tipos de ayudas y su compatibilidad.....	52
3.2.4. Techos nominales de las ayudas.....	52
<b>4. EL PRESUPUESTO COMUNITARIO, LOS FONDOS Y LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. SU INTERES PRACTICO PARA EUSKADI.....</b>	<b>53</b>
4.1. INTRODUCCION. EL PRESUPUESTO COMUNITARIO.....	55
4.2. FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).....	56
4.2.1. Objetivos.....	56
4.2.2. Cuantía.....	57
4.2.3. Criterios de reparto.....	57
4.2.4. Prioridades.....	57
4.2.5. Calendario de presentación.....	58
4.2.6. Programas de formación.....	58
4.2.7. Una reflexión desde la CAPV.....	58
4.3. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).....	59
4.3.1. Procedimiento de acceso.....	59
4.3.2. Criterios de reparto.....	59

4.3.3. Tipos de intervención.....	60
4.3.4. Proyectos elegibles.....	60
4.3.5. Formas de financiación.....	61
4.3.6. Una reflexión desde la CAPV.....	61
4.4. FONDOS CECA.....	62
4.4.1. Intervenciones en el marco del art. 54.....	62
4.4.2. Intervenciones en el marco del art. 56.....	63
4.4.3. Una reflexión desde la CAPV.....	63
4.5. LOS PRESTAMOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI).....	64
4.5.1. Condiciones financieras.....	64
4.5.2. Beneficiarios.....	64
4.5.3. Préstamos directos.....	64
4.5.4. Una reflexión desde la CAPV.....	65
4.6. LOS PRESTAMOS DEL NUEVO INSTRUMENTO COMUNITARIO (N.I.C.).....	65
4.6.1. Cómo actúa el N.I.C.....	65
4.6.2. Cómo beneficiarse del N.I.C.....	66
4.7. EL FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y GARANTIA AGRICOLA (FEOGA).....	66
5. CONCLUSIONES.....	67
ANEXOS.....	75
BIBLIOGRAFIA.....	119

## **PRESENTACION**

En Enero de 1984 el Gobierno Vasco publicaba un informe amplio y profundo en forma de «Libro Blanco» que, con el título «Euskadi en la C.E.E.», analizaba los efectos de diversa índole de la previsible adhesión de España a la Comunidad Europea sobre la administración vasca, sobre los sectores económico-sociales y en definitiva, sobre la sociedad vasca en su conjunto.

Un año después, —cuando a pesar de que se han despejado algunas incógnitas clave, tales como la estructura del desarme arancelario, y el contenido del capítulo CECA, ambos vitales para la industria vasca, quedan todavía sobre el tapete la agricultura y pesca, asuntos sociales y algunos otros aspectos— retomamos aquellas ideas para presentar al público interesado *una nueva serie de publicaciones*. Y ello nos viene impuesto porque la fecha de incorporación definitiva pende ya como «espada de Damocles» sobre nuestra sociedad, en orden a completar los necesarios *ajustes pre-adhesión*.

Con esta intención, in mente, iniciamos una serie de informes con el que hemos titulado «*Los instrumentos de financiación pública en el nuevo marco comunitario y la adaptación de la Comunidad Autónoma del País Vasco al mismo*», cuyo objetivo básico y fundamental consiste en situar la panoplia de ayudas, subvenciones y bonificaciones de interés de las administraciones vascas, actualmente en vigor, en el nuevo sistema de referencia que la política de competencia europea impone.

En él se combinan, como puede verse, aspectos jurídicos que, permiten conocer desde una perspectiva global, y sin descender a detalles, los puntos que juzgamos fundamentales en el proceso de adaptación de las ayudas públicas al marco comunitario.

Habría que recalcar que este trabajo —primero de la serie titulada «Euskadi en la Comunidad Europea» abrirá paso a un conjunto de monografías que, sobre temas diversos, irán apareciendo a lo largo de los próximos meses— *ofrece ya una perspectiva de los efectos del ingreso desde la óptica del propio Ejecutivo Vasco*. Y, en este sentido se creó el pasado mes de Junio, *el Gabinete Técnico para asuntos relacionados con la C.E.E.* que tiene dos objetivos fundamentales que cumplir, *preparar*, por un lado, *a la Administración Vasca* en todas sus facetas y aspectos para el evento de la incorporación al Mercado Común y, por otro lado, *fomentar y promover* en todas las capas de la sociedad vasca aquellas acciones que faciliten la adaptación no traumática a la nueva situación.

Esperamos, modestamente, que el esfuerzo por clarificar puntos relevantes y urgentes, en unos casos, e informar simplemente, en otros, es labor imprescindible para conocer y valorar en su auténtica dimensión la existencia de unas nuevas «reglas de juego» que requerirán por nuestra parte un auténtico cambio de mentalidad.

Hemos procurado huir, en la medida de lo posible, de planteamientos académicos, rigurosos y formalistas, para ofrecer al lector conclusiones e información a veces de forma telegráfica a un nivel suficiente, compatible con un *objetivo vulgarizador claro*.

Quiero prevenir al lector que lo mismo *las conclusiones del último capítulo, como eventualmente algunos aspectos del contenido, es preciso valorarlas y comprenderlas* en el «estado actual del arte», es decir con los conocimientos que hoy se tienen. Somos conscientes de que las negociaciones de adhesión todavía no han concluido, por una parte y que, por otra, quedan cuestiones por conocer y resolver en Madrid y Bruselas, cuestiones algunas que no aparecerán de forma explícita en la redacción del Tratado de incorporación a la Comunidad Europea. Hay que pensar que el proceso se halla en fase de *cambio continuo*, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar el trabajo.

Insisto, una vez más, en que no debemos desaprovechar esta nueva ocasión de relanzar aquél *amplio debate* sobre aspectos comunitarios de nuestro interés en el seno de la sociedad vasca, en esta ocasión sobre la normativa de las ayudas en la Comunidad Europea y la adaptación que a ella hemos de realizar en Euskadi.

**XABIER GALARRAGA ALDANONDO**  
Director del Gabinete Técnico para  
Asuntos relacionados con la C.E.E.

Bilbao, Enero 1985.

## 0.—INTRODUCCION

## 0. INTRODUCCION

Desde el ejercicio económico 1981, y al amparo de las posibilidades financieras derivadas del Concierto Económico, se ha venido confeccionando, en los distintos niveles administrativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Gobierno y Diputación), un catálogo de ayudas a la inversión y al empleo, a la innovación tecnológica, reestructuración de empresas en crisis, al ahorro energético, etc... La próxima entrada en la CEE exige que este variado catálogo de ayudas sea sometido a aprobación por la Comisión dictaminando ésta si respetan o no las *reglas de la competencia comunitaria* establecidas en los artículos 92 a 94 del Tratado de Roma.

Ante la nueva situación así creada, nos ha parecido necesario desarrollar una *reflexión general sobre el tratamiento de las ayudas* que se deriva del Tratado de Roma. Este es el objetivo que se propone el primer capítulo del presente documento en el cual se hace un análisis sobre «El régimen comunitario en materia de ayudas estatales».

El abordar esta temática desde el ámbito de una Comunidad Autónoma nos ha obligado a *resituar la economía vasca* en el contexto de las regiones europeas al objeto de poder fundamentar los márgenes de maniobra de que va a gozar aquélla en la ejecución de una política regional y de ayudas propia. En el tercer capítulo, se procede a un *encaje de nuestro sistema de ayudas a PYMES en la clasificación vigente en la CEE* (ayudas sectoriales, generales y regionales), para finalizar con un análisis comparado de los *límites máximos* que en concepto de ayudas regionales se conceden en los diferentes Estados miembros.

En el marco comunitario, si bien por un lado se delimitan los márgenes de actuación económica de los Estados, se desarrolla también un protagonismo, a través de algunas instituciones propias, en el campo del desarrollo regional, el empleo, la reindustrialización, la política de infraestructuras, etc. El acceso a los recursos de dichas instituciones requerirá una *adaptación* de las prácticas de la Administración autónoma a varios niveles.

Finaliza el trabajo con un breve capítulo de *conclusiones*.

**I.—REGIMEN JURIDICO COMUNITARIO EN MATERIA DE  
AYUDAS ESTATALES**

## 1. REGIMEN JURIDICO COMUNITARIO EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES

Aunque institucionalmente se recomiende el término Comunidad Europea debe advertirse que, en sentido técnico jurídico, no cabe sino hablar de Comunidades Europeas. Estas, a saber, CECA, CEEA y CEE gozan de personalidad jurídica distinta e independiente para el cumplimiento de sus fines, estando en su actuación sometidas a la estricta observancia de sus respectivos Tratados fundacionales.

En este trabajo nuestro objetivo se circunscribe al análisis de las ayudas estatales en el marco de la CEE. Cuando proceda, no obstante, se incluirán los comentarios relativos al tratado CECA.

Los preceptos comunitarios en materia de ayudas estatales se recogen en la Sección Tercera del Capítulo Primero (reglas de competencia), artículos 92 a 94 del Tratado de Roma.

### 1.1. EL ARTICULO 92 DEL TRATADO C.E.E. ANALISIS

Establece el citado precepto que:

- «1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, cualquier clase de ayudas estatales u otorgadas con cargo a fondos públicos que falseen o amenacen falsear la libre competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
2. Serán compatibles con el mercado común:
  - a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos.
  - b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
  - c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división.
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común:
  - a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el

nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo.

- b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
- c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de actividades concretas o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Sin embargo, las ayudas de la construcción naval existentes el 1.º de Enero de 1957, en la medida en que tengan su origen en la ausencia de protección arancelaria, serán reducidas progresivamente en las condiciones aplicables a la supresión de los derechos de aduana, sin perjuicio de las disposiciones del presente Tratado relativas a la política comercial común respecto de terceros países.
- d) los demás tipos de ayuda que determine el Consejo por decisión, adoptada por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.

#### 1.1.1. Fundamento

La incorporación de este precepto al Tratado, atiende a dos razones que se complementan:

- El artículo 2 del Tr. CEE nos habla del «acercamiento progresivo de las políticas económicas de los Estados miembros» lo cual, en buena lógica, exige limitar el campo de decisión de los estados en la economía. Se constriñe, por tanto, la utilización de uno de los clásicos recursos de intervención de los poderes públicos.
- Por otro lado «el establecimiento de un sistema que garantice que la competencia en el mercado común no será distorsionada» (art. 3 Tr. CEE) implica no sólo que los factores de producción actúen libremente sino, además, evitar que las condiciones del mercado sean artificialmente modificadas por ayudas estatales de apoyo a las empresas. La razón de la limitación es obvia. El Estado, vía gasto público y exenciones fiscales, puede alterar el mercado mediante prácticas tan corrosivas para la libre competencia como las pre-comunitarias medidas proteccionistas: aranceles, contingentes a la importación, etc.

Adentrándonos en el análisis de la estructura de este precepto, se comprueba la existencia de los subsiguientes principios de intensidad variable:

- Principio de incompatibilidad con el mercado común, dentro de determinadas condiciones, de las ayudas estatales (art. 92.1).
- Supuestos de compatibilidad (art. 92.3).
- Aplicabilidad y eficacia de los criterios anteriormente enumerados salvo disposición en contrario establecida en el tratado (art. 92.1).

Destaca que el artículo comience con una reserva respecto de la general aplicación de su contenido. En efecto, su virtualidad queda subordinada a que «el presente tratado disponga otra cosa» (art. 92.1). Esta técnica legislativa de «excepción-norma-excepción» utilizada por el «constituyente comunitario» es coherente con el pragmatismo que se predica del derecho comunitario.

### 1.1.2 *Noción de Ayuda*

Establece a continuación el precepto que «serán incompatibles con el Mercado Común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, las ayudas concedidas por los Estados, o por medio de recursos estatales, sea cual fuere la forma que revistan y amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones» (art. 92.1).

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por ayuda? Esta expresión no viene definida en el Tratado.

Según la doctrina esta noción debe entenderse en un sentido muy amplio, fijando más la atención en las consecuencias y efectos que despliega la ayuda otorgada que en sus características formales.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión de la Comunidad Europea. Para ésta la ayuda engloba «toda subvención, exoneraciones de impuestos y de tasas, exoneraciones de tasas parafiscales, bonificación de intereses, garantías de préstamos en condiciones particularmente favorables, cesiones gratuitas de inmuebles o terrenos en condiciones particularmente favorables, cobertura de pérdidas de explotación o toda medida de efecto equivalente. (1).

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad tiene declarado que «la noción de ayuda comprende no sólo prestaciones positivas, sino igualmente intervenciones que bajo formas diversas aligeran las cargas que normalmente gravan el presupuesto de una empresa.» (2).

En definitiva, la ayuda consiste en una ventaja, un beneficio para la empresa que la recibe.

Pero no todas las ayudas son incompatibles. En principio sólo lo son aquéllas que, dentro de determinadas condiciones que luego detallaremos, se otorgan *por, o, mediante recursos del Estado*. Esta expresión no tiene un sentido anfibológico; debe ser interpretada de tal manera que comprenda la totalidad de la organización jurídico-política del Estado. No obstante ser correcta la afirmación anterior, merece ser precisada. En efecto, si bien la naturaleza del sujeto que otorga la ayuda es en la mayoría de los casos decisiva para determinar su compatibilidad o no, puede, en algunos casos, ser un criterio insuficiente. Como señala *Megret*, «si la ayuda es acordada por un organismo cuyos recursos provienen exclusivamente de contribuciones voluntarias de personas privadas, el artículo 92 no surtirá efecto; pero si las contribuciones, incluso voluntarias, provienen de los poderes públicos, o si, proviniedo de fuentes privadas, derivan de una regla de derecho público, constituyen «recursos del Estado» en el sentido del Tratado». (3) En definitiva, deben simultáneamente apreciarse dos criterios: la naturaleza y el carácter o fuente última de los fondos utilizados.

---

(1) JO C n.º 125, 17 de agosto de 1963.

(2) Sentencia 23.2.61. Asunto 30/59.

(3) J. Megret «Le droit de la Communauté Economique Européenne» vol. IV, Bruselas, 1972, pág. 361.

### 1.1.3 Principios de incompatibilidad. Sus condiciones

El artículo 92.1 del Tr. C.E.E. no permite las ayudas estatales u otorgadas con cargo a fondos públicos que, falseando o amenazando falsear la libre competencia y afectando los intercambios comerciales entre los Estados miembros, favorezcan a determinadas empresas o producciones.

#### A. LOS BENEFICIARIOS

Para que la ayuda sea incompatible, es en primer lugar necesario que el destinatario de la misma sea una determinada empresa o producción.

El Tribunal de Justicia (4) ha definido el concepto de empresa como una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que constituyen un sujeto jurídicamente autónomo persiguiendo de forma durable un fin económico determinado. El fin, económico o no, perseguido por el ente receptor de la ayuda reduce el campo de aplicación del artículo 92. Por ello, las ayudas otorgadas a los consumidores, o las concedidas a instituciones públicas o privadas que no persiguen tal finalidad, no se ven afectadas por el citado precepto.

Cuestión distinta, que no invalida lo que se ha indicado, es que en la práctica los Estados hayan utilizado precisamente esta correcta distinción teórica para defraudar el principio de incompatibilidad de las ayudas estatales. Desbordaría este trabajo el simple enunciado de los casos más llamativos. Baste advertir que la transferencia de recursos públicos a particulares cuya actividad no reviste un carácter económico, puede ser incompatible con el mercado común cuando la percepción de la misma se condiciona a que el beneficiario favorezca, mediante su utilización, la producción nacional.

La lectura *sensu contrario* del art. 92.1 permite concluir la admisibilidad de aquellas ayudas que benefician al conjunto de la economía. Nos encontramos ante una cuestión que, a priori, es de difícil concreción jurídica: ¿cuándo se mejora la economía o, por el contrario, se favorece a determinadas empresas? En abstracto difícilmente pueden enunciarse de forma positiva los caracteres o elementos que han de contener los proyectos estatales de impulso o mejora de la economía; entre otras razones por la funcionalidad del sistema. Por ahora, es suficiente señalar que, dado los poderes depositados en la Comisión Europea, ella es la encargada de aprobar y fiscalizar la puesta en práctica de estos programas.

#### B. FALSEAR LA COMPETENCIA

Pero la existencia de una ayuda estatal otorgada a una determinada empresa no es dato suficiente para declarar que aquélla es incompatible con el mercado común. Para ello, además, se requiere que mediante un otorgamiento se falsee o amenace falsear la competencia. En consecuencia, la aplicabilidad del citado precepto queda condicionada a la producción de un efecto nocivo para la competencia. Pero ésta, ¿cuándo es alterada por las ayudas estatales?

---

(4) T.J.C.E., Sentencia de 13.7.62, Asunto 19/61 (Mannesmann-Haute Autorité CECA), Recueil 1962, pág. 675-715.

Es oportuno recordar que, con carácter general, la política de la competencia de la C.E.E. pretende *garantizar* el manteniendo de un marco institucional en la economía comunitaria, que defienda la existencia de alternativas y promueva un clima de rivalidad en el que *actúen* en grado suficiente las fuerzas espontáneas del mercado y en el que los recursos se orienten hacia los usos para los que resulten más productivos. Se trata, no tanto de proteger a los competidores, como de mantener el proceso de libre competencia. En definitiva, se defiende una noción objetiva que aspira a la consecución de una competencia practicable.

Mayor complejidad comporta enunciar una fórmula general que, ante un determinado supuesto, permita valorar sin ulteriores comprobaciones de hecho si se está produciendo un resultado prohibido. Y ello, porque el proceso de calificación anticompetencial de una determinada conducta o acción exige previamente analizar el efecto concreto que la práctica examinada desencadena en el mercado. En esta labor habrá de tenerse en cuenta la competencia actual, la potencial, así como la de sustitución, no siendo preciso probar que estas situaciones sean efectivamente falseadas, pues es suficiente con que aquélla, en cualquiera de los distintos niveles reseñados, se vea amenazada.

### C. QUE AFECTE AL COMERCIO ENTRE ESTADOS

Ya hemos anticipado que la aplicación del artículo 92.1 no es inmediata. Las consecuencias jurídicas de este precepto quedan subordinadas a la previa satisfacción de determinadas condiciones. Así, junto a la identificación del concedente beneficiario y a la alteración del mercado, es además necesario que la ayuda concedida por el Estado afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

A la hora de valorar el alcance de este tercer requisito, surge la necesidad de concretar su significado. En primer lugar, es preciso conocer qué interpretación ha de darse al término afectación. Las discrepancias se acentuaron desde el momento en que la citada expresión fue traducida a las distintas lenguas oficiales de la Comunidad de forma no siempre idéntica. Las posiciones oscilaban entre aquéllas que consideraban que los intercambios quedaban afectados por la simple modificación de los mismos, operada como consecuencia de la ayuda (concepción neutral), y aquéllas que ponían el acento en la producción de un perjuicio en las condiciones de intercambio existentes o previas a la concesión de la ayuda.

Asimismo, y en aras de fijar la virtualidad de la condición examinada, se precisa conocer si la incidencia —modificación o perjuicio— sobre los cambios debía ser efectiva o era suficiente que fuese susceptible de afectar a los intercambios estatales. Estas dos cuestiones, carácter de la afectación y necesidad o no de resultado, han sido resueltas por el Tribunal de Justicia (5), para el que se requiere que la influencia sobre las condiciones de mercado revista cierta importancia, bastando con la posibilidad de una influencia directa o indirecta, actual o potencial.

En definitiva, conviene en esta materia adoptar una perspectiva dinámica que tome en consideración todas las consecuencias que se deriven del establecimiento y funcionamiento del mercado común. Este, forzosamente, entrañaría un desplazamiento

---

(5) T.J.C.E. Sentencia de 30 de junio de 1966, As. 55/65 Rec. 1966.338

to de los tipos de intercambios existentes y, en consecuencia, cualquier ayuda que contraatacara esta evolución sería incompatible según lo previsto en el art. 92 del Tr. CEE.

Por último señalar que la controversia no se ha suscitado respecto del término comercio, el cual ha sido objeto de una interpretación amplia en el sentido de intercambio de carácter económico.

#### 1.1.4. Tipología de las ayudas. Excepciones al principio de incompatibilidad

Ya indicamos anteriormente cómo una de las características del régimen jurídico en materia de ayudas estatales es la de su ductilidad. En efecto, a lo largo del artículo 92 se establecen determinados supuestos excepcionados (art. 92.2) y excepcionables (art. 92.3) del principio general de incompatibilidad recogido en el párrafo primero.

##### A) Ayudas compatibles de pleno derecho

El artículo 92.2 señala que:

«Serán *compatibles* con el Mercado Común:

- a) Las ayudas de *carácter social concedidas a los consumidores individuales* con la condición de que sean otorgadas *sin discriminación* alguna basada en el *origen de los productos*.
- b) *Las ayudas destinadas a remediar los perjuicios ocasionados por calamidades naturales u otros acontecimientos extraordinarios*.
- c) Las ayudas concedidas a la economía de ciertas regiones de la *República Federal de Alemania* afectadas por la división del país en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas motivadas por dicha división».

Estamos por tanto ante una expresa derogación del principio de incompatibilidad mediante la cual se pretende satisfacer intereses de distinta naturaleza. Razones sociales e históricas justifican esta previsión recogida en el Tratado. En atención de las primeras, los apartados a) y b) tratan de remediar una realidad social ante la que el Estado no puede mantenerse indiferente. Su distinta redacción permite pensar que las situaciones sociales cuya gravedad e intensidad pretenden atemperarse no son uniformes. El primer apartado tiene por destinatario a los consumidores, pretende facilitar «la satisfacción de sus necesidades» y condiciona la validez de la ayuda a que ésta se otorgue sin discriminación alguna basada en el origen de los productos. Esta matización final, introducida en el precepto, se comprende dado que la ayuda estatal concedida para la sola adquisición de productos internos perjudica a los fabricantes extranjeros de productos análogos.

Por su parte, el artículo 92.2.b admite las ayudas destinadas a remediar los daños ocasionados por calamidades naturales u otros acontecimientos extraordinarios. El dato de que en el citado apartado no se mencionen expresamente limitaciones referentes a esta modalidad de ayudas no es suficiente para concluir, que ante estos

supuestos los Estados tengan un mayor campo de actuación. Como ha señalado la doctrina, en estos casos es necesario algo más que una simple afectación subjetiva, es decir, que la ayuda realmente se dedique a remediar los daños producidos, pues sólo son compatibles con el Mercado Común aquéllas que efectivamente compensen los daños causados.

Resta por hacer una breve referencia al apartado tercero. Baste señalar que su único destinatario es la República Federal de Alemania a la que de alguna manera se trata de compensar de su actual división política.

#### B) *Ayudas que pueden ser consideradas como compatibles*

El artículo 92.3 del Tr. CEE señala las siguientes:

- «a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo.
- b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
- c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de actividades concretas o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Sin embargo, las ayudas a la construcción naval existentes el 1.º de Enero de 1957, en la medida en que tengan su origen en la ausencia de protección arancelaria, serán reducidas progresivamente en las condiciones aplicables a la supresión de los derechos de aduana, sin perjuicio de las disposiciones del presente Tratado relativas a la política comercial común respecto de terceros países.
- d) los demás tipos de ayuda que determine el Consejo por decisión, adoptada por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión».

Tras una primera lectura el jurista advertirá encontrarse ante un sistema de contornos poco definidos. Además, la operatividad de estas ayudas se alcanza mediante el procedimiento regulado en el artículo 93, por el cual la Comisión, tras conocer los distintos proyectos presentados, autorizará o denegará la puesta en práctica de los programas que los Estados le remitan.

Brevemente, es oportuno anticipar que la funcionalidad de este sistema jurídico se instrumentaliza, en la práctica, a través de dos posibles vías de actuación:

- Ayudas inscritas en el marco de programas específicos. Los Estados elaboran estos programas atendiendo, bien al criterio de localización geográfica, bien al del sector de pertenencia, y, ello, en el marco de las recomendaciones previamente dictadas por la Comisión.
- Regímenes de ayudas sin especificación en cuanto a su afectación. Dada su generalidad, y a falta de criterios apriorísticos, la Comisión acepta su elaboración si bien exige ser informada de todos los casos de aplicación concreta.

De acuerdo con el precepto transcrito, y en atención a esta práctica institucional, se pueden distinguir los siguientes supuestos de ayudas.

#### A. AYUDAS REGIONALES

Se contemplan dentro de esta categoría dos modalidades cuya diferencia estriba en la finalidad que el Estado persigue mediante su concesión.

De un lado, artículo 92.3.a, se intenta corregir la desfavorable situación socio-económica de una determinada región; su bajo nivel de vida o grave situación de desempleo son los factores determinantes de la intervención del Estado. Pero cabe, a su vez, que éstos se guíen no tanto por razones de subdesarrollo como de interés económico general (art. 92.3.c). En ambos casos debe elaborarse y proponerse la autorización de programas de desarrollo regional. En relación con los programas regionales, y ante la avalancha de proyectos estatales presentados a aprobación, la Comisión europea, que ya había establecido unos principios de coordinación (6), precisó, en el doceavo informe sobre la política de la competencia, la estrategia a seguir en este campo. Se elaboraron los criterios que se tomarían en consideración a la hora de examinar los distintos programas estatales:

— La ayuda debe ser juzgada teniendo en cuenta el contexto comunitario. No puede autorizarse una ayuda en base únicamente a la promoción de intereses estrictamente nacionales.

— La ayuda debe ser necesaria, indispensable para la realización del proyecto en cuestión.

— Las modalidades de ayuda, es decir, su intensidad, duración, riesgo de transferencia de dificultades de un Estado miembro a otro, grado de distorsión de competencia, etc., deben ser proporcionales a la importancia del objetivo perseguido con su concesión.

#### B. AYUDAS SECTORIALES

Según el tenor literal del Tratado, abarca esta modalidad aquellas ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades. Tras la lectura del artículo 92.3.c puede concluirse la inexistencia de límites jurídicos específicos para la concesión de este tipo de ayudas. Sin embargo, la práctica institucional comunitaria se ha orientado en otro sentido. Así, bajo esta modalidad se han canalizado los distintos proyectos de reconversión de los sectores en crisis con lo que ha quedado reducido, de facto, el ámbito material del citado apartado.

Como ha señalado la Comisión, estas ayudas con finalidad de reestructuración se justifican porque contribuyen a la realización de objetivos económicos y sociales de la Comunidad.

Ello es así dado que el libre juego del mercado:

— impediría progresar hacia estos objetivos.

— no permitiría alcanzarlos en plazos o mediante costos sociales soportables.

(6) Resolución del Consejo de 20.10.1971 JO C nº 3 de 4.11.71 Comunicación de la Comisión de 31.12.1978 JO C nº 31 de 3.2.1979.  
El nuevo reglamento del FEDER, comentado en el capítulo 4 completa este apartado.

— olintensificaría la competencia hasta tal punto que ella misma correría el riesgo de autodestruirse.

Pero la posibilidad de su otorgamiento no significa su generalización sin límites. En este sentido cabe mencionar que la Comisión Europea exige que dichas ayudas sean transparentes, no impliquen una transferencia de problemas industriales, o de paro, de un Estado miembro a otro, contribuyan a resolver los problemas estructurales y a restablecer la viabilidad de un sector pero no a mantener el statu quo y a diferir las decisiones y cambios inevitables, sean decrecientes en el tiempo y estén claramente vinculadas a la reestructuración del sector de que se trate, posean una magnitud proporcional a la importancia del problema que haya de resolverse, y, sean tales que, sólo en circunstancias determinadas y con sujeción a requisitos muy estrictos, se destinen a reducir los costos sociales y económicos del cambio.

En definitiva, de acuerdo con los criterios precitados, hoy por hoy se excluyen las ayudas de mantenimiento surgidas de programas de reestructuración y las ayudas al funcionamiento, salvo que compensen distorsiones de competencia provocadas por medidas adoptadas por países terceros no miembros de la Comunidad.

Es oportuno reseñar, por razones obvias, algunos de los sectores que, actualmente y en Europa, están en fase de reconversión:

- Sector siderúrgico. Conviene puntualizar que este sector recibe un tratamiento jurídico específico en la Comunidad Europea. En efecto, el Tr. CECA establece, a nivel de principio, la prohibición de ayudas y subvenciones (artículo 4). No obstante la realidad ha sido muy distinta. Se ha invocado el artículo 95 CECA, que contempla la posibilidad de realizar modificaciones cuando se asiste a un cambio profundo de las condiciones económicas o técnicas, para legitimar en este campo las políticas de ayudas estatales.

Ante este estado de cosas la Comisión se vio compelida a dictar un acto legislativo (7) por el cual, y según reza en su artículo 2.1., toda ayuda acordada deberá serlo solamente para la reconversión, debiendo generar una reducción de la capacidad global de producción y comprometiéndose el beneficiario a llevar a cabo un programa capaz de restaurar su competitividad y viabilidad, sin ninguna ayuda en condiciones normales de mercado.

Esta disposición normativa de orden general ha sido posteriormente desarrollada mediante decisiones individuales dirigidas a cada uno de los Estados y, a su vez, se ha complementado con el establecimiento de una política de fijación de cuotas de producción. En definitiva, se ha desembocado en la elaboración de un código de ayudas que, si bien su vigencia estaba prevista hasta el 1 de Enero de 1985, se ha visto prorrogado al 1 de Enero de 1986.

- Sector Naval. Si bien el artículo 92.2.c. expresamente prevé la reducción progresiva de las ayudas que en el momento de la constitución de la C.E.E. venían concediéndose, es un hecho cierto que, actualmente y en base al apartado d) del mismo precepto, este tipo de ayudas siguen otorgándose.

---

(7) Decisión General 2.320/81/CECA de la Comisión de 7 de Agosto de 1981. JO L n.º 228 de 13-8-1981.

En efecto, son numerosas las directivas adoptadas en esta materia, estando en la fecha vigente la quinta directiva n.º 81/363/CEE de 28.4.81 (8) dado que ha sido sucesivamente prorrogada en el año 1982 y recientemente en 1985. El artículo 2.º del mencionado acto legislativo preceptúa que la ayuda, en lo que respecta a la forma de concesión de créditos, será considerada compatible con el mercado común en tanto en cuanto respete lo establecido por la OCDE en este terreno. Por su parte el artículo 6.º referido a las ayudas en tiempo de crisis, establece condiciones similares a las previstas para el sector siderúrgico, es decir, ligadas a objetivos de reestructuración industrial que reducen en una recuperación de la competitividad.

### C. AYUDAS GENERALES

Después de analizar en sus distintos apartados el artículo 92 se suscita la duda sobre la posibilidad de conceder ayudas de carácter general o, si se prefiere, que beneficien al conjunto de la economía.

Ya advertimos a la hora de examinar las condiciones previstas en el artículo 92.1, cómo su admisibilidad debía teóricamente aceptarse dado que el precepto en cuestión declaraba incompatibles las concedidas a empresas determinadas. Por contra, esta categoría de ayudas no se encuentra incluida en el apartado que el artículo 92.3 señala entre las que pueden ser declaradas compatibles. Ante este estado de cosas, cabe lógicamente preguntarse si estas ayudas de carácter general son o no contrarias al Tratado.

Cabe adelantar que la realidad económica ha exigido una interpretación afirmativa y ha desprovisto de interés el planteamiento de esta cuestión jurídica. En efecto, en razón de la crisis, estas ayudas se han convertido en una necesidad política inevitable.

A la hora de contrastar esta modalidad de ayuda y las expuestas anteriormente, destaca su distinta finalidad así como el marco económico de referencia. Así, cuando se trata de ayudas regionales y sectoriales se arranca de una situación anormal de mercado, se pretende corregir estas deficiencias y restablecer el equilibrio económico. Ahora, más específicamente, se aspira a reforzar, modernizar o expandir la economía interna del país.

Corolario de este amplio objetivo es la indeterminación o abstracción de los proyectos de ayudas generales. Ello ha exigido que la Comisión realice su fiscalización no tanto en el momento de la presentación del proyecto, —que recibe en este estadio una aprobación con reservas—, sino en el de su correcta aplicación. Así, la Comisión exige, a la hora de la puesta en práctica de estos programas, la notificación previa de los casos de aplicación individual. En el momento de su puntual notificación los Estados vienen presentando inestimables objetivos: disminución de la contaminación, ahorro energético, I+D, que se acompañan a su vez de sugestivas acciones: creación de infraestructuras, organización de empresas, etc..., todo lo cual ha desembocado, dado el alto grado de sensibilidad de la Comisión hacia estos temas, en la creciente utilización por los Estados de este tipo de ayudas.

D. Ayudas estatales para la realización de un proyecto *de interés europeo* (artículo 92.3.b.). Son aquéllas que, de acuerdo con esa finalidad, generalmente se circunscri-

---

(8) JO L n.º 137 de 23.5.81.

ben a programas de obras públicas, con especial interés hacia aquéllas de carácter transfronterizo.

- E. Ayudas estatales que tratan de poner remedio a una grave *perturbación de su economía* (artículo 92.3.b.). Su redacción permite concluir que nos encontramos ante desórdenes económicos coyunturales, matización ésta a partir de la cual es posible su diferenciación con el supuesto de carácter estructural subsumido en el apartado de las ayudas regionales.
- F. Otras ayudas estatales que por *acuerdo del Consejo* adoptado por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión se reconozcan compatibles con el Mercado Común (artículo 92.3.d.). Como se ha señalado anteriormente, ésta ha sido la vía elegida para legitimar las ayudas en el sector naval.

#### 1.1.5. *Ambito material*

La virtualidad del artículo 92 Tr. C.E.E., *rationae materie*, afecta al campo de la Energía Atómica no incidiendo por contra en el campo del Carbón y del Acero.

En materia agrícola su aplicabilidad se ha visto diferida y está condicionada al establecimiento de las diferentes organizaciones de mercado. En materia de transportes el principio de incompatibilidad de las ayudas es extensible a partir de la Decisión del Consejo de 13 de mayo de 1965 (9).

## 1.2 LOS ARTICULOS 93 y 94. PROCEDIMIENTO

La puesta en práctica por parte de los Estados miembros de los distintos regímenes de ayuda exige el previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 93 del Tr. C.E.E.

Establece este concepto:

Art. 93.1. La Comisión examinará permanentemente los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobara que una ayuda estatal o concedida con cargo a fondos públicos no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 92, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Si el Estado de que se trate no cumpliera esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 169 y 170.

A instancia de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad, no obstante lo dispuesto en el artículo 92 o en los reglamentos previstos en el artículo 94, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con

(9) JO L n.º 88, 24.5.1965.

el mercado común cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero del presente apartado, la instancia del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la instancia, la Comisión decidirá al respecto.

3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a establecer o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si consideramos que un proyecto es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 92, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

Art. 94. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá adoptar los reglamentos apropiados para la aplicación de los artículos 92 y 93 y determinar, en particular, las condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 93 y los tipos de ayuda que quedan excluidos de tal procedimiento.

La Comisión es la institución competente para llevar a cabo la tarea de control de las ayudas estatales. La reserva de esta función a la Comisión se explica por la importancia que, como instrumento de política económica, tiene la política de ayudas para los Estados. Estos, mediante concesiones recíprocas, podrían transgredir los límites impuestos por los Tratados, y, ello, caso de que esta tarea de fiscalización hubiere recaído en el Consejo. Más concretamente, el Tribunal de Justicia tiene declarado que la Comisión goza a este respecto de un poder discrecional basado en apreciaciones de orden económico y social, dentro de un contexto comunitario (10). Esta tarea de fiscalización se realiza de la manera que a continuación se examina.

### 1.2.1. La fase preventiva de control

La labor preventiva de la Comisión se concreta en:

- a) La tarea de *examen permanente*, conjuntamente con los Estados, de las *ayudas ya existentes*, bien en el momento de la integración, bien autorizadas en su momento por la Comisión (art. 93.1.CEE).
- b) La obligación expresa impuesta a los Estados de *informar* a la Comisión de *todo nuevo proyecto de ayudas o de toda modificación de ayudas ya existentes* (art. 93.3.CEE).
- a).— En el primer supuesto, el control permanente se extiende a todos los regímenes de ayudas independientemente de su origen. Es permanente porque, a pesar de que en su momento pudieron ser declaradas compatibles, la evolución de la economía exige su revisión periódica en aras de las exigencias de funcionamiento del mercado común. Este examen es necesario para todo régimen existente y para todo proyecto en funcionamiento aunque no se haya cumplido el requisito de información previa en tiempo útil a la Comisión.

(10) Sentencia de 17 Septiembre 1980. Asunto 730/79 (Philip Morris), Recueil 1980.

La facilitación de la labor de seguimiento continuo, conjugada con la obligación general de cooperación para el correcto funcionamiento del mercado común recogida en el artículo 5 CEE, implica tres tipos de actuación inicial:

— Una, previa, de confección por parte de la Comisión de un inventario de las ayudas ya existentes con motivo de la adhesión.

— La realización de consultas periódicas por parte de la Comisión al Estado en cuestión y a los Estados que sufran los efectos de estas ayudas.

— La obligación de informar a la Comisión de los casos de aplicación concreta. El análisis de las medidas individuales de aplicación se realiza bajo la forma de control puntual, revelándose como un útil instrumento para el examen del régimen de ayudas, que proviene de la necesidad de existencia de un control para evitar todo caso de aplicación abusiva (11).

A la vista de este examen multilateral y contradictorio, la Comisión propone las medidas oportunas para adecuar el régimen de ayudas a las exigencias del funcionamiento del mercado común. Estas medidas pueden versar sobre la modificación o la simple supresión del régimen de ayudas. Las propuestas de la Comisión, simples consideraciones correctoras de oportunidad, revisten en este estadio la forma jurídica de recomendaciones, correspondiendo al Estado poner o no en práctica las sugerencias comunitarias.

b).— El segundo supuesto contempla todo nuevo proyecto o toda modificación de ayudas existentes entendiéndose por modificación, no solamente las estrictas modificaciones sensibles, sino también la prórroga de regímenes ya existentes.

La obligación de notificación concierne a todos los proyectos, independientemente de su potencial repercusión en el comercio exterior y de su calidad de ayudas compatibles de pleno derecho conforme al artículo 92.2 CEE, resultando, asimismo, irrelevante la forma jurídica que adopten los nuevos proyectos.

Dado que la obligación de notificación incumbe al Estado en cuyo territorio se concede la ayuda, corresponde a sus órganos generales tomar las medidas internas necesarias para el cumplimiento de este requisito, incluso cuando se trate de ayudas establecidas por otras instancias territoriales.

La exigencia de notificación «en tiempo útil» supone la necesidad de un período razonable, previo a la puesta en práctica de la ayuda de que se trate, que permita su examen por la Comisión, quedando en suspenso durante ese plazo la ejecutoriedad del proyecto en cuestión.

Ante el frecuente incumplimiento de este requisito de notificación previa y en tiempo útil de todo proyecto de instauración o modificación de ayudas, la Comisión dictó una Comunicación con fecha de 30 de septiembre de 1980 (12) recordando a los Estados esta obligación inexcusable.

(11) Ya en el marco de la Resolución del Consejo de 20 de octubre de 1971 estableciendo los «principios de coordinación» de las ayudas de carácter regional, los Estados se comprometían expresamente a facilitar este control por medio de la comunicación a posteriori de los casos significativos de aplicación de los respectivos regímenes. JO C n.º de 4-XI-71 punto 7 pág. 2.

(12) JO C n.º 252, pág. 2.

La Comisión dispone de un plazo, que el T. J. de la Comunidad Europea ha fijado en dos meses (13), para pronunciarse sobre el proyecto que le ha sido sometido. Este pronunciamiento no implica que la Comisión tenga reconocida una potestad de otorgar ayudas. Es el Estado quien conserva esta potestad con la peculiaridad de que, en los casos del artículo 92.3, al ser excepciones a la regla comunitaria, corresponde al Estado la carga de la prueba sobre la compatibilidad de las ayudas. Por ello, la validez de las nuevas ayudas no depende de la autorización de la Comisión sino que simplemente está sometida a una condición suspensiva de ausencia de oposición por parte de la Comisión.

Pasado el plazo sin pronunciamiento de la Comisión, el Estado puede poner en práctica el proyecto, previo aviso a la Comisión. Esta ayuda pasará a ser considerada como existente.

Si la Comisión estima que tiene que intervenir, presenta sus objeciones al Estado. En ellas puede requerir ciertas modificaciones o posicionarse sobre su absoluta inadmisibilidad.

La negativa de adoptar las medidas sugeridas en la recomendación en el supuesto de las ayudas existentes, y el pronunciamiento negativo de la Comisión en el caso de los nuevos proyectos, supone la apertura inmediata del procedimiento previsto en el artículo 93.2 CEE.

### *1.2.2. La fase contenciosa*

El cumplimiento de los trámites establecidos en este procedimiento constituye un requisito indispensable para la decisión final de incompatibilidad de una ayuda.

La apertura de este procedimiento tiene efectos suspensivos para la puesta en práctica de todo proyecto nuevo o modificadorio de un régimen ya existente. En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades ha establecido que el juez nacional es competente para apreciar el cumplimiento del efecto suspensivo (14). En otros términos, la prohibición de poner el proyecto en práctica es directamente aplicable.

No ocurre lo mismo para las ayudas ya existentes y para aquellos nuevos proyectos que, por haber pasado el plazo posterior a la notificación sin pronunciamiento de la Comisión, se asimilan a las ayudas ya existentes. Aquí, la apertura del procedimiento no suspende la ejecución de las ayudas que sólo se detendrá ante la decisión final.

La decisión de la Comisión debe estar precedida de un requerimiento a los interesados para que presenten sus observaciones dentro de un plazo que normalmente está fijado en un mes. Para el Estado en cuestión el informe previo desfavorable de la Comisión y el requerimiento de presentar las observaciones pertinentes se realizan normalmente en un solo acto.

A este efecto, se consideran interesados no solamente el propio Estado aludido y las instancias territoriales e incluso privadas que otorgan las ayudas, sino los otros

(13) T.J.C.E., 11.12.73, Asunto 120/73 (Lorenz), Recueil 1973, pág. 1471.

(14) T.J.C.E. 19.6.73, Asunto 77/72 (Capolongo-Maya), Recueil 1973, pág. 611.

Estados miembros así como toda empresa u organización favorecida o dañada, de hecho o potencialmente, por la ayuda en cuestión.

El derecho de los interesados y empresas beneficiarias a ser escuchados no implica en sí mismo un derecho a la apertura del procedimiento contencioso. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha establecido que la posibilidad de presentar las observaciones pertinentes no puede asimilarse a la invitación previa del recurso en carencia contra la Comisión prevista en el artículo 175 CEE. (15).

El Tratado no prevé nada en cuanto a las modalidades y formas de este requerimiento de presentación de observaciones a los interesados. En la práctica, la Comisión invita a ello a los Estados miembros mediante notificación y tiene por costumbre cumplir este requisito de información a los demás interesados a través del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Por otro lado, el establecimiento de un plazo para la presentación de alegaciones constituye un requisito previo indispensable. Su eventual omisión es causa suficiente de nulidad de la decisión final de la Comisión a través del recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia previsto en el artículo 173 Tr. CEE.

Este primer trámite permitirá pasar del estadio de la probabilidad al de la constatación de incompatibilidad. En efecto, a la vista de las observaciones emitidas, la Comisión toma una decisión final que, como tal, tiene carácter obligatorio y surte efecto directo en el ordenamiento legal interno del Estado destinatario.

### *1.2.3. Procedimiento excepcional*

El artículo 93.2 párrafo 3 establece que el Estado puede pedir al Consejo que decida por unanimidad la compatibilidad de una ayuda cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen y en derogación de las disposiciones del artículo 92 CEE.

Esta petición del Estado conlleva la suspensión del procedimiento de incompatibilidad iniciado por la Comisión. El Consejo tiene un plazo de tres meses para tomar la decisión, pasado el cual corresponde decidir a la Comisión.

La decisión del Consejo debe considerarse como una decisión final sin que se requiera cualquier actuación posterior de ratificación por parte de la Comisión. Esto no significa que la Comisión no pueda intervenir posteriormente contra la ayuda cuando estime que las circunstancias excepcionales que justificaban su aprobación han desaparecido.

Debe tratarse, en todo caso, de un régimen de ayudas determinado o de una ayuda individual ya que en lo que concierne a las nuevas categorías de ayudas entraría en juego el artículo 92.3 apartado d) que prevé la decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada.

El Consejo ha hecho hasta el momento presente un uso muy restringido de este poder de intervención que encuentra su justificación a la luz del artículo 145 CEE que otorga al Consejo el papel de asegurar la coordinación entre la política general de la Comunidad y las políticas económicas de los Estados miembros.

(15) T.J.C.E. 11.7.79, Asunto 59/79. (Productores vino de mesa/Comisión), Recueil pág. 2425.

Asimismo, el art. 94 del Tr. CEE otorga al Consejo la facultad de establecer vía reglamento las condiciones de aplicación del artículo 93 y las categorías de ayudas dispensadas de este procedimiento. Hasta el momento el Consejo no ha hecho nunca uso de esta potestad que supondría per se un recorte de las facultades discrecionales otorgadas a la Comisión en materia de ayudas.

#### *1.2.4. El contenido de la decisión*

Caso de ser negativa, la decisión de la Comisión puede girar en torno a la modificación o supresión de la ayuda examinada.

La hipótesis de una decisión de supresión supone la prohibición pura y simple de realización del proyecto.

A veces la modificación puede implicar una decisión parcial, esto es, referida a determinados aspectos de la ayuda analizada. Otras veces la modificación puede implicar de hecho la supresión de la ayuda cuando, al extenderse el campo de aplicación de la misma, se incrementen las cargas del Estado y éste estime que no es interesante seguir adelante con la mencionada ayuda.

La Comisión puede asimismo concluir sobre la existencia de una aplicación abusiva de un régimen de ayudas cuando éste, considerado como compatible en principio, se ejecuta de hecho en contradicción con el derecho comunitario, con las políticas comunes o con los objetivos generales del Tratado.

La decisión, siempre motivada conforme al artículo 190 CEE, fija un plazo para la modificación o supresión de las ayudas existentes en función de las necesidades e intereses de las empresas beneficiarias con el objeto de facilitar, en lo posible, su adaptación.

#### *1.2.5. Recursos*

Atendiendo a las diferentes situaciones y al sujeto que lo interpone, se pueden distinguir diversos supuestos.

##### **A) RECURSO POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECISION**

Existe incumplimiento cuando el Estado aplica una ayuda a pesar de la decisión final de incompatibilidad o cuando simplemente no adopta, en el plazo establecido por la Comisión, las medidas tendentes a su supresión o modificación.

En estos casos el artículo 93.2 párrafo 2 prevé que la Comisión o todo Estado miembro afectado por este incumplimiento podrán recurrir directamente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades «por derogación de los artículos 169 y 170 Tr. CEE». Resulta ser, por tanto, una vía excepcional con respecto a los casos de los mencionados artículos que contemplan el recurso dirigido contra todo incumplimiento por parte de un Estado miembro de alguna de las obligaciones que le incumplen en virtud del Tratado (16).

---

(16) T.J.C.E., Sentencia de 12.X.78, asunto 156/77 (Comisión/Bélgica), Recueil pág. 1881.

Se elimina de esta manera la necesidad de realizar los trámites previos previstos en los citados artículos sobre recurso por infracción de las normas establecidas en el Tratado. Se refuerza al mismo tiempo el poder de la Comisión con respecto a la vía del artículo 169 al permitir que la Comisión dirija a los Estados una requisitoria de cumplimiento obligatorio en lugar de un mero dictamen motivado.

#### B) RECURSO DE ANULACION DE LA DECISION

El Estado miembro destinatario de una decisión negativa puede recurrir la decisión de la Comisión, tanto en cuanto al fondo como en cuanto a la forma, en un plazo de dos meses en virtud del artículo 173 Tr. CEE.

Si bien en un principio el derecho de los interesados y empresas beneficiarias a ser escuchados no implica el derecho al ejercicio de la vía del recurso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades (17) ha extendido esta capacidad de recurrir a las empresas individual y directamente afectadas conforme al artículo 173.2 del Tr. CEE.

La citada disposición contempla cuatro posibles motivos de anulación: incompetencia, violación del Tratado o de las disposiciones tomadas en aplicación del mismo, defecto substancial de forma (ausencia de motivación, de publicación o de notificación) y desviación de poder.

#### C) RECURSO POR INFRACCION DEL PROCEDIMIENTO

Se contempla aquí el supuesto de un Estado que instituye o modifica una ayuda sin esperar a la decisión de la Comisión o sin ni siquiera notificar la ayuda.

Paralela a la vía del artículo 93.2, más propia de una actuación basada en criterios de fondo tendentes a la suspensión definitiva de las ayudas, puede interponerse recurso por la vía del artículo 169 CEE por infracción de criterios formales recogidos en el Tratado y tendente a la suspensión temporal de la aplicación de la ayuda hasta que se cumplan los requisitos formalmente infringidos.

Así pues, como consecuencia de que el artículo 93.1 no realiza distinción en cuanto al origen, regular o no, de las ayudas, la violación del artículo 93.3 permite la posibilidad, bien de recurso vía artículo 93.3 en conjunción con el artículo 169, bien de recurso por el artículo 93 apartados 1 y 2 dado que el proyecto de ayuda aplicada será inmediatamente considerado como existente.

Por otro lado, puede ocurrir que la Comisión, estimando que se produce una violación del artículo 95 del Tratado CEE, en cuanto que la concesión de la ayuda se traduce en una imposición interna discriminatoria directa o indirectamente para los productos provenientes de los otros Estados miembros, abra el procedimiento del artículo 169, y que, simultáneamente, y estimando que estas mismas prácticas forman parte del de un régimen incompatible de ayudas, abra el procedimiento previsto en el artículo 93 CEE. En todo caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades ha estimado que ambos procedimientos son perfectamente compatibles y no excluyentes. (18).

(17) T.J.C.E., Sentencia de 17 Septiembre 1980. Asunto Philip Morris 730/79. Recueil 1980, pág. 2671.

(18) T.J.C.E. Sentencia de 21.5.1980. Asunto 73/79. Comisión/Italia. Recueil pág. 1533-1547.

Asimismo, y en ambos casos, la Comisión ha conjugado estas vías con una petición de suspensión inmediata basada en el artículo 186 que prevé la adopción de las medidas provisionales necesarias por motivos de urgencia (19). En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades ha establecido que el incumplimiento de la obligación de dejar en suspenso las medidas de ejecución de una ayuda hasta el dictado de la decisión supone una infracción tan caracterizada de la salvaguardia del mecanismo de control, que justifica por sí sola la aplicación del artículo 186 en orden al cese inmediato de la medida de ayuda en litigio (20).

### 1.2.6 Sanciones

A la vista del constante incremento de infracciones tanto de procedimiento como por incumplimiento de las decisiones de la Comisión, ésta última hizo pública una Comunicación en el Boletín Oficial de las Comunidades con fecha de 24 de noviembre 1983 (21) en la que, invocando una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades (22), anunciaba su intención de proceder, a partir de ese momento, a la restitución progresiva de las ayudas concedidas ilegalmente, dirigiéndose directamente a los beneficiarios de las ayudas y encargando a los Estados miembros la misión de recuperarlas.

### 1.3. JURISPRUDENCIA

Hasta fecha reciente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no había tenido ocasión de pronunciarse sobre el contenido de las decisiones adoptadas por la Comisión en materia de ayudas. Ello acontece por primera vez en el asunto Philip Morris (23).

La citada compañía interpuso el correspondiente recurso contra la decisión 79/743/CEE (24) de la Comisión, por la que se denegaba al gobierno holandés la posibilidad de conceder, en el marco de un programa general, una ayuda a la mencionada empresa cuya finalidad era proceder al cierre de una de sus factorías en orden a concentrar toda su producción en una sola.

La decisión de la Comisión, refrendada más tarde en todos sus términos por el Tribunal de Justicia, establecía la necesidad de una interpretación estricta de las derogaciones al principio de incompatibilidad de las ayudas, de tal manera que una

(19) Sobre la adopción de medidas paralelas de suspensión de la ayuda en relación con la apertura de un recurso por la vía del art. 169, ver sentencia de 20 septiembre 1983, asunto 171/83.

(20) T.J.C.E. Sentencia de 21.5.1977, Asuntos 31/77 R. y 57/77 R., Comisión/Reino Unido, Recueil pág. 921, C.f. pág. 924.

(21) JO C n.º 318, 24.11.83, pág. 3.

(22) T.J.C.E. Sentencia de 12.7.73. Asunto 70/72. Recueil 1973 pág. 813.

(23) T.J.C.E., sentencia de 17 septiembre 1980, asunto 730/79 (Philip Morris-Comisión), Recueil pág. 2668-2693.

(24) JO L n.º 217 de 25.8.1979, pág. 17.

ayuda sólo podrá admitirse cuando la Comisión se encuentre en situación de poder determinar que contribuirá al logro de los objetivos específicos en la excepción y siempre que los beneficiarios no pudiesen alcanzarlos por medio de acciones propias en condiciones normales de mercado.

Surge aquí, pues, por primera vez la noción de *justificación compensatoria* que consiste en la existencia de una contribución, de una contrapartida que justifique la concesión de la ayuda.

Frente a la argumentación del particular (Philip Morris), que esgrimía el carácter objetivo y neutral de las derogaciones del artículo 92.3 —(la Comisión debe exclusivamente valorar si la ayuda en litigio favorece o no la inversión y facilita el desarrollo de una actividad económica)— el Tribunal de Justicia, dando razón a la Comisión, recordaba que «el artículo 92.2 otorga un poder de apreciación a la Comisión al prever que las ayudas que enumera pueden ser consideradas como compatibles con el mercado común» y que, por tanto, «la Comisión goza de un poder discrecional cuyo ejercicio implica apreciaciones de orden económico y social que deben ser efectuadas en un contexto comunitario» (25).

La importancia de esta sentencia, que reitera el reconocimiento de la existencia de un poder discrecional en la Comisión por el que, entre otras cosas, se impide a los afectados la posibilidad de acudir a un tribunal nacional para obtener la declaración de compatibilidad de la ayuda con el derecho comunitario (26), se constata al exigirse que esta facultad de apreciación se ejercite en un contexto comunitario, lo que implica un análisis sólido y consistente del cambio de los factores socioeconómicos en orden a alcanzar siempre una solución justa y equitativa y no de simple compromiso. El Tribunal de Justicia extrapola, así, el «interés europeo común» del artículo 93.3.b. y lo «contrario al interés común» del artículo 93.3.c., ligándolos a la facultad discrecional de la Comisión, y a la luz de los objetivos de la CEE definidos en los artículos 2 y 3 del Tratado de Roma.

La sentencia Philip Morris, que hasta ahora no ha tenido continuación jurisprudencial (27), supone un punto de inflexión en la argumentación de las decisiones de la Comisión. En efecto, a partir de su aparición a finales de 1980 y hasta el momento presente, la Comisión ha adoptado más de una treintena de decisiones adversas basadas en dicha sentencia, puntualizando y afinando progresivamente la concepción elaborada en la misma (28). Así, en su decisión de 28 de noviembre de 1980 sobre la concesión de una ayuda por parte del gobierno belga a una refinería de Amberes (29), se extiende la aplicación de este criterio —exigible en un principio sólo en los casos de

(25) Sentencia citada, asunto 730/79 (Philip Morris), Recueil pág. 2671.

(26) Sentencias de 22.3.77, asuntos 74/76, (Inelli), Recueil, 575, considerandos 11 y 12; y 78/76, (Steinilce), 1977, Recueil, 609, considerando 9.

(27) En este sentido, están pendientes de resolver los siguientes asuntos: Asunto 296/82, (Holanda-Comisión), JO C n.º 331/4 de 17.12.82; Asunto 318/82, (Leenwarder papierwaren fabrie), JO C n.º 16/6 de 20.1.83; Asunto 323/82, (Intermills), JO C n.º 23/4 de 28.1.83; Asunto 57/84, (Bélgica-Comisión), JO C n.º 121/3 de 5.5.84.

(28) Ver anexo.

(29) JO L n.º 343/39, 1980.

ayudas individuales en ejecución de un régimen general (supuesto del contencioso Philip Morris)— a un marco más amplio, comprensivo tanto de ayudas individuales como regionales y sectoriales.

Por otra parte, dicha decisión establece que debe tratarse de una compensación *específica* por parte del beneficiario o, lo que es lo mismo, claramente demostrable. La especificidad de la contrapartida se conjuga además con el argumento de la *inversión necesaria*, esto es, de la inversión que, en condiciones normales de mercado, no podría realizarse sin la concesión de la ayuda. En base a este último criterio, por pura lógica únicamente válido para los casos de aplicación individual de ayudas generales, las empresas competitivas sólo podrán recibir una ayuda siempre y cuando elijan un producto adecuado y/o elaborable en un lugar idóneo.

La operatividad de los criterios antedichos no incide en aquellos sectores que, por sometidos a la reconversión, están sujetos a una regulación especial aprobada por el Consejo, así como tampoco en ciertos sectores o materias donde la Comisión ya ha establecido las líneas maestras, resaltando los objetivos y tipos de ayuda susceptibles de ser aceptados; es el caso del textil y del medio ambiente por poner un ejemplo. En estos casos, la interpretación estricta de las derogaciones del artículo 92.3.c., defendida por la Comisión en su decisión Philip Morris, se estima que ya se realiza en el momento de la redacción y establecimiento de unos principios y límites de actuación que los Estados deberán comprometerse a respetar en sus respectivos programas.

Asistimos, en resumen, a una reciente tendencia de unificación práctica de los criterios que rigen la facultad fiscalizadora de la Comisión, basada en una interpretación estricta de las excepciones, dentro de un contexto comunitario y contando con el deber de colaboración mutua entre Estados y Comisión en la apreciación de la existencia de la contrapartida.

Todo parece indicar que estamos en el umbral de la elaboración por la Comisión de unos principios generales de interpretación uniforme en la apreciación de cualquier tipo de ayuda, en los que además de sistematizarse los criterios mencionados se incluiría la, cada vez más reiterada, obligación de notificación así como de devolución de las ayudas concedidas ilegalmente (30). Inmediatamente a la publicación de la sentencia referida y apoyándose en la línea argumental esgrimida por el Tribunal de Justicia, la Comisión estableció en el informe sobre la competencia de 1980 (31) que el criterio de ayuda compatible con el interés común *debía medirse por «su contribución, a nivel comunitario, bien a la reducción de desempleo, al estímulo de las inversiones o al fomento de las reestructuraciones».*

En definitiva, mediante la construcción del concepto de justificación compensatoria se ha logrado una síntesis interpretativa sobre el alcance del artículo 92.3 que, a su vez, garantiza la no distorsión de la competencia en el comercio intracomunitario. Por tanto, sólo ante razones suficientes de interés europeo se autorizarán las distintas ayudas.

---

(30) Ver en este sentido, Comunicación de la Comisión de 30.9.80 en JO C n.º 252, pág. 2 y Comunicación de la Comisión de 24.11.83 en JO C n.º 318/4, pág. 3.

(31) Décimo informe sobre la competencia, 1980, pág. 121.

## **2.—LA POLITICA REGIONAL EN EL MARCO COMUNITARIO**

## 2. LA POLITICA REGIONAL EN EL MARCO COMUNITARIO

### 2.1. INTRODUCCION

La ausencia en España de una política regional coherente y articulada ha sido una de las razones por las cuales la actividad del sector público centralizado no ha contribuido a aminorar los fuertes desequilibrios regionales existentes.

Con la generalización del proceso autonómico el desarrollo regional se convertiría en un objetivo común de todos los programas económicos, que independientemente de su matiz ideológico, se han venido presentando a lo largo de las diferentes confrontaciones electorales.

En el quehacer cotidiano de los Gobiernos y Administraciones Autónomas se han venido realizando, estos últimos años, unas *actuaciones* que se inscriben dentro de los perfiles *de una política regional*: ayudas públicas a la inversión, diseño de elementos de política industrial, planes puntuales de lucha contra el paro, etc. *Todo este conjunto de actuaciones, se han desarrollado de una manera un tanto heterogénea*, atribuible no sólo a los imperativos derivados de las diferentes problemáticas regionales, sino también a la existencia de criterios y opciones distintas en cada Administración Autónoma.

*La próxima entrada en la CEE* refuerza la importancia del desarrollo regional en la medida en que aunque de forma aún modesta, existe una política comunitaria en ese sentido que contempla tanto, el apoyo a las políticas regionales diseñadas por los Estados, como la ejecución de una política propia de carácter comunitario. De este modo, con la entrada en la CEE, la política regional se ejecuta desde los tres niveles de la Administración (comunitario, estatal y regional).

Por otro lado, las reglas de competencia vigentes en la CEE, que garantizan que la intervención de los Estados en la economía no distorsione la competencia, imponen un marco de condiciones para el desarrollo de la política regional. *Dentro del espíritu comunitario las ayudas regionales se justifican como elemento que discrimina en favor de una región y se entiende que, sin tales ayudas, la dinámica económica de aquélla no le permitiría salir de su situación de depresión económica o declive.* Sobre la base de

tal principio, la capacidad de una Comunidad Autónoma, para poder desarrollar una política de incentivos regionales a la inversión, cobra una mayor amplitud si dicha Comunidad es incluida en el catálogo de regiones definidas como zona asistida por el Estado y su posterior aceptación por la Comisión.

## 2.2. LOS DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS REGIONALES EN ESPAÑA Y LA POLITICA REGIONAL COMUNITARIA

A las puertas de la entrada en la CEE, la economía española sigue presentando unas fuertes disparidades regionales que en términos de «renta per cápita» se traducen en la existencia de una importante distancia entre la Comunidad Autónoma mejor situada, Madrid, y la que ocupa el último lugar del ranking, Extremadura.

La reducción de disparidades habida en términos de «renta per cápita» durante el período 1955-73 se debe más al fenómeno migratorio, y a la consiguiente eliminación del «paro encubierto», que a la existencia de una dinámica de desarrollo real en dichas regiones. Durante los años de la crisis las disparidades han seguido decreciendo, aunque aún las diferencias entre los casos extremos sigan siendo de uno a dos.

### Evolución de la Renta «per cápita regional» (Índices, media España 100)

	1955	1973	1981
Andalucía .....	71,9	71,1	72,2
Castilla-León .....	92,4	80,7	80,9
Extremadura .....	54,9	59,2	61,7
Galicia .....	68,7	71,4	79,0
Madrid.....	165,0	139,1	144,0
Cataluña .....	148,2	134,5	126,4
C.A.V. ....	176,2	138,7	113,0

Fuente: Renta Nacional y su Distribución Provincial.  
Banco de Bilbao.

Hasta la década de los 80 la política regional comunitaria, concebida fundamentalmente como política de apoyo a las políticas regionales de los Estados, ha venido ocupándose y destinando sus fondos al impulso de aquellas regiones históricamente deprimidas. Este es el caso del Mezzogiorno italiano, del Sudoeste francés y de otras muchas regiones europeas, y en esa categoría encajarían numerosas regiones españolas.

Y sin embargo, y según se deriva de las conclusiones del segundo Informe Comunitario sobre «La situación socio-económica de las regiones de la Comunidad» («Deuxieme Rapport Periodique sur la situation et l'évolution socio-economiques des regions de la Communauté» Bruselas, 4 Abril de 1984), y del nuevo reglamento del FEDER (32), *el declive industrial de determinadas regiones o zonas de Europa empieza a ser motivo de especial atención por parte de las autoridades de la C.E.E.*

(32) La descripción del FEDER, así como del BEI y del FSE, instrumentos financieros al servicio de la política regional, se realiza en el capítulo IV.

Como resultado de esta readaptación a las secuelas de la crisis industrial por parte de la Política Regional Comunitaria, también las regiones afectadas por el *declive de determinados sectores tradicionales*, como la siderurgia, sector naval, etc., son la Política Regional Comunitaria, tanto en lo que se refiere al disfrute de los fondos comunitarios, como a la posibilidad de desarrollar desde los propios Estados o poderes autónomos una política de incentivos regionales a la inversión.

Es este nuevo contexto en el que la Política Regional Española debe contemplar como regiones que requieren de la instrumentación de una política de ayudas regionales, no sólo a aquellas comunidades que han estado históricamente deprimidas sino también a aquéllas otras que se ven especialmente afectadas por la crisis industrial.

### 2.3. EL CASO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA

Del análisis comparado de la evolución de algunos indicadores regionalizados de la economía española, se deriva con claridad que el impacto de la crisis industrial, ha afectado con especial virulencia a la economía de la Comunidad Autónoma vasca.

Los resultados obtenidos en el período 1973-81 en términos de *crecimiento medio del PIB y del PIB industrial*, en materia de productividad, de empleo y como colofón de «renta per cápita», *son netamente inferiores a los de Cataluña, Madrid y del conjunto de la economía española.*

Mientras que, en el período de referencia, el PIB de la economía española y de las dos regiones industrializadas más importantes (Cataluña y Madrid) experimentaba un crecimiento anual medio superior al 2 % el PIB de la Comunidad tan sólo alcanzaba un incremento anual medio del 0,12 % Como resultado de esta evolución, el incremento de nuestro PIB en el período 1973-81, tan sólo fue del 1 % frente al 17,9 % en Cataluña, el 26,6 % en Madrid y el 18,7 % en el conjunto de la economía española.

La evolución del *Producto Industrial* presenta unos resultados similares y explica en el caso de la economía vasca su comportamiento durante la crisis.

Más preocupante aún resulta la caída de la *productividad media* total e industrial, que ha sido del orden de 16 y 20 puntos respectivamente en términos relativos a la productividad del conjunto de la economía española.

La baja de dinamismo en la producción ha venido inevitablemente acompañada de una *caída en el empleo total* del 19,3 % y en el empleo industrial del 32,2 % por encima de los niveles de Madrid, Cataluña y el conjunto de España.

Por último, la pérdida de posiciones en el «ranking de la renta regional «per cápita», siendo Euskadi la única región que ha experimentado una tasa de crecimiento negativo durante dicho período, sintetiza posiblemente el carácter estructural que ha adquirido la crisis económica en nuestra tierra.

### Evolución comparada de algunas magnitudes económicas. 1973-1981

	CATALUÑA	MADRID	ESPAÑA	C.A.V.
<b>EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB):</b>				
(Tasa anual de crecimientos a precios constantes) .....	2,08	2,99	2,17	0,12
(Variación a precios constantes) .....	17,9	26,6	18,7	1,00
<b>EVOLUCION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL ...</b>	<b>15,9</b>	<b>24,0</b>	<b>19,3</b>	<b>1,4</b>
<b>CRECIMIENTO DE LA RENTA REGIONAL «PER CAPITA»:</b>				
(Tasa anual, precios constantes) .....	0,58	1,41	0,98	-1,59
	1973-1981	1973-1981	1973-1981	1973-1981
<b>EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD (EMPLEO):</b>				
Indice regional (media nacional = 100) .....	119,1-125,5	124,4-122,5	100	129,8-112,5
<b>EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL:</b>				
Indice regional (media nacional = 100) .....	101-103	104-106	100	125-105
<b>RENTA REGIONAL:</b>				
PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL	20,1-20,0	16,1-18,0	100	7,8-6,4
	1975 - 2.º Trimestre 1984			
CAIDA DEL EMPLEO INDUSTRIAL .....	29 %	13,89 %	25,7 %	32,2 %
CAIDA DEL EMPLEO .....	10,5 %	18,1 %	17 %	19,3 %

*Fuente:* Renta Nacional y su Distribución Provincial: 1981. Banco de Bilbao.

Como consecuencia del comportamiento del conjunto de variables que hemos señalado, la renta regional ha perdido 1,4 puntos en su participación en la Renta Nacional de España, en tanto que Cataluña, por ejemplo, conservaba su posición y Madrid mejoraba 1,9 puntos.

De la comparación de diversos indicadores económicos se deduce, creemos que con claridad, que el impacto de la crisis económica e industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha tenido una virulencia superior a la observada en otras comunidades industrializadas y en el conjunto de la economía española. En este sentido, nos parece correcto concluir, que la situación de la economía vasca ante el ingreso en la CEE presenta unas características específicas, muy acusadas, que justifican el tratamiento que se da en Europa a las regiones industrializadas especializadas en sectores tradiciones en declive.

#### 2.4. EL PAIS VASCO EN EL MARCO DE LAS REGIONES COMUNITARIAS

Si bien la situación de las regiones en el seno de cada Estado constituye, según los criterios comunitarios, el factor más importante a la hora de calificar a una región como susceptible de ser asistida, también hay que tener presente la posición relativa de cada región en el contexto comunitario. En cualquier caso se nos ocurre pensar que *el respeto a las reglas comunitarias sobre la competencia, exige que regiones con niveles de renta per cápita equivalentes, y en algunos casos con problemáticas similares de especialización en sectores industriales en declive, dispongan de instrumentos de ayuda a la inversión de igual cuantía.*

Sobre la base de esta línea de razonamiento nos ha parecido interesante establecer una *comparación* entre algunos *indicadores* como la «renta per cápita», (una vez corregida con la paridad del poder de compra), tasa de paro, y hemos intentado también hacer una estimación del índice sintético que resulta de la ponderación de las dos variables anteriores y de la productividad media.

	PIB/Hab. (p.p.c.) (*)	% Tasa de paro (Diciembre 1983)
Sarre .....	107	10,0
Lorena .....	105	10,0
Valle de Aosta .....	130	4,1
Friuli-Venecia .....	99	9,9
Lazio .....	90	10,5
Valonia (Lieja) .....	105	17,0
Gales .....	96	15,8
Escocia .....	98	16,1
Euskadi .....	92	23,0 (2 Trm. 1984)
<i>Media CEE-12</i> .....	100	

(\*) (p.p.c.) Se ha corregido la «renta per cápita» teniendo en cuenta la paridad del poder de compra.

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Política Regional de la CEE.

La primera columna contiene índices ponderados de «renta per cápita» en base a una media de la CEE de los 12 igual a 100 (media de los años 1977, 1979 y 1981).

Se han seleccionado las regiones mencionadas porque en ellas se instrumentan ayudas con finalidad regional que en términos de equivalente subvención pueden alcanzar hasta un porcentaje situado entre un 20-35 % de la inversión (33), cantidad que según todos los indicios podría corresponder al País Vasco en el nuevo esquema regional según los patrones comunitarios.

Como puede deducirse la *posición relativa de la Comunidad Autónoma Vasca* en renta per cápita y paro, *en el contexto de las regiones de la CEE*, nos coloca en la cola

(33) A efectos de poder comparar los niveles de ayuda se cuantifican las diferentes fórmulas existentes: Bonificaciones de interés, alquiler de locales industriales, etc., en términos de subvención.

de aquéllas que hoy disponen de sus propios sistemas de ayuda a la inversión. Los escasos resultados de que disponemos sobre el «índice sintético» también corroboran dicha opinión. El País Vasco alcanzaría para un media de 100 a nivel de la CEE, un índice próximo a 78, y algunas de las regiones que más arriba se citan se situarían en: Friuli-98, Lorena-106, Veneto-99 y West-Midland-79.

En el caso de West-Midland y Lorena, se trata al igual que en el nuestro de regiones afectadas por problemas derivados del declive de determinados sectores industriales.

Todo este conjunto de elementos nos permitirían concluir que, *según los patrones comunitarios, la Comunidad Autónoma Vasca podría ser calificada como zona asistida tanto a efectos de instrumentación de su propia política de incentivos a la inversión como en lo que se refiere al disfrute de los recursos de los Fondos y préstamos Comunitarios (FEDER, FSE, CECA, BEI).*

En el apartado anterior concluíamos diciendo que los indicadores que muestran nuestra posición relativa en relación con las regiones industrializadas de España, o con respecto a regiones de Europa que se benefician de la calificación de zona asistida, justificarían que la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su totalidad, sostuviera dicho tratamiento. Y ello porque, aún admitiendo que el concepto ZUR responde a un planteamiento sectorial, no cabe duda de que *hoy la mayoría de nuestras comarcas desgraciadamente tienen unos niveles altos de paro y están afectadas gravemente por procesos de reconversión sectoriales o generales.*

Por lo tanto, respetando la definición como zona ZUR del Gran Bilbao y remarcando su carácter muy favorable para el País Vasco debe producirse la calificación del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca como zona asistida, estableciendo en ella subcomarcas, con tratamientos diferenciados, en función de la intensidad de los problemas existentes dentro de ellas. Este tipo de solución ya se practica en algunas regiones europeas como Valonia (Bélgica), que está afectada por problemas de declive industrial similares a los de la economía vasca.

**3.—LAS AYUDAS REGIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y SU COMPARACION CON LAS EXISTENTES EN EUSKADI**

### 3.1. LAS AYUDAS A LA INVERSIÓN CONCEDIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA Y EL MARCO DE LA C.E.E.

La recuperación de los Concursos Económicos hizo posible que desde los niveles institucionales, Administración Autónoma y Diputaciones, se concedieran diferentes tipos de ayudas a partir de los ejercicios 1981-82.

Estas ayudas se han destinado a diferentes finalidades, reestructuración de sectores en crisis, creación de nuevas empresas, ampliaciones de empresas existentes, desarrollo tecnológico, I+D, etc. Esta variedad hace que prácticamente la tipología de las mismas abarque los tres ámbitos de ayuda existentes en la C.E.E.: ayudas sectoriales, regionales y generales.

Dentro del capítulo de *ayudas sectoriales*, La Comunidad Autónoma Vasca tiene la facultad de apoyar financieramente la reconversión de aquellos sectores que son de ámbito local, y aunque hasta el presente no se han instrumentado, durante el actual ejercicio se concederán en apoyo de varios sectores que están en trance de reconversión. Estas ayudas se instrumentan mediante subvenciones y bonificaciones de interés.

En la práctica comunitaria las ayudas de naturaleza sectorial han tenido y tienen un carácter temporal, habiéndose procedido a su consentimiento por la necesidad imperiosa de reconvertir algunos grandes sectores, (sector naval, siderúrgico, etc.). Según los calendarios acordados, el 1 de Enero de 1986 las ayudas sectoriales deben llegar a su fin, es decir que, en principio, a partir de dicha fecha las ayudas de naturaleza sectorial podrían no ser autorizadas.

Esta situación afecta especialmente a los sectores locales que se hallan a la espera de acometer la reconversión industrial y todo parece indicar que el desarrollo del proceso reconvertor tras la adhesión el 1 de Enero de 1986, deberá contar con el visto bueno de la Comisión, como condición necesaria para su ejecución.

En el ámbito de las ayudas, que son calificadas en la CEE como *ayudas regionales*, caben un buen lote del conjunto de apoyos financieros a la industria que se conceden desde los dos niveles, Administración Autónoma y Diputaciones. Dentro de este tipo citaríamos las ayudas que se contienen en el siguiente recuadro:

Finalidad	Instrumentos Financieros	Institución que financia
Nuevas inversiones (activo fijo y circulante)	Bonificación de interés	Gobierno Vasco
Nuevas inversiones (activo fijo y circulante)	Subvenciones a la inversión	Diputaciones (V.A.G.)
Nuevas inversiones en activo fijo	Bonificación de interés	S.P.R.I.
Nuevas inversiones en activo fijo	Industrialdeak	S.P.R.I. Diputación Vizcaya

Es dentro del capítulo de *ayudas generales* donde se incriben un grupo numeroso de actividades que gozan de apoyos financieros públicos en la Comunidad Autónoma Vasca y que son los siguientes:

Finalidad	Instrumentos Financieros	Institución que financia
Reestructuración de empresas	Subvenciones a la inversión. Participación de capital	Diputación de Vizcaya
Reestructuración de empresas	Bonificaciones de interés	Gobierno Vasco
Desarrollo Tecnológico PYMES		
Programa IMI	Subvenciones	S.P.R.I.
Programa ECTA	Subvenciones-Bonificaciones	S.P.R.I.
Programa CM-100 v.	Bonificación de interés	S.P.R.I.
Empresas nuevas que incor- poran equipos tecnológicos avanzados	Bonificaciones de interés	S.P.R.I.
I + D	Subvenciones	Diputación de Vizcaya
I + D	Subvenciones	Gobierno Vasco
Medio Ambiente	Subvenciones	Gobierno Vasco
Medio Ambiente	Bonificación de interés	Diputación de Vizcaya
Ahorro de Energía	Subvenciones	Gobierno Vasco

Además de las subvenciones, dentro del catálogo de ayudas generales se inscriben también las *exenciones fiscales*, que se conceden como incentivo a la inversión dentro del Impuesto de Sociedades.

En principio, toda esta variada gama de ayudas se corresponden con las que se practican en otros países de la CEE y su aplicación no choca con el espíritu comunitario. Por lo que respecta a la cuantía, ésta depende, en el caso de las subvenciones a la inversión, del régimen en el cual se inscriban, variando según se trate de ayudas concedidas dentro del régimen general, de ayudas PYMES o del régimen de ayudas regionales.

Dentro de éste último, los límites superiores de las ayudas, en relación con la inversión, son mayores, por entenderse que aquéllas van destinadas a promover la inversión en regiones o zonas que atravesasen serias dificultades y por lo tanto se interpreta que su concesión no transgrede las reglas de la competencia.

### 3.2. LAS AYUDAS REGIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Con objeto de poder establecer una comparación y situar las ayudas a la inversión que se conceden en la Comunidad Autónoma, en el marco de las prácticas de los países comunitarios, hemos diseñado un cuadro de características generales de las ayudas que con finalidad regional se conceden en los países miembros de la CEE.

#### 3.2.1. *Áreas a las que afectan las ayudas*

Las ayudas afectan tan solo a las áreas que son explícitamente definidas como «zonas asistidas» por los Estados miembros. En el caso de Irlanda, todo el país está calificado como zona asistida. Grecia, por su parte, tiene un tratamiento similar, salvo para el caso de Atenas.

En la mayoría de los países se establecen escalas en función de la calificación dada a cada región, variando los límites superiores de la subvención equivalente en función de aquella. Este es el modelo, que según se define en el programa Económico a Medio Plazo 1984-87, se va a adoptar para la economía española. Según dicho modelo, la geografía española se dividirá en cuatro áreas cuyos techos de subvención neta equivalente podrán ser del 45,40 y 35 % de la inversión para las áreas asistidas. Habría una cuarta calificación, en la que se incluirían las áreas más desarrolladas y menos afectadas por la crisis industrial, de zonas no susceptibles de ayudas regionales.

Dentro del análisis comparado que hemos realizado habría que destacar la fórmula de los «Polos de Desarrollo», existente en Alemania, que disfrutan de una variada gama de ayudas, y que permite desarrollar una acción puntual en ámbitos inferiores al regional. Esta figura, se asemeja a la de las zonas ZUR, y está siendo utilizada para paliar el impacto de la crisis industrial en determinadas zonas calificadas como «zonas de declive industrial» en los países comunitarios.

#### 3.2.2. *Nivel de Administración que concede las Ayudas*

Tanto la definición de las ayudas, como la instrumentación de las mismas, compete en la mayoría de los casos a la Administración Central, ya sea a los Ministerios de Economía e Industria o a Instituciones Financieras expresamente delegadas para tal fin.

Si nos detenemos en el caso de *Alemania*, por su estructura federal, desde 1969, y anualmente, se fija un *Plan Marco que precisa las modalidades de armonización de las diferentes acciones de política regional*, así como los techos y límites de intervención de cada Estado.

En el caso de *las subvenciones de capital*, y en menor medida en el caso de las subvenciones a la inversión, el Ministerio Federal debe dar el visto bueno en última instancia. Para las primeras, la dotación presupuestaria para el pago de la subvención corre equitativamente a cargo del Estado Federal y del Land correspondiente (43-43) y un 14 % a cargo de las Corporaciones Locales. En las segundas, de menor importancia, el Estado Federal reparte los fondos entre las zonas de ayuda en base al criterio de población.

### 3.2.3. Diferentes tipos de ayudas y su compatibilidad

Las ayudas existentes pueden dividirse en tres grandes categorías:

- Las primas y subvenciones a la inversión.
- Las bonificaciones de interés.
- Las ayudas fiscales.

En la mayoría de los países las dos primeras fórmulas son incompatibles o en caso de compatibilidad están sujetas a un límite máximo fijado en subvención neta equivalente. Por lo general las ayudas fiscales son compatibles con las otras dos.

Este es un dato importante dada la compatibilidad existente hoy en la Comunidad Autónoma.

### 3.2.4. Techos nominales de las ayudas

Del análisis de las cifras del cuadro que a continuación se incluye, se puede deducir que el porcentaje que el nominal de la subvención representa sobre el total de la inversión es en la Comunidad Autónoma Vasca similar a los establecidos en la mayoría de los países, salvo Irlanda e Italia que se destacan notablemente de la norma media.

En cuanto a las bonificaciones de interés, nos situamos también al nivel de países como Bélgica, Francia e Italia.

En conjunto, y compatibilizando las subvenciones que se conceden en la Comunidad Autónoma Vasca que alcanzan entre 15-25 % de la inversión con las bonificaciones de interés (que en términos de subvención equivalente podría rondar un 7 % teniendo en cuenta el período de carencia), los techos no superarían el 35 % previsto en la Plan a Medio Plazo para las zonas asistidas de nivel inferior. En todo caso, hay que tener presente que el límite superior de subvención equivalente que se concede en el marco de las ayudas regionales actúa como techo del total de ayudas que por diferentes conceptos (ayudas regionales y ayudas generales) puede percibir una empresa concreta.

**Cuadro comparativo de ayudas públicas regionales en diferentes países de la CEE**

Subvención a la inversión	Bélgica	Dinamarca	Francia	Alemania	Irlanda (Dublín)		Italia	Reino Unido		Euskadi
					I	II		I	II	
Porcentaje total de la subvención .....										
Nominal (% de la inversión) (34).....	24,3	25,0	25,00	25,0	60,0	35,0	56,0	22,0	18,8	15-25
Subvención Efectiva (ídem)	11,2	13,4	14,4	11,6	41,0	24,0	35,7	12,8	8,1	
<i>Bonificación de Inter.</i>										
Cuantía en puntos de tipo de interés .....	7,0	3,0	8,75	3,0			11,0	3,0		7-8

(34) El paso de la subvención nominal a la efectiva se hace descontando de la primera la tributación a que está sometida la subvención, el coste de los desfases temporales entre la realización y el ingreso de la subvención, etc.

**4.—EL PRESUPUESTO COMUNITARIO, LOS FONDOS Y LOS  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS. SU INTERES PRACTICO  
PARA EUSKADI**

#### **4. EL PRESUPUESTO COMUNITARIO, LOS FONDOS Y LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. SU INTERES PRACTICO PARA EUSKADI**

##### **4.1. INTRODUCCION. EL PRESUPUESTO COMUNITARIO**

Como se señalaba en la introducción la puesta en funcionamiento de la CEE, junto a la restricción en la capacidad de actuación de los Estados miembros en la actividad económica, supuso la adopción de determinadas políticas a nivel comunitario. Las políticas agrícola, social, regional, de cooperación y en menor medida las políticas industrial, energética y de investigación, constituyen las principales partidas de gasto del Presupuesto Comunitario.

En términos del PIB, del conjunto de los países de la CEE, el Presupuesto comunitario representaba, durante el ejercicio 1984, tan solo un 0,92 de aquél. En cuanto a su composición, el Presupuesto agrícola sigue absorbiendo un 67,5 % del total de gastos, siguiéndole en importancia los fondos destinados a la política regional (7 %), política social (6 %), cooperación y desarrollo (4,5 %), etc. Por lo que respecta a la evolución de las diferentes partidas, durante el período 1979-83 se ha venido produciendo una pérdida de importancia relativa del componente agrícola (FEOGA-garantía) en favor del componente social, regional, aunque esta tendencia se ha visto truncada con el Presupuesto 1984, cuyas cifras relativas se citan más adelante.

Por el lado del ingreso, las aportaciones IVA de los diferentes Estados miembros constituyen el componente fundamental de dicha partida con un 56,6 % los derechos de aduana representan un 30,4 % y los recargos sobre importaciones agrícolas un 11,7 % Estas dos últimas partidas componen los recursos propios de la CEE y han venido perdiendo importancia relativa, exigiéndose así un incremento progresivo de las aportaciones IVA de los Estados miembros.

El incremento de las necesidades de gasto en términos de PIB comunitario ha pasado de representar un 0,53 % en 1973 a un 0,92 % en 1984, y la insuficiencia de los recursos propios está en la base de los conflictos que anualmente se plantean en la discusión del Presupuesto comunitario. La distorsión entre los criterios de aportación (1 % IVA cada país) y los de gasto, al no afectar éstos de manera equitativa a los diferentes Estados, es una fuente inagotable de conflictos que parecen haberse acumulado en la discusión del Presupuesto 1985, (reformulación del FEOGA-garantía, Programas Integrados Mediterráneos, etc...).

Al lado de los *Fondos Comunitarios* (FSE, FEDER, FEOGA-Orientación) y de los recursos destinados al fomento de la investigación, política energética e industrial, que tienen su soporte financiero en el Presupuesto Comunitario, en las Comunidades existen otros *organismos financieros* cuyos recursos provienen de la emisión de empréstitos en los mercados financieros internacionales, destinando dichos fondos a la financiación de infraestructuras, del sector productivo y de la energía. Este es el caso del CECA (parcialmente) NIC, BEI, EURATOM,...

Para el ejercicio 1983, el total de préstamos concedidos por estos organismos se cifraba en 6.612 millones de Ecus, mientras que los recursos destinados por los Fondos Comunitarios para actividades similares se situaban en 4.877 millones de Ecus.

En las páginas siguientes se describe la actividad de los instrumentos financieros y la estructura de los Fondos Comunitarios que más importancia tienen con la idea de ofrecer una visión práctica de los mismos. En ellas se describen a modo de resumen desde los objetivos, líneas financieras, programas de financiación, etc., hasta las exigencias que se derivan para la actuación de la Administración Autónoma, en sentido amplio, tanto en el período pre-adhesión como en la fase de pleno derecho.

**Cuantía de las operaciones de subvención y préstamo en las  
Comunidades Europeas (en millones de Ecus.)  
Año 1983**

Fondos Comunitarios		Instrumentos Comunitarios	
FEDER .....	1.459,0	BEI .....	4.255,7
FSE .....	1.350,0	NIC .....	1.211,8
FEOGA-Orientación .....	737,9	CECA .....	778,1
Investigación .....	439,3	EURATOM .....	366,4
Energía-Industria .....	890,9		
	4.877,0		6.612,0

Se incluyen los Programas Mediterráneos Integrados.

#### 4.2. FONDO SOCIAL EUROPEO

Nace del propio texto del Tratado de Roma, de 1958, como un instrumento para la formación y calificación profesional de la mano de obra.

##### 4.2.1. *Sus objetivos*

- a) Subvenciones a la *formación profesional*. Constituyen el 80 % de las acciones del Fondo. Los cursos deben cubrir un mínimo de 200 horas y debían de contar cuando menos con una quincena de alumnos.
- b) Ayudas a la *contratación*. Destinadas sobre todo a la contratación de trabajadores inmigrantes, con preferencia procedentes de otros países de la CEE.
- c) Prestación de servicios y consejos técnicos destinados a la *creación de empleos*, sobre todo en Pymes. Estas operaciones pueden desarrollarse previo acuerdo con los Estados miembros, *en las zonas afectadas por la reconversión*.

#### 4.2.2. Cuantía de la intervención

El F.S.E. puede aportar hasta un 50 % del coste del proyecto. En ningún caso la aportación del Fondo puede ser superior a la de los organismos públicos de los Estados.

El 40 % de la cuantía total de los fondos se destinan a las zonas calificadas como «superprioritarias» que son: Irlanda del Norte, Mezzogiorno y Grecia. El 60 % restante se distribuye entre las zonas calificadas como *prioritarias*, entre las que se encuentran las zonas afectadas por la reconversión industrial.

La tasa de paro de estas regiones debe ser superior a la media europea o superior en un 30 % a la media nacional.

Como habitualmente se presentan mayor número de demandas que las que pueden financiarse, es importante saber que *se financian todas aquellas demandas que sin el concurso comunitario no pueden llevarse a efecto*. De ahí, la importancia de su justificación.

También se financian todas aquellas demandas provenientes de las zonas prioritarias, entre ellas las *zonas en reconversión*.

Los programas son anuales.

#### 4.2.3. Criterios para la elaboración del dossier

Los programas destinados a la *formación de jóvenes* de menos de 25 años absorben un 75 % del Presupuesto total, a razón de un 35 % para las zonas «superprioritarias» y un 40 % para las «prioritarias». Los programas para *adultos* consumen un 12 % del Presupuesto total.

Cada año debe enviarse un dossier estadístico que recoja:

- PIB «per cápita».
- Tasa de paro.
- N.º de parados de larga duración (más de 12 meses).
- N.º de empleos destruidos.

Los proyectos deben estar preferentemente incluidos en las zonas calificadas.

#### 4.2.4. Prioridades

A continuación se establecen una serie de prioridades sin que exista relación jerárquica alguna entre ellas.

Hay una serie de requisitos que en todo caso deben cumplirse:

- Las perspectivas de empleo deben ser claras.
- Justificación de por qué se ha elegido una prioridad y no otra.
- Se presta mayor atención a los proyectos ligados a la explotación de nuevas tecnologías.
- El carácter innovador e imaginativo se aprecia siempre.

Entre las *prioridades* se citan como más importantes:

a) Operaciones, acciones o *programas integrados* que prevén el concurso de varios Estados miembros. Estos programas deben ajustarse siempre a los grupos de personas que han sido definidos como elegibles.

b) *Formación profesional* de los jóvenes menores de 25 años, siempre que desemboque en unas perspectivas reales de empleo, incluyendo una experiencia de trabajos de seis meses.

c) *Reconversión y reestructuración industrial*, con vistas a facilitar la introducción de *nuevas tecnologías*. Se trata de apoyar la creación de empleos alternativos y de reciclar la mano de obra para que las empresas puedan incorporar los cambios tecnológicos.

d) Acciones en favor de la *formación de parados* de más de 25 años y con un período en el paro superior a los 12 meses.

e) *Inserción profesional* de ciertas categorías de personas, trabajadores inmigrantes, mujeres, disminuidos.

#### 4.2.5. Esquema de calendario de presentación de las demandas

Utilizando como ejemplo el Proyecto para el año 1985 se mantendrían las siguientes fechas:

- Septiembre 1984: Presentación a las Autoridades Nacionales.
- Octubre 1984: Transmisión de demandas a Bruselas por la Autoridad Nacional (20 Octubre).
- Marzo-Abril 1985: Notificación de la CEE al promotor.
- Tras la fecha de notificación, avance del 50 % (Sept.-Oct.).

#### 4.2.6. Programas de formación (de jóvenes)

La inmensa mayoría de las demandas responden a programas de ámbito estatal. Sin embargo, en el caso de Alemania e Italia, en ocasiones los programas regionales toman el relevo de los programas nacionales.

La formación se realiza a dos niveles:

- Empresas.
- Centros especializados.

La *informática* y la *microelectrónica* son las disciplinas más estudiadas. Como resultado de estos cursos, en el conjunto de los países de la Comunidad, se han recolocado un 70-80 % de los trabajadores reciclados, siendo dicho porcentaje de un 55 % cuando se trata de menores de 25 años.

#### 4.2.7. Una reflexión desde la CAPV

Queda suficientemente claro que la Comunidad Autónoma Vasca se halla en una situación económica que le permite acceder a los recursos del FSE y ser calificada como «zona prioritaria». Nuestra tasa de paro superior al 21 % (2.º Trm. 1984) casi duplica la tasa de paro (media) de la CEE, 11,1 % (Dic. 1983).

Sin embargo, hay que tener presente que el FSE exige para el acceso a sus fondos la *previa elaboración de programas de formación y reciclaje* de la mano de obra, ligados al compromiso de asegurar el puesto de trabajo para los trabajadores formados. Como se deriva del Informe Anual 1983 del FSE, dicho compromiso parece cumplirse en un 70-80 % en los países de la CEE.

Por lo que respecta al encaje de nuestros programas en las distintas prioridades fijadas por el FSE hay que señalar que el País Vasco tendría cabida en principio, en cualquiera de ellas. *A efectos de buscar una diferencia relativa mayor con los países de la CEE, que nos permitiera una mayor financiación, cabría priorizar por nuestra parte los programas 4c y 4d* (nuevas tecnologías y formación de parados) ya contemplados en el Anteproyecto de Presupuesto del Gobierno Vasco para 1985.

Por último, en nuestro caso sería importante contemplar la posibilidad de consolidar un plan de *reciclaje de los educadores*, en las nuevas tecnologías, para poder disponer en el medio plazo de un plantel de profesores educados para la enseñanza en el manejo de las nuevas tecnologías.

#### 4.3. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Se trata básicamente de un instrumento de redistribución de recursos comunitarios hacia las regiones más pobres, y hacia aquéllas otras que se ven afectadas por el declive industrial, que suplementa las políticas regionales que desarrollan los propios Estados miembros.

##### 4.3.1. Procedimiento de acceso a las ayudas

- a) *Inversiones industriales*. Las ayudas se conceden a los Estados y no a las empresas. Estas se dirigen al Estado o a las instituciones regionales.
- b) *Inversiones en infraestructura*. Aunque sean los Estados quienes presentan los expedientes, los fondos se conceden a las autoridades regionales.
- c) *Entorno económico* (desarrollo endógeno), (promoción tecnológica, del consumo, estudios de mercados, etc.). Aunque las ayudas comunitarias pueden aportar el 100 % de los gastos, siempre se inscriben en el marco de las políticas regionales.

##### 4.3.2. Criterios de reparto de fondos

La distribución se hace en base a la adjudicación de una horquilla, que incluye:

- Límite inferior. Será el que se atribuye a cada Estado.
- El *tramo inter-límites*, se adjudica a cada Estado en función de la presentación de un volumen adecuado de demandas y a la mayor o menor acomodación a los criterios y prioridades establecidos en el propio Reglamento.

A título meramente indicativo, la posición actual de los límites máximo y mínimo de la «horquilla» es, según el nuevo Reglamento del FEDER, la siguiente:

Estados	Límite inferior %	Límite superior %
BELGICA .....	0,90	1,20
DINAMARCA .....	0,51	0,67
ALEMANIA .....	3,76	4,81
GRECIA .....	12,35	15,74
FRANCIA .....	11,05	14,74
IRLANDA .....	5,64	6,84
ITALIA .....	31,94	42,59
LUXEMBURGO .....	0,06	0,08
PAISES BAJOS .....	1,00	1,34
REINO UNIDO .....	21,42	28,56

En el espíritu de este nuevo Reglamento está la concentración del esfuerzo financiero del FEDER, intentando evitar la dispersión regional.

#### 4.3.3. Tipos de intervención

Cuatro tipos de intervención están previstas en el nuevo Reglamento del FEDER:

- a) Cofinanciación de *programas comunitarios*. Se trata de programas, que en principio afectan a varios Estados miembros y que se emprenden bajo la iniciativa de la comisión Europea. Pueden aplicarse a todas las regiones de Europa. *Gozan de una prioridad a efectos de obtención de los fondos de la horquilla. Pueden ir destinadas a la creación de empleos alternativos en regiones en declive.*
- b) La cofinanciación de *programas nacionales de interés comunitario*, emprendidos bajo la iniciativa de los Estados miembros, en aquellas regiones beneficiarias de ayudas de finalidad regional.
- c) *Proyectos* individuales, en actividades industriales, artesanales y de servicios, que sobrepasen los 50.000 Ecus.

Son los estados quienes presentan las demandas al FEDER, quien las somete a estudio. En dicho estudio, se valoran la contribución al desarrollo de la región, sus efectos sobre el empleo, la rentabilidad, la ubicación, o no, en una región fronteriza, etc. Los proyectos deben situarse en regiones beneficiarias de ayudas de desarrollo regional.

- d) *La cofinanciación de estudios.*

#### 4.3.4. Los proyectos elegibles en el FEDER

1. La *naturaleza* de los proyectos.

- 1.a) *Inversiones* en actividades industriales, artesanales (35) y de servicios. Se cofinancian proyectos que ya disfrutaran de ayudas de carácter regional.

(\*) Se entiende por actividades artesanales en la C.E.E. la actividad económica de los trabajadores autónomos, cualquiera que sea su rama de actividad, electrónica, alfarería, etc.

1.b) *Infraestructura*. Se comprenden dentro de este capítulo:

- Infraestructura de transporte.
- Infraestructura de transporte, de explotación, de distribución y stocaje de la energía.
  - Trabajos de irrigación y drenaje.
  - Construcción y equipamiento de centros de formación profesional, establecimientos técnicos especializados.

1.c) Acciones de «*desarrollo endógeno*».

- Ayudas a la realización de encuestas que permiten perfilar mejor las posibilidades de desarrollo endógeno de las regiones.
- Ayudas a la creación y funcionamiento de los organismos locales de investigación aplicada.
- Por lo que respecta a las Pymes:
  - Ayudas a los organismos de recogida y difusión de información sobre *innovación* en materia de productos y tecnologías.
  - Ayudas a la realización de *estudios sectoriales* de mercado.
  - Ayudas a los organismos que presten *asesoramiento* a la gestión empresarial.
  - Ayudas a la creación de *servicios comunes* a las empresas.
  - Ayudas a la explotación de *potencialidades* regionales en materia de turismo.

#### 4.3.5. *Formas de financiación*

- a) *Inversiones en actividades industriales, artesanales y de servicios*. El montante de la ayuda FEDER no puede sobrepasar el 50 % del total de ayudas regionales concedidas por los poderes públicos del Estado y/o la región.
- b) *Infraestructuras*. El montante de la ayuda no puede ser superior del 50 % de la aportación de los poderes públicos nacionales.
- c) *Entorno económico*. El montante superior de la ayuda se sitúa en un 50-55 % del esfuerzo financiero público.

Se deben de comunicar a la Comisión:

- Los programas que se realizan en las regiones que son susceptibles de Ayuda FEDER.
- Los programas que se aplican en las regiones que disponen de la facultad de conceder Ayudas regionales.

#### 4.3.6. *Una reflexión desde la CAPV*

Hasta la aprobación del nuevo Reglamento del FEDER, en junio de 1984, los fondos FEDER estaban fundamentalmente orientados a ayudar financieramente a las regiones deprimidas (Mezzogiorno,...). El nuevo Reglamento del FEDER contempla la

posibilidad de que regiones afectadas por el declive de determinados sectores industriales comiencen también a disfrutar de las ayudas FEDER.

El acceso de un región o zona a dichos fondos exige que *el Estado califique previamente el área elegible como asistida*, a efectos de instrumentación de una política regional de ayudas y subvenciones a la inversión. Una vez obtenida esta calificación, puede darse el caso de regiones que no disfruten de los fondos FEDER por entender el Estado que estos deben concentrar su efecto en una determinada zona (caso de Italia con el Mezzogiorno).

Para Euskadi resulta obvio que cualquiera de los tres ámbitos de actuación del FEDER, (infraestructura, industria, desarrollo del potencial endógeno) tienen interés para nosotros y se inscriben dentro del marco de ayudas que en ésta se vienen desarrollando. También en el caso del FEDER es importante que las Administraciones Vascas, diseñen los proyectos y programas susceptibles de beneficiarse de las ayudas FEDER, en el marco del Plan Regional Vasco.

#### 4.4. FONDOS CECA

Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Fundada por el Tratado de París en 1951, dispone además de las ayudas financieras a la investigación técnica y económica, y a la reeducación de los trabajadores, de dos instrumentos distintos en beneficio de las empresas:

Uno primero, destinado a *sostener proyectos industriales en los sectores del carbón y del acero*. (art. 54).

Un segundo, destinado a *promover la actividad económica que facilite la reconversión de los mineros y siderúrgicos*. (art. 56).

##### 4.4.1. Intervenciones CECA en el marco del art. 54

a) *El objetivo* de dichas intervenciones se centra en:

— *Los proyectos de inversión* (bienes de equipo e instalaciones), pudiendo ir destinados también a la protección del medio ambiente.

— *Los proyectos industriales* tendentes a:

- Mejorar la producción, reducir el precio de costo del producto final. (Sirva de ejemplo la construcción de una central térmica para varias empresas siderúrgicas).
- Mejorar las posibilidades de salida de los productos derivados del acero y del carbón.

b) *El montante máximo* de los préstamos puede alcanzar hasta un 50 % del coste de inversión.

c) *Las bonificaciones son del 3 % en 5 años*, para inversiones destinadas a conseguir economías de energía y la protección del medio ambiente.

d) Financiación de la construcción y financiación de viviendas para trabajadores del carbón y del acero.

#### 4.4.2. Intervenciones CECA en el marco del art. 56

Consisten en la concesión de *préstamos* a las empresas que crean empleo en las zonas afectadas por la reconversión del acero y de la minería del carbón.

##### a) *Criterios de elección de inversiones:*

- Inversiones industriales que crean empleo.
- Promoción de polígonos industriales («industrialdeak» para nosotros).

El montante a financiar por el CECA puede ser de hasta un 50 % de la inversión, con una bonificación de interés de 3 puntos y un plazo de 5 años sobre una base de 20.000 Ecus máximo por empleo creado.

##### b) *Préstamos globales.* Se utiliza cada vez más, hasta el punto de convertirse en la fórmula más habitual empleada para la concesión de préstamos a la reconversión. Según esta modalidad los préstamos se conceden a entidades de promoción industrial que luego los reparten a las empresas interesadas en invertir.

Esta técnica tiene varias ventajas: comodidad para los pequeños promotores, las bonificaciones alcanzan hasta un 5 % en cinco años, garantía de cambio, etc.

#### 4.4.3. Una reflexión desde la CAPV

La problemática industrial que hoy se da en la Comunidad Autónoma Vasca encaja perfectamente con los objetivos a que son destinados los fondos CECA. Tanto el apoyo a los sectores propiamente CECA (siderurgia y carbón) como el fomento de sectores alternativos en las regiones CECA con el fin de crear hasta un 50 % como mínimo, de los empleos destruidos por la reconversión de los sectores CECA, constituyen objetivos que se enmarcan dentro del marco de tareas que deberán desarrollarse en el País Vasco en los próximos años.

Las condiciones en las que se conceden los préstamos CECA son interesantes no sólo para las bonificaciones de 3-5 puntos que se pueden obtener en sus tipos de interés, sino porque, en caso de que algún organismo garantice el riesgo de cambio, el interés pagado por el beneficiario resulta en nuestro país comparativamente bajo en relación con los tipos interiores.

Otro aspecto de importancia a considerar en la fórmula de los préstamos globales es que exigen la existencia en la Comunidad Autónoma Vasca de un organismo de naturaleza técnico-financiera, que haga de intermediario entre el CECA y las empresas interesadas en acceder a dichos fondos. Dicho organismo debe estar dotado de capacidad técnica para analizar la validez de los proyectos de inversión que se presentan.

En este sentido debe reservarse para la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial el papel de intermediario financiero para los fondos que se distribuyen mediante la fórmula de préstamos globales. (CECA, BEI, NIC). Creemos que desde el punto de vista de la autonomía en la gestión financiera de los fondos comunitarios de reivindicación de dicha facultad para la Sociedad con más experiencia para ello tiene una gran importancia.

#### 4.5. LOS PRESTAMOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Desde su creación por el Tratado de Roma, el BEI ha tenido como función la obtención de recursos financieros en los mercados mundiales, para volver a prestarlos, sin fines lucrativos, a las empresas, colectividades públicas o instituciones financieras, siempre con la finalidad de fomentar la inversión.

##### 4.5.1. Condiciones financieras de los préstamos BEI

- El montante total del préstamo cubre como máximo un 50 % del valor de las inmovilizaciones.
- El *tipo de interés* es muy cercano al del coste de captación de los recursos.
- Los préstamos se realizan en general en *varias monedas*, aunque cada vez con mayor frecuencia el BEI intenta hacerlos en Ecus. También se conceden en una sola moneda.
- El BEI exige *garantías* del Estado o de una colectividad pública que disponga de crédito de primer orden.
- En algunos casos los Estados asumen la *cobertura de riesgo*, lo que mejora las condiciones de acceso a préstamos para los promotores.
- En el caso de Italia e Irlanda hay préstamos con bonificación de interés.

Los préstamos del BEI tienen interés especial para aquellos países que no tienen mercados internos de financiación a largo plazo, pudiendo ser a 8, 12 y 15 años.

##### 4.5.2. ¿Quién se beneficiaría de los préstamos BEI?

Hasta el presente dos tercios del conjunto de préstamos que ha concedido el BEI han sido orientados a las *regiones* calificadas como *asistidas* por los Estados miembros.

Los *proyectos* financiados son tanto los industriales, como infraestructuras (carreteras, puertos, telecomunicaciones, electrificación, etc.).

Además el BEI financia en cualquier región, proyectos que tengan interés comunitario, infraestructuras que enlacen varios Estados, «joint ventures» entre sociedades europeas, proyectos que tiendan a disminuir la dependencia energética de la CEE, proyectos cuyo objetivo es reducir la contaminación o mejorar el medio ambiente, etc.

##### 4.5.3. Préstamos directos del BEI

Los préstamos se conceden de forma directa cuando sobrepasan los 2 millones de Ecus, y mediante la afectación de paquetes globales cuando se trata de cantidades inferiores.

###### a) Préstamos globales:

- Los créditos cubren un 50 % del coste de la inversión fija y pueden variar entre 2 y 7,5 millones de Ecus.

- El BEI concede préstamos Pymes, aunque en realidad éstos se dirigen a empresas que tienen inmovilizados netos por un valor superior a los 30 millones de Ecus.

Los criterios por los que se guía el BEI a la hora de conceder los préstamos son: la rentabilidad, su localización y las perspectivas futuras del sector.

- El BEI, a efectos operativos, realiza un acuerdo con un organismo financiero en el cual se fijan las modalidades del préstamo (tipo de interés, cesta de divisas, etc.) y el campo de elección de los proyectos individuales, (cada préstamo global sólo puede dirigirse hacia un campo de actuación).
- La institución financiera local que hace de puente, concede los préstamos en moneda nacional, tomando el Estado a cargo la cobertura de riesgo de cambio. La institución local puede aumentar en algún punto el tipo de interés.
- *Los préstamos a los beneficiarios finales.* Estos préstamos se conceden en condiciones ventajosas de tipo de interés siempre que el Estado garantice el tipo de cambio.

#### 4.5.4. Una reflexión desde la CAPV.

El interés de los préstamos BEI reside en que se trata de préstamos en unas condiciones de largo plazo (8, 12 y 15 años), que son difíciles de obtener en nuestro país. Además, la concesión de una garantía de cambio por parte de alguna institución pública hace que las condiciones de interés resulten interesantes (en torno al 12 %).

A efectos de la obtención de los préstamos BEI resulta importante la calificación de Euskadi como zona asistida.

También tiene interés destacar que el BEI instrumenta parte de sus préstamos mediante la técnica de los préstamos globales y convendrá, por lo tanto, contar a nivel local con una institución que hiciera de intermediario financiero. Como ya se señalaba en la parte relativa a los fondos CECA, la Sociedad de Promoción podría desempeñar esta labor, por lo menos en lo que concierne a los préstamos industriales.

#### 4.6. LOS PRESTAMOS DEL NUEVO INSTRUMENTO COMUNITARIO. (N.I.C.)

Este mecanismo de financiación se creó tras una decisión del Consejo de la CEE mediante la cual se habilitó a la Comisión Europea para la emisión de empréstitos, cuyo producto sería destinado a la concesión de préstamos para financiar la inversión.

La originalidad de este mecanismo reside en el hecho de que el *Consejo fija por «tramos»* el montante y los dominios de intervención, orientados según las prioridades de la Comunidad.

##### 4.6.1. ¿Cómo actúa el NIC?

Desde su creación en 1978 hasta el presente año 1984, se han emitido tres grandes empréstitos NIC, cada uno de ellos en función de distintos objetivos. El NIC I (mil millones de Ecus) se destinó a la financiación de proyectos de inversión en los dominios de la *energía* (se potencia el ahorro y la sustitución del petróleo), la infraestructura y la industria. Se ejecutó durante los años 1979, 1980 y 1981.

El NIC, dentro de la misma línea de actuación, y con un presupuesto en torno a los 800 millones de Ecus, da paso a un apoyo específico a las Pymes. Con el NIC III se refuerza esta tendencia.

#### 4.6.2. ¿Cómo beneficiarse de los préstamos NIC?

Es la Comisión de la CEE la que hace la *elección* de los proyectos financiados por el NIC, siempre de acuerdo con el BEI, siendo éste último quien instruye los *dossiers* y decide sobre las condiciones del préstamo.

En el caso de los préstamos Pymes, éstos se instrumentan a través de una *institución financiera local* que haga de intermediario.

En principio los préstamos se conceden en condiciones de mercado, pero se prevén algunos casos que incluyen *bonificaciones de interés* (por ejemplo, los préstamos destinados a las regiones afectadas por la reconversión siderúrgica).

A diferencia del BEI, el NIC no es un instrumento de financiación que tenga una orientación regional. Sus objetivos dependen de las prioridades políticas que se marca el Consejo, en cada momento, lo que le da una gran flexibilidad.

#### 4.7. EL FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y DE GARANTIA AGRICOLA. (FEOGA)

Por la cuantía de los recursos comunitarios que absorbe, el FEOGA constituye el fondo más importante de cuantos existen en la CEE, absorbiendo un 64,4 % del Presupuesto Comunitario en 1983.

El FEOGA desarrolla dos tipos de inversiones:

- La sección «*Garantía*» encargada de financiar los mecanismos de apoyo y regularización de los mercados agrícolas (61,7 % del Presupuesto comunitario). Los fondos que se gastan dentro de este capítulo se destinan a la financiación de *excedentes* y a la garantía del mantenimiento de un nivel adecuado de los precios y rentas agrícolas. Constituye, éste, el capítulo más polémico del Presupuesto Comunitario.
- La sección «*Orientación*» consagrada a las políticas de transformación estructural está escindida en dos tipos de actividades (2,7 %):
  - Las acciones *indirectas* (zonas desfavorecidas y desequilibrio de algunos mercados) cuya financiación fundamental corre a cargo de los Estados miembros.
  - Las acciones *directas*, bajo forma de proyectos individuales. Dentro de este apartado se contemplan los proyectos que contribuyen a la mejora en la transformación y comercialización de los productos agrícolas, los proyectos relativos a la acuicultura, la construcción de buques,... Estas ayudas se instrumentan en forma de subvenciones y exigen, como en el caso de los restantes fondos, de la previa existencia de compromisos previos asumidos por la Administración Autónoma.

## 5.—CONCLUSIONES

## 5. CONCLUSIONES

1. Las disposiciones sobre las ayudas se encuentran en el apartado del Tratado CEE relativo a las *normas sobre la competencia*. Esta localización de los preceptos comunitarios era fiel reflejo de una concepción económica liberal, apoyada en una situación económica favorable, con perspectivas también positivas. En consecuencia, dentro del marco jurídico comunitario las ayudas estatales se conciben en principio como una excepción.

La crisis económica y el surgimiento de nuevos centros económicos ha provocado que las *intervenciones estatales subvencionadoras*, en la práctica, no fueran excepción, sino que al contrario se *convirtiesen* en un *elemento fundamental* de las políticas económicas de los Estados. A su vez, se ha producido una multiplicación de la actividad intervencionista de la Comunidad a través de sus propios instrumentos financieros.

Ante esta situación la Comunidad se ha visto obligada a admitir la práctica del otorgamiento de subvenciones. Ahora bien, esta actuación de los Estados puede cuestionar la existencia y desarrollo del Mercado Común, por lo que la Comisión se ha visto obligada a *vigilar* la actividad de los Estados en este terreno.

Esta actividad se desarrolla mediante los procedimientos previstos en el art. 93 del Tratado CEE, conforme al cual los Estados deben *notificar* a la Comisión los proyectos de ayudas que prevean.

En todos los regímenes de ayudas se manifiesta como *criterio fundamental de compatibilidad* el que las ayudas no afecten a los intercambios entre los Estados en el sentido de provocar distorsiones de la competencia.

En general, las ayudas concedidas —salvo por excepcionales las sectoriales de reconversión— deben cumplir también los requisitos siguientes:

— que las ayudas no se limiten a facilitar el funcionamiento de las empresas sino a *fomentar su adaptación* y eventual reestructuración.

— las ayudas deben contribuir a la *reducción del desempleo* mediante la creación o, al menos, el mantenimiento de puestos de trabajo.

— las ayudas deben suponer un *estímulo a la inversión*. Por ello conllevan normalmente la realización de inversiones iniciales por los particulares.

Estas condiciones implican en todo caso que la ayuda suponga una aportación al interés común europeo, no siendo suficiente la argumentación de razones de índole exclusivamente estatal.

2. *Ayudas sectoriales.*—Se ha admitido la concesión de ayudas en aquellos sectores que se han visto necesitados de grandes capitales para realizar reconversiones industriales. Estas ayudas tienen un carácter excepcional pues están orientadas a la *destrucción de empleo*. Este ha sido el caso de sectores industriales como el naval, siderúrgico y textil. Dado que en estos sectores, debido al coste material y social de las reconversiones a realizar, los Estados se han visto obligados a intervenir, han dictado los principios que se deben respetar y los períodos en los que se permite su realización. Se trata de los llamados *códigos* de ayudas susceptibles de ser otorgadas por los Estados previa presentación de sus planes de reconversión a la Comisión. *Una vez aprobados éstos, se realiza un seguimiento continuo de la actuación estatal en forma de notificación, a posteriori, de las ayudas puntuales concedidas.* En la práctica el control se arbitra en conjunción con otras normas comunitarias que establecen cuotas a la producción y a la exportación.

La Comisión tiene tendencia a aceptar también las *ayudas en aquellos sectores para los que se ha previsto una política comunitaria*, así las ayudas dirigidas a la potenciación de las nuevas tecnologías, piénsese en la microelectrónica, biotecnología, etc. Estas ayudas se inscribirán, en la medida de lo posible, en el marco de programas específicos de la Comunidad de fomento al desarrollo de dicha clase de sectores.

3. *Ayudas generales.*—Las ayudas generales no parten como las sectoriales y regionales de una situación económica deficiente, sino que pretenden reforzar las economías de los países miembros. Colorario necesario de esta premisa es la indeterminación o abstracción de los proyectos de ayudas generales.

Los proyectos de ayudas generales deben ser aprobados por la Comisión. Esta aprobación se hace con reservas, ya que, al no existir elementos suficientes de juicio, se controla también la puesta en práctica de la ayuda. La Comisión exige así la *notificación previa* no sólo del régimen de ayudas sino también de las ayudas individuales en aplicación del mismo.

Estas ayudas encuentran su justificación en una *orientación preferente a temas considerados prioritarios* en la Comunidad tales como el ahorro energético, medio ambiente, I+D, Pymes, organización, gestión y agrupación de empresas, etc. La Comisión, cuando lo estima conveniente, establece los principios que deben regir las ayudas en las diferentes materias. Así lo ha hecho en el tema del medio ambiente y actualmente está preparando las líneas directrices para las ayudas con carácter I+D.

#### 4. Las ayudas regionales y la política regional comunitaria.

4.1. *La política regional*, en el marco de la CEE se desarrolla sustancialmente desde cada Estado miembro aunque, a partir de la aprobación del nuevo Reglamento FEDER de Junio de 1984, que ha entrado en vigor el primero de Enero de 1985, la Comunidad se reserve un protagonismo creciente. Si bien el papel de los Estados es predominante, a la hora de la instrumentación de las políticas regionales, el art. 92.3 del Tratado delimita el campo de actuación de aquéllos en materia de ayudas a la inversión de carácter regional. En virtud de dicho artículo del Tratado, sólo podrán considerarse *compatibles* con el mercado común «las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo

económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de desempleo».

4.2. Es en esta segunda posibilidad, y en un contexto de crisis generalizada de determinados sectores industriales, en la que parece haberse basado el nuevo reglamento del FEDER al definir como zonas susceptibles de beneficiarse de ayudas regionales, a aquellas regiones afectadas por el *declive de determinados sectores industriales*. Esta nueva definición amplía el concepto de «zona asistida», extendiéndolo a aquellas regiones afectadas por la crisis industrial. En el marco de la CEE, toda zona calificada como asistida por un Estado miembro, y aceptada como tal por la Comisión, puede beneficiarse de ayudas públicas a la inversión y del apoyo de los Fondos (FEDER, FSE) e Instituciones financieras (CECA, BEI) comunitarias.

4.3. Esta política regional ha dado lugar en el orden interno a la obligación de elaborar *programas económicos regionales*, que posteriormente se presentan en Bruselas para su aprobación. Se notifica de este modo el programa regional que constituye un documento suficientemente explícito como para permitir a la Comunidad la adopción de una decisión de compatibilidad con el Mercado Común de las acciones financieras previstas en el mismo. Asimismo, servirá de documento base para decidir sobre su propia intervención por medio del FEDER u otros instrumentos financieros.

Sólo quedará, finalmente, una obligación de *notificación*, a posteriori, de los casos significativos de aplicación de ayudas con finalidad específica regional, en orden a prevenir cualquier utilización contraria o abusiva del régimen de ayudas aprobado.

5. *La Comunidad Autónoma Vasca*, según el índice sintético utilizado en la CEE para medir el grado de desarrollo relativo, alcanza un nivel de 78 sobre una media de 100 para la Comunidad de los 12. Otras regiones comunitarias que alcanzan niveles superiores en base a dicho índice (Valonia, Lorena, West-Midland) y que se hallan aquejadas por problemas de crisis industrial similares a los nuestros, tienen la calificación de «zona asistida». *Esta constatación nos permite concluir que la Comunidad Autónoma de Euskadi, según los patrones comunitarios, podría alcanzar dicha calificación.*

5.1. La recuperación de los Concursos Económicos hizo posible que, progresivamente y desde la Administración Autónoma y Diputaciones, se fuera canalizando una variada gama de *ayudas* (subvenciones y bonificaciones de interés) para fomentar la inversión, el empleo, la reconversión industrial, la innovación tecnológica, etc. Estas ayudas se inscriben dentro de la tipología parcialmente diseñada en el Tratado de Roma art. 92):

- a). Las *ayudas sectoriales* están destinadas a apoyar la reconversión industrial de los sectores de ámbito local. En principio, la reconversión de estos sectores debería estar finalizada antes de la adhesión. Una vez que ésta se produzca, su aplicación se someterá a aprobación por la Comisión, y el visto bueno de ésta no puede garantizarse de antemano.
- b). Las *ayudas generales*, tienen como finalidad la promoción del desarrollo tecnológico, el fomento de la investigación, el ahorro de energía, equipos anticontaminantes, y financiación a Pymes, en general. Estas ayudas que no están explícitamente

previstas en el Tratado, se han venido imponiendo en la práctica y la Comisión se muestra benevolente para su aceptación.

- c). Las *ayudas regionales*, se orientan al fomento de la inversión y del empleo. Como en la CEE estas ayudas se conceden en aquellas regiones que han sido calificadas como «zona asistida», la obtención por Euskadi de esta calificación es una condición necesaria para poder seguir concediendo ayudas de carácter regional. Dicha calificación depende de una decisión de la Comisión a propósito del Estado miembro.

6. *El interés* para Euskadi de obtener la calificación de «zona asistida» en un contexto de relativización del propio concepto de ayuda es doble: Por un lado, podríamos seguir instrumentando y perfeccionando el sistema de ayudas regionales hoy existente, y del lado comunitario, disfrutaríamos de un acceso a los fondos FEDER proporcional a nuestra participación en la Renta Nacional de la economía española. Además, el tratamiento de una zona con carácter de asistida, da preferencia a la hora de acceder a los recursos del FSE y del BEI.

7. La calificación del área del Gran Bilbao como *zona ZUR* responde a la filosofía de ataque puntual a los problemas derivados de la crisis de la gran empresa industrial y su implantación proviene de la necesidad de creación de nuevos empleos, dentro del marco de la Ley 27/1984 de 26 de Julio, sobre reconversión e industrialización. De ahí se deriva su carácter temporal (3 años) y su localización. Sin embargo, la superación de nuestra crisis industrial y del desempleo derivado, así como su generalización a prácticamente todo el conjunto de la geografía de la Comunidad Autónoma, parecen exigir de una terapéutica cuyo horizonte temporal no se puede prever y cuya aplicación debe afectar al conjunto de la economía vasca.

8. *El acceso a los Fondos comunitarios* exige que la Administración Autónoma vaya adaptando su actividad a las condiciones que aquéllos imponen para participar en sus programas de actuación:

8.1. La distribución de fondos del FEDER se hace en base a los proyectos incluidos en los *Planes regionales* que deben ser diseñados por cada región o Comunidad Autónoma. El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco a través del Comité de Planificación está preparando un Plan Económico a Medio Plazo del sector Público vasco que deberá completarse para Junio de 1985.

Dentro de los criterios del FEDER, tienen especial consideración las *regiones fronterera* de los países de la CEE, viéndose favorecidas a la hora de obtener fondos para proyectos comunes con regiones vecinas de otro(s) Estado(s).

8.2. El acceso a los recursos del FSE, a cuyos efectos Euskadi podría ser calificada como «zona prioritaria», exige la previa *elaboración de programas de formación y reciclaje de mano de obra*.

8.3 La obtención de los préstamos bonificados *CECA* está ligada a la existencia de proyectos de inversión en la industria que generen empleos alternativos a los destruidos en los sectores CECA (siderurgia, carbón). Esta financiación encaja con los objetivos que se propone la ZUR para Bilbao, pero también tiene interés para otras

comarcas de la Comunidad afectadas por la crisis siderúrgica. También los «Industrial-deak» ubicados en estas zonas pueden disfrutar de los préstamos CECA.

8.4. Gran parte de los recursos del *BEI*, *CECA* y *NIC* se canalizan en forma de *paquetes globales* que luego son distribuidos, fundamentalmente a Pymes, por instituciones financieras u organismos especializados de ámbito local. Por su experiencia en el análisis de proyectos industriales y en la concesión de créditos bonificados y subvenciones a la inversión, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial podría desempeñar un papel de intermediario entre el BEI, CECA y NIC, y las empresas aspirantes a la obtención de dichos fondos.

## ANEXOS

### *Jurisprudencia:*

— Sentencia del Tribunal de 17 de septiembre de 1980, Asunto 730/79, Philip Morris Holland BV contra Comisión de las Comunidades Europeas, («Ayuda a un fabricante de cigarrillos»), Recueil 1980, pág. 2671-2704'

### *Decisiones*

— Decisión 81/797/CEE de la Comisión de 18.9.1981 relativa a una ayuda que el gobierno holandés proyecta conceder en favor del aumento de la capacidad de producción de una empresa del sector químico (óxido de magnesio).

JO L n.º 296 de 15.10.81

— Decisión 82/740/CEE de la Comisión de 22.7.1982 sobre la delimitación de las zonas de desarrollo en base al artículo 11 de la ley belga de 30 diciembre 1970.

JO L n.º 312 de 9.11.82

— Decisión 82/691/CEE de la Comisión de 22.7.1982 relativa a la delimitación de las zonas que pueden beneficiarse de ayudas con finalidad regional en Dinamarca a partir del 1.º de enero 1982.

JO L n.º 290 de 14.10.82

— Decisión 83/486/CEE de la Comisión de 20.7.1983 relativa a dos regímenes de ayuda en favor del sector textil/confección en Francia por medio de tasas parafiscales.

JO L n.º 268 de 30.9.83

— Decisión 83/487/CEE de la Comisión de 27.7.1983 relativa a una ayuda propuesta por el gobierno del Reino Unido en favor de una inversión orientada al incremento de la capacidad de producción de película poliéster.

JO L n.º 268 de 30.9.83

— Decisión 83/245/CEE de la Comisión de 12.1.1983 relativa a un régimen de ayuda en favor del sector textil/confección en Francia.

JO L n.º 137 de 26.5.83

— Decisión 84/111/CEE de la Comisión de 30.11.1983 relativa a un proyecto de ayuda del gobierno belga en favor de un fabricante de fibras sintéticas.

JO L n.º 62 de 3.3.84

ARRÊT DE LA COUR  
DU 17 SEPTEMBRE 1980<sup>1</sup>

**Philip Morris Holland BV**  
**contre Commission des Communautés européennes**

«Aide à un fabricant de cigarettes»

Affaire 730/79

Sommaire

1. *Aides accordées par les États — Affectation des échanges entre États membres — Critères*  
(Traité CEE, art. 92)
2. *Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Référence au contexte communautaire*  
(Traité CEE, art. 92, § 3)

1. Lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide.

2. Dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et

social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire.

Ainsi, la Commission est en droit de considérer qu'un projet d'aide ne répond pas aux exigences de l'article 92, paragraphe 3 b), dès lors que l'aide permettrait de déplacer des investissements susceptibles d'être réalisés dans d'autres États membres connaissant une situation économique moins favorable que celle de l'État membre dont relève l'entreprise bénéficiaire.

<sup>1</sup> — Langue de procédure: le néerlandais.

Dans l'affaire 730/79,

PHILIP MORRIS HOLLAND BV, ayant son siège social à Eindhoven, représentée par M<sup>c</sup> B. H. ter Kuile, avocat près le Hoge Raad des Pays-Bas, et M<sup>c</sup> F. O. W. Vogelaar, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<sup>c</sup> J. Loesch, avocat, 2, rue Goethe,

partie requérante,

contre

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, représentée par son conseiller juridique, M. D. R. Gilmour, assisté de M<sup>c</sup> A. F. de Savornin Lohman, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg chez son conseiller juridique, M. M. Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision 79/743/CEE de la Commission, du 27 juillet 1979, concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'un fabricant de cigarettes (JO n° L 217 du 25. 8. 1979, p. 17),

LA COUR,

composée de MM. H. Kutscher, président, A. O'Keefe et A. Touffait, présidents de chambre, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans et O. Due, juges,

avocat général: M. F. Capotorti

greffier: M. A. Van Houtte

rend le présent

## ARRÊT

### En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

##### A — *Les faits de l'affaire*

Par lettre du 4 octobre 1978, le gouvernement des Pays-Bas a informé la direction générale de la concurrence de la Commission de son intention d'accorder à Philip Morris Holland (ci-après dénommée PMH), filiale néerlandaise du groupe Philip Morris International, une aide en faveur de l'accroissement des capacités de production de son usine de fabrication de cigarettes située à Bergen-op-Zoom.

L'aide en question, dénommée «prime supplémentaire pour grands projets» (grote projecten toeslag), a été instituée par l'article 6 de la loi néerlandaise du 29 juin 1978 sur la stimulation et l'orientation des investissements (Wet Investeringsrekening, Staatsblad 1978, n° 368). Cette subvention bénéficie aux projets d'investissement excédant 30 millions de florins. Modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle est limitée à 4 % de la valeur de l'investissement concerné.

Considéré par la Commission comme étant un régime général d'aide, ce système a reçu son approbation, sous réserve de la notification préalable de tous les cas d'application, ceci conformément aux dispositions de l'article 93,

paragraphe 3, du traité, et compte tenu des principes postulés par son article 92.

Après avoir obtenu du gouvernement néerlandais certaines informations complémentaires, la Commission a décidé, le 14 décembre 1978, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2. A ce stade, seul le gouvernement néerlandais a été invité à présenter ses observations. Par la suite, la Commission a demandé l'avis d'autres États membres et d'autres parties intéressées, dont PMH le 28 février 1979.

Cette dernière a fait connaître ses observations par écrit le 29 mars 1979. Un entretien oral a eu lieu le 29 mai 1979, au cours duquel la requérante a été mise en mesure de répondre à certaines questions plus précises de la Commission, et à ses griefs articulés contre l'octroi de l'aide.

L'investissement en question a été décidé par Philip Morris International dans le cadre de la situation suivante: l'usine PMH d'Eindhoven serait fermée et sa capacité de production transférée à celle de Bergen-op-Zoom. La capacité totale de fabrication serait portée de 11,4 milliards à 16 milliards de cigarettes par an, conduisant à un accroissement de 40 % des capacités de production de la firme et d'environ 13 % de la production totale néerlandaise. Cette extension-modernisation impliquerait des investissements de 60,7 millions d'UCE, la valeur de l'aide étant de 2,4 millions d'UCE. Les parties sont contraires quant au point de savoir combien d'emplois nouveaux seraient créés à la suite de cette opération: selon la Commission, il n'y en aurait que 5, selon la requérante, il y en aurait 475.

Conformément à la pratique de la Commission dans les cas d'application individuelle de régimes d'aides générales, à la demande du gouvernement néerlandais visant le traitement des affaires portant sur la prime en question et à la demande de PMH, les informations concernant la présente affaire ont été traitées confidentiellement de manière à éviter de révéler dans la décision de quelle entreprise il s'agissait.

*B — Le contexte de l'affaire: le marché de la cigarette*

L'activité commerciale dans les États membres en matière de cigarettes est très importante. Le nombre de cigarettes vendues dans la Communauté a été de 481,1 milliards en 1977 et de 480,3 milliards en 1978. Les exportations intracommunautaires totales de cigarettes représentent environ 11 % de la consommation totale de la Communauté. En 1978, les pays exportateurs les plus importants ont été la république fédérale d'Allemagne, qui assure environ 44 % des exportations intracommunautaires, et les Pays-Bas, qui en assurent environ 36 %. La république fédérale d'Allemagne exporte environ 16 % de sa production totale, tandis que les Pays-Bas en exportent 55 %. Les principaux pays importateurs de cigarettes de la Communauté sont l'Italie, la France et les Pays-Bas.

Philip Morris est le deuxième groupe mondial de producteurs de tabacs manufacturés après la British American Tobacco Company (BAT). Dans la Communauté, il compte des filiales de fabrication et de commercialisation en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Dans le marché commun, les principaux concurrents de Philip Morris, exception faite des sociétés locales et des sociétés sous contrôle d'État, sont la BAT, Rothmans et Reynolds. PMH a informé la

Commission de ce qu'elle n'était pas en mesure de fournir une estimation de sa part du marché communautaire.

Philip Morris est relativement nouveau sur le marché de l'Europe continentale. Ses activités ont débuté aux Pays-Bas en 1969. PMH estime qu'après avoir réalisé les investissements en question, elle produira 50 % de toutes les cigarettes fabriquées aux Pays-Bas et espère exporter plus de 80 % de sa production totale vers les autres États membres.

En 1977, la valeur des exportations néerlandaises de cigarettes a été de 94 millions d'UCE, soit 27 % de l'ensemble des exportations communautaires, alors que la valeur des importations néerlandaises de cigarettes a été de 63,7 millions d'UCE, soit 24,4 % de l'ensemble des importations intracommunautaires. Le solde de la balance des échanges en ce qui concerne les cigarettes serait donc de 30,3 millions d'UCE en faveur des Pays-Bas.

*C — La décision de la Commission et la procédure écrite*

Par décision du 27 juillet 1979, la Commission, considérant que l'aide projetée était de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise considérée au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, a interdit au gouvernement des Pays-Bas de mettre à exécution son projet d'octroyer la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur des investissements réalisés à Bergen-op-Zoom par «la filiale néerlandaise d'un producteur international de tabacs manufacturés».

La requérante a introduit son recours le 12 octobre 1979. Celui-ci a été enregistré à la Cour le même jour.

La procédure a suivi un cours régulier.

.....

.....

### En droit

- 1 Par recours du 12 octobre 1979, la requérante demande, en application de l'article 173 du traité CEE, l'annulation de la décision 79/743/CEE de la Commission, du 27 juillet 1979, concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'un fabricant de cigarettes (JO n° L 217, p. 17).
- 2 La requérante est la filiale néerlandaise d'un grand producteur de tabacs manufacturés. Par lettre du 7 octobre 1978, le gouvernement néerlandais a informé la Commission de son intention d'accorder à la requérante la «prime supplémentaire pour grands projets» prévue par la loi néerlandaise du 29 juin 1978 sur la stimulation et l'orientation des investissements (Staatsblad 1978, n° 368). Cette prime, qui bénéficie aux projets d'investissement d'une valeur excédant trente millions de florins, est modulée en fonction du nombre d'emplois créés et peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné. D'après l'article 6 de cette loi, la prime n'est pas octroyée pour autant que l'octroi serait, de l'avis de la Commission, incompatible avec le marché commun en vertu des articles 92 à 94 du traité.

L'aide en cause visait à aider la requérante à concentrer et développer sa production de cigarettes en fermant l'une des deux usines qu'elle possède aux Pays-Bas, et en portant la capacité de production de la seconde, située à Bergen-op-Zoom, dans le sud du pays, à 16 milliards de cigarettes par an, accroissant ainsi de 40 % les capacités de production de la firme et de 13 % environ la production totale néerlandaise.

Après avoir examiné le projet d'aide conformément aux dispositions de l'article 93 du traité, la Commission a pris la décision attaquée, qui dispose que le Royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 4 octobre 1978, d'octroyer la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur des investissements réalisés à Bergen-op-Zoom.

Quant à la recevabilité du recours

- » La Commission ne conteste pas que la requérante, en sa qualité d'éventuel bénéficiaire de l'aide visée par la décision, est en droit de former un recours en annulation, même si la décision est adressée à un État membre.

Quant au fond

- La requérante fait valoir deux moyens d'annulation de la décision attaquée. En premier lieu, la décision de la Commission a) violerait l'article 92, paragraphe 1, du traité, b) violerait un ou plusieurs principes généraux du droit communautaire, en particulier les principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, ou, du moins, un ou plusieurs principes de la politique de concurrence de la Commission, c) violerait l'article 190 du traité, en ce que la Commission aurait motivé la décision de manière incompréhensible ou contradictoire.
- » En second lieu, la décision selon laquelle les dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, du traité ne seraient pas applicables, dans les conditions de l'espèce, violerait les dispositions précitées du traité, et les principes précités du droit communautaire.

Sur le premier moyen

- L'article 92, paragraphe 1, du traité de Rome dispose que «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
- La requérante soutient que, afin de pouvoir décider dans quelle mesure une aide déterminée est incompatible avec le marché commun, il y aurait lieu d'appliquer en premier lieu les critères qui déterminent l'existence de restrictions de concurrence dans le cadre des articles 85 et 86 du traité. La Commission devrait dès lors déterminer d'abord le «marché en cause» et cela

en fonction du produit, du territoire et de la période de temps dont il s'agit. Ensuite elle devrait examiner la structure du marché en cause afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure l'aide en question affecte, le cas échéant, les rapports de concurrence. Or ces éléments essentiels feraient défaut dans la décision attaquée. La décision ne définirait pas le marché en cause ni du point de vue du produit, ni dans le temps. La structure du marché ne serait aucunement précisée, pas plus d'ailleurs que les rapports de concurrence qui en découlent, lesquels pourraient, le cas échéant, être faussés par l'aide litigieuse.

- 10 Il est constant qu'après la réalisation des investissements projetés, la requérante assurera près de 50 % de la production néerlandaise de cigarettes et qu'elle prévoit l'exportation vers les autres États membres de plus de 80 % de sa production. La «prime supplémentaire pour grands projets» que le gouvernement néerlandais proposait d'accorder à la requérante s'élevait à 6,2 millions de florins (2,3 millions d'unités de compte européennes), soit 3,8 % du montant des investissements réalisés.
  
- 11 Lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. En l'espèce, l'aide que le gouvernement néerlandais projetait d'accorder concernait une entreprise ayant une orientation vers le commerce international, comme le prouve le pourcentage élevé de sa production qu'elle se propose d'exporter dans d'autres États membres. L'aide en question devait contribuer à l'augmentation de sa capacité de production et, en conséquence, à l'accroissement de sa capacité d'alimenter les courants d'échange, y compris ceux existant entre États membres. D'autre part, l'aide aurait allégé le coût de la transformation des installations de production et par là même aurait procuré à la requérante un avantage dans la concurrence avec des fabricants qui ont réalisé ou ont l'intention de réaliser à leurs propres frais une augmentation analogue de la capacité de rendement de leurs installations.
  
- 12 Ces circonstances, qui ont été évoquées par les considérants de la décision attaquée et qui n'ont pas été contestées par la requérante, constituent une justification suffisante pour permettre à la Commission de juger que l'aide projetée serait de nature à affecter les échanges entre États membres et menacerait de fausser la concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres.

- 15 Il résulte de ces considérations que le premier moyen doit être rejeté, aussi bien quant au fond qu'en ce qui concerne l'insuffisance de motivation.

Sur le deuxième moyen

- 16 Par son deuxième moyen, la requérante critique la décision de la Commission pour autant qu'elle est fondée sur l'inapplicabilité en l'espèce des dérogations visées à l'article 92, paragraphe 3, du traité, et en particulier ses lettres a), b) et c).
- 17 Cet article dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
- a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
  - b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
  - c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun . . . »
- 18 Selon la requérante, c'est à tort que la Commission pose comme principe général que les aides accordées à des entreprises par un État membre ne tombent sous le coup des dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, du traité que si la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions. La seule condition pour l'admissibilité d'une aide au titre de l'article 92, paragraphe 3, consisterait dans la conformité du plan d'investissement considéré aux finalités indiquées aux lettres a), b) ou c).
- 19 Cet argument ne saurait être retenu. D'une part, il méconnaît que l'article 92, paragraphe 3, contrairement à l'article 92, paragraphe 2, donne un

pouvoir d'appréciation à la Commission en prévoyant que les aides qu'il énumère «peuvent» être considérées comme compatibles avec le marché commun. D'autre part, il aurait pour résultat de permettre aux États membres d'effectuer des versements qui apporteraient une amélioration de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans être nécessaires pour atteindre les buts prévus par l'article 92, paragraphe 3.

- 18 Il convient d'observer à cet égard que la décision attaquée constate explicitement que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en question réunit des conditions techniques de mise en jeu d'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité.
- 19 La requérante soutient que la Commission a considéré à tort que la zone de Bergen-op-Zoom n'est pas une région où l'on trouve un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la disposition de l'article 92, paragraphe 3 a). La région de Bergen-op-Zoom serait caractérisée par un taux de sous-emploi plus élevé et par un revenu par capita inférieur à celui de la moyenne nationale néerlandaise.

En ce qui concerne l'article 92, paragraphe 3 b), la requérante conteste l'affirmation de la Commission que le système de «prime supplémentaire» ne pouvait être assimilé à une aide destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre», et que prendre une autre position aurait permis aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de déplacer à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable.

Selon la requérante, on ne saurait répondre à la question de savoir s'il y a perturbation grave de l'économie d'un État membre, et, dans l'affirmative, si une aide nationale déterminée porte remède à cette perturbation, en examinant, comme l'a fait la Commission, si les investissements de l'entreprise auxquels l'aide de l'État membre concerné se rapporte pourraient être réalisés le cas échéant dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable que cet État membre.

- 21 La requérante conteste enfin l'affirmation de la décision selon laquelle l'examen du secteur de la production de cigarettes dans la Communauté et, aux Pays-Bas montrerait que le jeu du marché serait à lui seul, et sans intervention étatique, de nature à assurer son développement normal, et que, dès lors, l'aide litigieuse ne pourrait être considérée comme destinée à faciliter le développement, au sens de l'article 92, paragraphe 3 c).
- 22 Selon la requérante, il serait sans intérêt, en principe, de savoir si «sans intervention étatique» le jeu du marché est de nature à assurer à lui seul le développement normal de la production dans un État membre et dans la Communauté. La seule chose qui importerait serait de savoir si l'aide en facilite ou non le développement. Au surplus, la décision serait motivée de manière incompréhensible et contradictoire.
- 23 Ces arguments de la requérante ne peuvent être retenus. Il y a lieu de rappeler que la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire.
- 24 C'est dans ce contexte que la Commission a, avec raison, apprécié le niveau de vie et le sous-emploi grave dans la zone de Bergen-op-Zoom, non par référence au niveau moyen national néerlandais, mais par rapport au niveau communautaire. En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de l'article 92, paragraphe 3 b), du traité, la Commission pouvait très bien considérer, comme elle l'a fait, que l'investissement à réaliser en l'occurrence ne constituait pas «un projet important d'intérêt commun» et que l'aide projetée ne pouvait être assimilée à une aide destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre», étant donné que l'aide projetée aurait permis de déplacer des investissements susceptibles d'être réalisés dans d'autres États membres connaissant une situation économique moins favorable que celle des Pays-Bas, où le niveau national de chômage est un des plus bas de la Communauté.
- 26 En ce qui concerne l'article 92, paragraphe 3 c), du traité, les arguments avancés par la requérante ne sont pas pertinents. La compatibilité de l'aide en question avec le traité doit être appréciée dans le cadre communautaire et non dans celui d'un seul État membre. L'appréciation de la Commission est fondée en grande partie sur la constatation que l'accroissement de la production de cigarettes prévu serait exporté vers les autres États membres, ceci

dans le contexte d'une croissance ralentie de la consommation, ce qui ne permettait pas de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun par une telle aide. Cette appréciation est fondée. La constatation que le jeu du marché dans le secteur de la production de cigarettes est à lui seul, et sans intervention étatique, de nature à assurer son développement normal, et que, dès lors, l'aide ne peut être considérée comme destinée à en «faciliter» le développement, est également justifiée, alors qu'on apprécie la nécessité d'une aide du point de vue communautaire plutôt que de celui d'un seul État membre.

27 Le recours est donc rejeté.

Sur les dépens

28 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; la requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) La partie requérante supporte les dépens.

Kutscher	O'Keeffe	Touffait	Mertens de Wilmars	Pescatore
Mackenzie Stuart	Bosco	Koopmans	Due	

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 17 septembre 1980.

Le greffier  
A. Van Houtte

Le président  
H. Kutscher

## II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 1981

concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de la création d'une capacité de production d'une entreprise du secteur chimique (oxyde de magnésium)

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(81/797/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,

### I

considérant que la loi néerlandaise, du 29 juin 1978, [Wet Investeringsrekening (WIR)]<sup>(1)</sup> sur la stimulation et l'orientation des investissements, a institué, en son article 6, une «prime supplémentaire pour grands projets»; que cette subvention est destinée aux projets d'investissement d'une valeur excédant 30 millions de florins néerlandais et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné;

considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la prime supplémentaire pour grands projets constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a)

<sup>(1)</sup> Staatsblad, 1978, n° 368.

ou c) du traité CEE; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence ni, partant, sa compatibilité avec le marché commun;

considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission, soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit lorsque cela ne lui paraît pas possible des cas individuels significatifs;

considérant que, conformément à cette position, la Commission a demandé que les applications individuelles de la prime supplémentaire pour grands projets, compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, cela conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;

considérant que, au cours d'entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants ou développés dans la gestion de ces dispositions; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission a exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de prime supplémentaire du fait

qu'elle a exigé cette communication préalable systématique ;

considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet des articles 6 paragraphe 7 et 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise susvisée du 29 juin 1978 ;

## II

considérant que, par lettre du 17 avril 1980, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la prime supplémentaire pour grands projets pour la mise en œuvre à Veendam dans la province de Groningen d'une exploitation de sel gemme produisant 850 000 tonnes par an de saumure destinée à la production économiquement intégrée d'oxyde de magnésium ; que ces productions sont respectivement réalisées par deux filiales paritaires d'un groupe pétrochimique néerlandais et un holding public à vocation régionale ;

considérant que le coût total de l'investissement est évalué à 85 millions de florins néerlandais et comporterait la création de 18 nouveaux postes de travail ; que le projet bénéficierait d'une subvention de 0,285 millions de florins néerlandais au titre du WIR (GPT) et de 7,3 millions de florins néerlandais en application des aides régionales (régime IPR) ;

considérant qu'une partie substantielle de l'oxyde de magnésium dont la totalité est produite à partir du sel extrait à Veendam est destinée à être exportée vers les autres États membres ;

## III

considérant que le gouvernement néerlandais a répondu, le 8 janvier 1981, à la mise en demeure de la Commission et, que ce faisant, il ne respectait pas le délai fixé au 30 juin 1980 par la Commission pour présenter d'éventuelles observations ; que ce délai fut prorogé au 15 août 1980 à la demande du gouvernement néerlandais ;

## IV

considérant que l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production ;

considérant, en effet, que l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais vise la mise en œuvre de l'exploitation de sel gemme produisant 850 000 tonnes par an de saumure destinée en totalité

à la production d'oxyde de magnésium ; que ces productions sont respectivement réalisées par deux filiales paritaires de deux mêmes entreprises participantes ; qu'une partie substantielle de la production économiquement intégrée d'oxyde de magnésium à partir du sel est destinée aux marchés des autres États membres ;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tous cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations ;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres ;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question ;

considérant que la Commission a le devoir d'appliquer les principes ci-avant avec constance et équité, de sorte à vérifier pour chaque cas d'application d'un régime général d'aide l'existence d'une telle contrepartie ; que l'absence de l'application de ce critère dans le passé, alors même qu'il s'agit d'un cas très semblable, ne peut pas constituer une raison suffisante pour faire abstraction de ce critère plus particulière-

ment en l'espèce où l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas chez l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;

considérant, en effet, que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Groningen n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a) ; que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), le gouvernement néerlandais a déjà pris en compte la contribution que les investissements en question sont susceptibles d'apporter à un meilleur équilibre socio-économique de cette zone en les faisant bénéficier d'une autre aide au titre du régime d'aides à finalité régionale néerlandais, l'Investeringspremieregeling (IPR) ; que, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, le gouvernement néerlandais a lui-même souligné que la prime supplémentaire pour grands projets n'est pas accordée en fonction de considérations régionales ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ;

considérant, à supposer même établie la nécessité d'accroître la capacité de production d'oxyde de magnésium pour la fabrication de briques réfractaires pour hauts fourneaux, que l'effet de cette opération paraîtrait trop indirect pour avoir une répercussion sensible sur la restructuration de la sidérurgie dans la Communauté ;

considérant, par ailleurs que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans

les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité : que la prime supplémentaire aux grands projets en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites ;

considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'examen du secteur de production de l'oxyde de magnésium à partir du sel gemme, en particulier au regard des prévisions présentées en ce qui concerne la demande pour les produits en cause, fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature, à lui seul, et sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; qu'une part substantielle de la production d'oxyde de magnésium produit à partir de sel gemme est destinée à être exportée vers les autres États membres, mais que ceci, s'il n'est pas démontré qu'il est indiqué d'accroître des capacités de production, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées, par une telle aide, dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;

considérant, dès lors, que le projet d'aide susmentionné du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

*Article premier*

Le royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 17 avril 1980 de son ministre des affaires étrangères, d'octroyer la prime supplémentaire pour grands projets en faveur des investissements réalisés à Veendam par une entreprise néerlandaise du secteur chimique.

*Article 2*

Le royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notifica-

tion de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1981.

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

---

Journal officiel des Communautés européennes  
de 15.10.81  
N° 2 296/41-44

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1982

sur la délimitation des zones de développement au titre de l'article 11 de la loi belge du 30 décembre 1970

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(82/740/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations<sup>(1)</sup>, et vu des observations,

### I

considérant que, par lettre du 14 novembre 1980, le gouvernement belge a notifié, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, un projet portant délimitation des zones de développement dans lesquelles il entend appliquer les mesures d'aides à finalité régionale de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, lesquelles consistent essentiellement en bonifications d'intérêt, primes en capital, garanties d'État et allègements fiscaux en faveur d'entreprises industrielles et de services;

considérant que, par cette notification, le gouvernement belge a entendu répondre à l'obligation découlant de l'article 2 de la décision 72/173/CEE de la Commission, du 26 avril 1972, concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique<sup>(2)</sup>; que le premier alinéa de cet article prévoit une plus grande sélectivité dans le champ d'application géographique des aides à finalité régionale, le projet devant déterminer les zones de développement supprimées et celles non supprimées; que le deuxième alinéa de cet article prévoit une différenciation des zones de développement en deux catégories, selon l'acuité des problèmes des régions concernées, et une modulation du maximum de l'intensité des aides en fonction de ces deux catégories;

<sup>(1)</sup> JO n° C 316 du 4. 12. 1981, p. 4.

<sup>(2)</sup> JO n° L 105 du 4. 5. 1972, p. 13.

considérant que le projet notifié vise à octroyer des aides régionales dans la quasi-totalité du territoire national, les zones de développement proposées se situant dans chacune des 9 provinces et dans 40 des 43 arrondissements du pays représentant plus de 80 % de la population; que, si un grand nombre de ces arrondissements ne sont que partiellement retenus comme zones de développement, la population de ces dernières représente encore 55 % de la population belge; qu'un plafond unique d'intensité des aides est retenu pour l'ensemble des zones proposées;

considérant que les méthodologies utilisées par les autorités belges pour la sélection des zones d'aides sont fondamentalement différentes pour la Flandre et pour la Wallonie;

considérant que la Commission a demandé, le 5 décembre 1980, que des informations complémentaires lui soient communiquées dans un délai d'un mois; que le gouvernement belge, par télex du 22 décembre 1980, a sollicité une prolongation de ce délai jusqu'au 8 février 1981, prolongation à laquelle la Commission a donné son accord par télex du 13 janvier 1981; le gouvernement belge n'a, par la suite, pas communiqué les informations complémentaires demandées; que la Commission s'est vue, en conséquence, dans l'obligation de procéder à un premier examen du projet sur base des informations en sa possession;

### II

considérant que ledit projet, notifié avec plus de six ans de retard, ne répond pas aux exigences de l'article 2 de la décision 72/173/CEE de la Commission susmentionnées, prévoyant une plus grande sélectivité dans le champ d'application géographique des aides à finalité régionale et une différenciation des zones de développement en deux catégories selon l'acuité des problèmes des régions concernées;

considérant que, en procédant à l'examen dudit projet, la Commission a, par ailleurs, relevé l'existence de certaines lacunes dans les méthodologies utilisées, lesquelles ne permettent notamment pas de situer les phénomènes observés dans un contexte régional suffisamment large et de déterminer la causalité de ces phénomènes ;

considérant que, pour apprécier, selon l'article 92, la compatibilité des aides envisagées par le gouvernement belge avec le marché commun, la Commission a, tout d'abord, comparé les régions concernées en les replaçant dans le contexte communautaire et a, ensuite, recherché s'il existait, au niveau national, des disparités graves entre les régions, disparités susceptibles de justifier l'octroi d'aides régionales ;

considérant que, au terme de son examen, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'encontre du projet du gouvernement belge d'octroyer des aides à finalité régionale dans les arrondissements d'Anvers et de Malines dans la province d'Anvers, dans les arrondissements de Hal - Vilvorde, de Louvain et de Nivelles dans la province de Brabant, dans les arrondissements de Courtrai, d'Ostende, de Roulers et de Tielt dans la province de Flandre occidentale, dans les arrondissements d'Alost, d'Audenarde, d'Eeklo, de Saint-Nicolas et de Termonde dans la province de Flandre orientale, dans les arrondissements d'Ath, de Soignies, à l'exception de sa partie sud (communes de la Louvière et Le Rœulx), et de Tournai dans la province du Hainaut, dans les arrondissements de Huy, à l'exception de sa partie sud (communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet), de Verviers, à l'exception de sa partie sud (communes d'Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Büttgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimès), et de Waremme dans la province de Liège, et dans l'arrondissement de Namur, à l'exception de sa partie sud (communes de Gesves, Mettet et Ohéy), dans la province de Namur ; que, à cet effet, la Commission a, par lettre du 19 novembre 1981, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations ;

considérant que, dans cette lettre de mise en demeure et en l'absence de dispositions en ce sens dans le projet du gouvernement belge, la Commission a également opéré une différenciation des zones de développement en deux catégories selon l'acuité des problèmes des régions concernées, estimant que l'intensité maximale des aides à finalité régionale devait être limitée à 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement dans les zones de développement situées dans les arrondissements de Charleroi, de Mons, dans la partie sud de l'arrondissement de Soignies, telle que définie ci-dessus, et dans la partie nord de l'arrondissement de Thuin (communes d'Andlerlues, Binche et Morlanwelz) dans la province de

Hainaut, dans l'arrondissement de Liège dans la province de Liège et dans les arrondissements de Hasselt, Maaseik et Tongres dans la province de Limbourg, tandis que cette intensité maximale devait être limitée à 15 % en équivalent-subvention net dans les zones de développement situées dans l'arrondissement de Turnhout dans la province d'Anvers, dans les arrondissements de Dixmude, de Furnes et d'Ypres dans la province de Flandre occidentale, dans les arrondissements de Mouscron et de Thuin, à l'exception de sa partie nord, telle que définie ci-dessus, dans la province du Hainaut, dans les parties sud des arrondissements de Huy et Verviers telles que définies ci-dessus, dans la province de Liège, dans les arrondissements d'Arlon, de Bastogne, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Virton dans la province du Luxembourg, dans l'arrondissement de Dinant, dans la partie sud de l'arrondissement de Namur, telle que définie ci-dessus, et dans l'arrondissement de Philippeville dans la province de Namur ;

considérant que, dans la lettre de mise en demeure précitée, la Commission a, par ailleurs, limité, sous réserve d'un réexamen de la situation socio-économique, à une période de trois ans l'octroi des aides régionales dans l'arrondissement de Mouscron dans la province de Hainaut ainsi que le classement dans la catégorie des régions où les aides peuvent atteindre 20 % en équivalent-subvention net des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg ;

### III

considérant que, par lettres des 1<sup>er</sup> et 22 février 1982 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le royaume de Belgique a présenté ses observations ; que celles-ci ont été complétées et développées au cours de réunions bilatérales entre les autorités belges et la Commission ;

considérant que, dans ses observations des 1<sup>er</sup> et 22 février 1982, le gouvernement belge critique la méthodologie suivie par la Commission dans son analyse socio-économique ; que ces critiques diffèrent selon qu'elles émanent des autorités régionales flamandes ou wallonnes ; que les autorités régionales flamandes, tout en souscrivant à l'idée de base de la Commission que seules de grandes entités économiques homogènes doivent être retenues comme zones d'aides, estiment notamment que la méthodologie de la Commission est ambiguë et aboutit à sous-évaluer les problèmes régionaux en Flandre et à les surévaluer en Wallonie ; que les autorités régionales wallonnes reprochent, au contraire, à la Commission de ne retenir que des entités géographiques trop grandes qui masquent les disparités locales, d'utiliser une méthodologie qui ne permet pas de sélectionner de façon adéquate les zones selon la nature de leurs problèmes économiques et de sous-évaluer les problèmes de la Wallonie par rapport à ceux d'autres régions européennes ;

considérant que, dans ses observations des 1<sup>er</sup> et 22 février 1982, le gouvernement belge présente encore deux méthodologies et approches totalement différentes pour la Flandre et la Wallonie, approches qui, par ailleurs, ne font pas référence au contexte européen; que la sélection opérée reste pratiquement la même que la sélection initiale, les zones de développement proposées se situant toujours dans chacune des 9 provinces du pays et dans 39 arrondissements sur 43, représentant près de 75 % de la population belge, tandis que la population de ces zones totalise encore 50 % de la population du pays contre 55 % dans le projet initial; qu'un plafond unique d'intensité y est toujours proposé;

considérant que, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne, outre le royaume de Belgique, trois États membres ont présenté leurs observations à la Commission; que l'un de ceux-ci souscrit entièrement à la position de la Commission; qu'un autre État membre émet quelques critiques à l'égard de l'approche de la Commission mais appuie globalement sa position; que le troisième enfin considère qu'une décision de la Commission à l'égard du régime d'aides régionales belge ne devrait intervenir qu'après que la révision en cours des principes de coordination des aides à finalité régionale aura abouti et qu'après que les propositions attendues de la part de la Commission en matière de cumul de toutes les formes d'aides à l'industrie auront débouché sur une solution;

considérant que, dans le cadre de cette même procédure, plusieurs autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission; que ces observations présentent des arguments favorables au maintien des aides dans certaines régions;

#### IV

considérant que les aides projetées par le gouvernement belge en faveur de certaines régions sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92, seules dérogations susceptibles d'être appliquées en l'espèce, s'agissant d'aides à finalité régionale, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas indivi-

duel d'application de régimes d'aides générales; que, en particulier, ces dérogations ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune matière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-dessus à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité instituant la Communauté économique européenne; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause;

considérant que, suite à une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971<sup>(1)</sup>, que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté; que, dès lors, et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchères, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité instituant la Communauté économique européenne, tenir compte à la fois de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire et des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays;

considérant que l'analyse socio-économique approfondie des régions belges montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité instituant la Communauté économique européenne ne

<sup>(1)</sup> JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.

peut être envisagée, les régions belges ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; que ceci n'a été mis en cause par le gouvernement belge ni dans son projet initial ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure susmentionnée de l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne; que seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne, prévoyant la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc en l'espèce être envisagée;

considérant que, pour déterminer la compatibilité avec le marché commun des aides envisagées par le gouvernement belge en faveur de certaines régions, la Commission a appliqué les principes rappelés ci-dessus; qu'ainsi, après avoir replacé les régions belges en cause dans un contexte communautaire, en comparant le produit intérieur brut et la situation de l'emploi dans les régions concernées par rapport aux moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre les régions au niveau national et de justifier l'octroi d'une aide à finalité régionale; que, à cette fin, la Commission a retenu un certain nombre d'indicateurs caractérisant le développement économique et la situation de l'emploi, à savoir essentiellement les revenus imposables, le chômage, l'évolution de l'emploi, la structure des activités économiques, les soldes migratoires et les facteurs démographiques;

considérant que, contrairement aux méthodologies utilisées par les autorités belges, cette méthodologie a permis, par l'analyse de la structure des activités et des autres indicateurs de causalité, de déterminer la nature des problèmes économiques des régions concernées et leur caractère structurel éventuel; que les critiques émises par les autorités régionales flamandes ne paraissent pas fondées, la Commission ayant utilisé de manière systématique ces mêmes indicateurs pour l'analyse des régions wallonnes et des régions flamandes et que l'importance plus grande des zones susceptibles de bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne en Wallonie s'explique uniquement par l'étendue et l'intensité plus considérable des problèmes régionaux en Wallonie qu'en Flandre; que, conformément à ce qui a été énoncé ci-avant, la Commission ne peut, en vertu du principe de spécificité régionale<sup>(1)</sup>, s'attacher, dans la détermination des zones d'aides comme le suggèrent les autorités régionales wallonnes, aux phénomènes locaux; qu'il a été procédé à une analyse comparative de la

situation de l'ensemble des régions belges, y compris la Wallonie, par rapport à celle des régions européennes;

considérant que les observations des 1<sup>er</sup> et 22 février 1982 du gouvernement belge tendent à maintenir dans sa quasi-intégralité le projet initialement notifié à la Commission et que la majorité du territoire national, à l'exception des régions urbaines du centre et du nord du pays, pourrait ainsi bénéficier de l'octroi d'aides régionales; qu'il s'agirait là d'un régime qui ne respecterait pas le principe de la spécificité régionale énoncé par les principes de coordination des aides à finalité régionale, ne laissant guère d'avantages compensatoires aux régions affectées de réels handicaps structurels, et d'un régime qui ne répondrait pas aux exigences de l'article 2 premier alinéa de la décision de la Commission du 26 avril 1972 citée plus haut, visant à une plus grande sélectivité dans la détermination des zones de développement; que le maintien d'un plafond unique d'intensité ne respecterait pas les exigences du deuxième alinéa de cet article;

considérant que les observations des tiers intéressés ne contiennent pas d'élément de nature à modifier l'appréciation de la situation des régions belges résultant de l'analyse socio-économique de la Commission décrite ci-avant; que la Commission ne peut, comme il est suggéré par un État membre, établir, tant pour des raisons matérielles que juridiques, de lien chronologique entre la mise en vigueur des nouveaux principes de coordination des aides à finalité régionale et ses obligations qui découlent de l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne;

considérant que, sur base de l'analyse socio-économique des régions belges décrite ci-avant, il apparaît que les régions et sous-régions en Belgique qui connaissent des difficultés susceptibles de les faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne sont les suivantes: le Westhoek, la Campine, le bassin sidérurgique de Liège, le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut, la région Ardennes - Condroz - Gaume et la zone textile de Mouscron - Comines;

considérant que ces régions et sous-régions correspondent aux entités ou parties d'entités administratives suivantes:

- Westhoek: arrondissements de Dixmude, de Furnes et d'Ypres,
- Campine: province de Limbourg, arrondissement de Turnhout, communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaeken, Léau, Linter, Montaigu-Zichem et Tiel-Winge, dénommées ci-après « Noord-Hageland », dans l'arrondissement de Louvain,
- bassin sidérurgique de Liège: arrondissement de Liège,

(<sup>1</sup>) JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 11.

- bassin houiller et sidérurgique du Hainaut : arrondissements de Charleroi et de Mons, sud de l'arrondissement de Soignies (communes de La Louvière et le Rœulx), nord de l'arrondissement de Thuin (communes d'Anderlues, Binche et Morlanwelz),
- Ardennes - Condroz - Gaume : province du Luxembourg, arrondissement de Thuin (à l'exception des communes du Nord susmentionnées), sud de l'arrondissement de Namur (communes de Gesves, Mettet et Ohay), sud de l'arrondissement de Huy (communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet), sud de l'arrondissement de Verviers (communes d'Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes),
- zone textile de Mouscron - Comines : arrondissement de Mouscron ;

considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a également montré que si l'intensité des problèmes auxquels se trouvent confrontés la province de Limbourg dans la région de la Campine, le bassin sidérurgique de Liège et le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut y justifient le maintien d'un plafond maximal d'aides de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou de 3 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement), il n'en est pas de même pour les autres régions et sous-régions susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne où le plafond d'aides doit être limité à 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou à 2 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement); que, en opérant cette différenciation des zones selon l'acuité des problèmes des régions concernées, la Commission répond aux besoins du principe de spécificité régionale évoqué plus haut et pallie la carence du royaume de Belgique à se conformer à l'article 2 deuxième alinéa de la décision 72/173/CEE de la Commission ;

considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a également montré que le caractère particulier de la situation socio-économique prévalant dans la zone textile de Mouscron, notamment l'évolution constatée dans les dernières années et le caractère plus local de ces problèmes, n'y justifie l'octroi d'aides à finalité régionale que pour une période limitée à trois ans ; que la proximité du Noord-Hageland des zones développées des provinces de Brabant et d'Anvers et le fait que la situation actuelle du chômage dans cette sous-région n'a pu être appréciée que sur la base d'estimations, imposent également une limitation à trois ans de l'octroi des aides régionales ; que, avant l'expiration de cette période, il sera procédé à un nouvel examen de la situation de ces deux zones ;

considérant, au vu de l'analyse socio-économique susmentionnée, que la croissance économique importante enregistrée dans la province de Limbourg ces dernières années impose une limitation à trois ans du classement de cette province dans la catégorie des régions pouvant bénéficier d'un plafond de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) étant entendu que, avant l'expiration de cette période, il sera également procédé à un nouvel examen de la situation de cette province ;

considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a montré que si la situation de l'arrondissement d'Audenarde exige que le statut de zone d'aides lui soit retiré, il importe que, pour ne pas contrarier les efforts de diversification entrepris, cet arrondissement puisse bénéficier d'un régime transitoire y permettant la prorogation de l'octroi d'aides régionales, dans la limite d'un plafond de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) jusqu'au 31 décembre 1983 ;

considérant également que l'analyse socio-économique susmentionnée a montré que, si la situation de la région Ardennes - Condroz - Gaume imposait d'y limiter l'octroi d'aides régionales à un plafond de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou aux plafonds alternatifs mentionnés ci-avant), la situation particulière de l'ancien bassin sidérurgique d'Athus (communes d'Aubange et Messancy dans l'arrondissement d'Arlon, communes de Musson, Saint-Léger et Virton dans l'arrondissement de Virton) y justifie le maintien d'un régime transitoire permettant la prorogation d'un plafond de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou des plafonds alternatifs mentionnés ci-avant) jusqu'au 31 décembre 1983 ;

considérant enfin que, compte tenu de la gravité de la situation de l'emploi créée par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans le bassin sidérurgique de Liège et dans le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut, des dérogations à l'exclusion du statut de zone de développement pourraient cependant être accordées en faveur de cas individuels d'application d'aides à finalité régionale dans les arrondissements d'Ath, de Tournai et de Waremme ainsi que dans les parties nord des arrondissements de Huy et de Verviers, après notification préalable à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne et pour autant que la Commission constate que ces aides ont pour effet de remédier directement à la situation de l'emploi résultant des difficultés créées par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les bassins houillers et sidérurgiques limitrophes aux arrondissements ou parties d'arrondissements précités ;

V

considérant que, en vue de pouvoir procéder à l'examen permanent prévu par l'article 93 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, la Commission doit disposer d'un rapport d'application annuel du régime et procéder à l'examen d'un certain nombre de cas concrets ;

considérant enfin que la Commission a institué ou instituera des règles particulières à l'égard de l'octroi d'aides en faveur des entreprises de certains secteurs, y compris lorsque ces aides sont octroyées au titre de la législation sur les aides régionales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

*Article premier*

Le royaume de Belgique ne peut octroyer des aides sur base du projet de délimitation des zones de développement notifié à la Commission par lettre du 14 novembre 1980 que dans les arrondissements ou parties d'arrondissements et dans les conditions qui suivent :

a) jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement, ou 3 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement :

- province du Hainaut :  
arrondissement de Charleroi, arrondissement de Mons, sud de l'arrondissement de Soignies constitué par les communes de La Louvière et Le Rœulx, nord de l'arrondissement de Thuin constitué par les communes d'Anderlues, Binche et Morlanwelz,
- province de Liège :  
arrondissement de Liège,
- province de Limbourg :  
arrondissement de Hasselt, arrondissement de Maaseik, arrondissement de Tongres,
- province du Luxembourg :  
sud de l'arrondissement d'Arlon constitué par les communes d'Aubange et Messancy, sud de l'arrondissement de Virton constitué par les communes de Musson, Saint-Léger et Virton.

Le classement du sud des arrondissements d'Arlon et de Virton dans la province du Luxembourg dans cette catégorie de régions où l'intensité maximale peut atteindre 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement prend fin au 31 décembre 1983.

Le classement dans cette même catégorie des arrondissements de Hasselt, de Maaseik et de Tongres dans la province de Limbourg est limité à une période de trois ans à compter de la présente décision, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission

procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique ;

b) jusqu'à une limite de 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement, ou 2 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement :

- province d'Anvers :  
arrondissement de Turnhout,
- province de Brabant :  
• Noord-Hageland • constitué par les communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaeken, Léau, Linter, Montaigu-Zichem et Tielt-Winge dans l'arrondissement de Louvain,
- province de Flandre occidentale :  
arrondissement de Dixmude, arrondissement de Furnes, arrondissement d'Ypres,
- province de Flandre orientale :  
arrondissement d'Audenarde,
- province du Hainaut :  
arrondissement de Mouscron, arrondissement de Thuin à l'exception de sa partie nord telle que définie sous a) ci-avant,
- province de Liège :  
sud de l'arrondissement de Huy, constitué par les communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet, sud de l'arrondissement de Verviers, constitué par les communes d'Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Lierneux, Malmédy, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes,
- province du Luxembourg :  
arrondissement d'Arlon, à l'exception de sa partie sud telle que définie sous a) ci-avant, arrondissement de Bastogne, arrondissement de Marche-en-Famenne, arrondissement de Neufchâteau, arrondissement de Virton, à l'exception de sa partie sud, telle que définie sous a) ci-avant,
- province de Namur :  
arrondissement de Dinant, sud de l'arrondissement de Namur constitué par les communes de Gesves, Mettet et Ohey, arrondissement de Philippeville.

L'octroi des aides dans l'arrondissement d'Audenarde dans la province de Flandre orientale prend fin au 31 décembre 1983.

L'octroi des aides dans l'arrondissement de Mouscron dans la province du Hainaut et dans le • Noord Hageland • dans l'arrondissement de Louvain est limité à une période de trois ans à compter de la présente décision, étant entendu que, avant l'expiration de ce délai, la Commission procédera à une nouvelle analyse de leur situation socio-économique.

*Article 2*

Dans les arrondissements d'Ath, de Tournai et de Waremme ainsi que dans les parties nord des arrondissements de Huy et de Verviers ne bénéficiant pas du statut de zones de développement, le royaume de Belgique pourrait cependant accorder, par dérogation à la présente décision, des aides à finalité régionale après notification préalable à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne et décision de celle-ci constatant que ces aides ont comme effet de remédier directement à la situation de l'emploi résultant des difficultés créées par la crise des industries de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les bassins houillers et sidérurgiques limitrophes aux arrondissements ou parties d'arrondissements précités.

*Article 3*

Le royaume de Belgique communique à la Commission, avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indiquant le montant des aides régionales octroyées, celui des investissements aidés ainsi que le nombre de cas concernés, ces données étant ventilées régionalement selon les régions de niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes et sectoriellement selon les branches à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes de l'Office statistique des Communautés européennes.

En outre, le royaume de Belgique communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les données nécessaires pour lui permettre de procéder à l'examen d'un certain nombre de cas individuels.

*Article 4*

L'octroi des aides au titre de la présente décision ne préjuge pas le respect des règles spécifiques, existantes ou futures, applicables aux aides accordées dans certains secteurs.

*Article 5*

Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

*Article 6*

La présente décision remplace les articles 1<sup>er</sup> et 2 de la décision 72/173/CEE concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

*Article 7*

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

---

Journal officiel des Communautés européennes  
9.11.82  
N° 2 312/18-24

## II

*(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)*

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1982

concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale au Danemark à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1982

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(82/691/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations<sup>(1)</sup>, et vu ces observations,

### I

considérant que, par lettre du 27 octobre 1981, le gouvernement danois a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les modifications qu'il envisage d'apporter, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1982, à la délimitation en vigueur depuis 1977 des zones susceptibles de bénéficier d'aides au titre de la loi du 7 juin 1972<sup>(2)</sup> concernant les aides au développement régional;

considérant que la nouvelle délimitation est prévue pour une période de cinq ans et que, à titre transitoire, il est envisagé que les régions, qui sur la base de la nouvelle délimitation perdent leur statut de zone aidée ou passent du statut de zone d'aide spéciale à celui de zone d'aide normale, pourront encore pendant une période d'un an, expirant le 31 décembre 1982, intro-

duire des demandes d'aide auprès des autorités danoises au titre de leur ancien statut;

considérant que la loi danoise du 7 juin 1972 qui prévoit trois types d'aides à savoir des subventions, des prêts à taux d'intérêt réduit et des garanties de l'État, établit une distinction entre deux catégories de zones susceptibles de bénéficier d'aides: les zones d'aide spéciales où les trois catégories d'aides susmentionnées peuvent être octroyées et les zones d'aide normales où l'octroi de subventions est exclu; que cette distinction entre les régions a pour effet de moduler l'intensité maximale des aides suivant le type de région;

considérant que, pour établir la nouvelle délimitation des zones d'aide, le gouvernement danois a utilisé l'étude effectuée récemment par le Conseil danois de développement régional de toutes les zones du Danemark, qui montre que, depuis la dernière révision de la délimitation des zones d'aide en 1977, ou enregistre un développement positif dans plusieurs des zones aidées et une évolution négative dans des régions situées en dehors des zones d'aide actuelles, tels qu'une modification de la délimitation existante s'impose;

considérant que, pour sélectionner les zones susceptibles de bénéficier d'aides, le gouvernement danois a appliqué un indicateur intégré composé de six critères, répartition par âge, emploi, revenu, taux d'activité, activité dans le secteur des services et activité dans le secteur manufacturier à l'exclusion du bâtiment et de la construction, de l'extraction des matières premières et des travaux publics, avec pondération double pour le

<sup>(1)</sup> JO n° C 25 du 2. 2. 1982, p. 3.

<sup>(2)</sup> Loi n° 219 du 7 juin 1972.

revenu et l'emploi en 1979 et 1980 ; que, avant d'additionner les points attribués à chaque critère pour obtenir la valeur de l'indicateur intégré, chacun d'eux a été corrigé par l'écart-type applicable à chaque critère ;

considérant que l'application de cette méthode d'analyse à l'ensemble du territoire danois a conduit à diviser les pays en 57 groupes de municipalités, comprenant chacun 2 à 20 municipalités, qui ont été classés par ordre décroissant sur la base d'un indice calculé à partir de l'indicateur intégré ; que, à de rares exceptions près, le gouvernement danois a retenu comme zones d'aide normales ou zones d'aide spéciales, les 29 groupes qui sont apparus les plus défavorisés d'après ce classement ;

considérant que l'application de cette méthode a eu pour effet de réduire de 2,3 points le pourcentage de la population aidée qui a été ainsi ramené à 25,2 % de la population danoise ; que, en tenant compte tant du changement de statut de certaines zones à l'intérieur des zones aidées que de la suppression de certaines zones parmi les zones aidées, les zones d'aide normales et les zones d'aide spéciales représenteraient respectivement 8,5 % et 16,7 % de la population danoise, contre 9,6 % et 17,9 % sur la base de la délimitation de 1977 ;

## II

considérant que, en procédant à l'examen du projet notifié par le gouvernement danois, la Commission a constaté que le regroupement des municipalités, tel qu'il a été effectué par les autorités danoises, aboutit dans de nombreux cas à la création de groupes dont la population est si réduite que le fait d'admettre ces unités au bénéfice des aides équivaldrait à admettre l'octroi d'aides régionales pour faire face à des problèmes locaux ; que ceci étant contraire aux principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale<sup>(1)</sup>, où il est précisé au point 9 sous iii) que les aides régionales ne sont pas octroyées de manière ponctuelle, la Commission a effectué son examen en regroupant les municipalités en unités plus vastes ;

considérant que, pour apprécier la compatibilité des aides envisagées par le gouvernement danois avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE, la Commission a tout d'abord comparé les régions concernées en les replaçant dans le contexte communautaire et a ensuite recherché s'il existait, au niveau national, des disparités graves entre les régions, susceptibles de justifier l'octroi d'aides régionales ;

considérant que, au terme de son examen, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre du projet prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre du projet du gouvernement danois d'octroyer des aides à finalité régionale dans les municipalités de

Møn, Højreby, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg, Holeby, Maribo, Nysted, Rødby et Saksøbing dans le comté de Storstrøm, Blåbjerg, Blåvandshuk, Øfgod et Varde dans le comté de Ribe et Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern, Trehøje, Videbaek, Åskov et Brande dans le comté de Ringkøbing, et de classer dans la catégorie des zones d'aide spéciales les municipalités de Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skaerbaek, Tønder, Tinglev et Bov dans le comté de Sønderjylland ; qu'à cet effet, la Commission a adressé, le 23 décembre 1981, une lettre au gouvernement danois le mettant en demeure de présenter ses observations ;

## III

considérant que, par lettre du 19 février 1982, le gouvernement danois a présenté ses observations à la Commission, observations qui ont été complétées et développées au cours de réunions bilatérales entre les autorités danoises et la Commission ;

considérant que le gouvernement danois a avancé tout d'abord des arguments d'ordre général dont les principaux sont que, d'une part, l'analyse de la Commission ne tiendrait pas compte de l'aménagement urbain et rural du Danemark, que, d'autre part, la Commission n'aurait pris en considération que deux des six indicateurs socio-économiques utilisés par le gouvernement danois, dont l'un, le chômage, est tellement conjoncturel qu'il ne permet pas par lui-même de faire ressortir les problèmes structurels des diverses zones en cause que, par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier des délimitations nationales, ce sont les disparités nationales, et non les disparités pouvant exister avec d'autres régions de la Communauté, que la Commission devrait prendre en considération, que, enfin, il conviendrait de tenir particulièrement compte du fait que le Danemark, contrairement à d'autres États membres, ne dispose d'aucun régime d'aides sectorielles susceptibles de se cumuler avec des aides régionales ;

considérant que, en ce qui concerne les zones à l'encontre desquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 du paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement danois a, en outre, fait valoir que, s'agissant des municipalités du Lolland et de Møn, si la situation socio-économique de la zone peut paraître bonne à l'heure actuelle, des pertes d'emploi importantes sont à prévoir pour l'année à venir, du fait de l'aggravation de la situation dans laquelle se trouve le chantier naval de Nakskov auquel est lié tout l'avenir économique de la région ; que, s'agissant des municipalités du comté de Ringkøbing, cette zone comporte en fait deux groupes de municipalités qui, analysés individuellement et non en les rattachant à la zone formée par le comté, de Ribe, comme le fait la Commission, se situent assez bas dans l'échelle de classement, et enregistre, sur la base des derniers chiffres disponibles en la matière, une augmentation du chômage, surtout dans la partie est, d'un niveau considérablement supérieur à la moyenne nationale ; que,

<sup>(1)</sup> JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 11.

s'agissant des municipalités du comté de Ribe, il n'est pas exact, comme le prétend la Commission, que l'acheminement du pétrole et du gaz découverts dans la mer du Nord vers la région située au sud de ladite zone aura des effets positifs notables sur le développement de la partie nord de cette zone dans les cinq prochaines années ; que, s'agissant des municipalités du comté de Sønderjylland, il convient de distinguer la partie est de la partie ouest du comté, cette dernière se caractérisant par une proportion élevée d'emplois dans l'agriculture, la pauvreté du sol et une faible densité de la population justifiant des mesures d'aide, et de prendre en considération le fait que ces municipalités sont limitrophes de régions aidées allemandes et que le plafond d'intensité de l'aide doit dès lors être la même de part et d'autre de la frontière, à savoir 20 % de l'investissement en équivalent-subvention net ;

considérant que deux États membres ont présenté des observations dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE ; que l'un d'eux a, notamment, estimé que lorsqu'elle évalue les déséquilibres régionaux au niveau national, la Commission doit tenir compte également des problèmes respectifs auxquels sont confrontés les pays moins développés, alors que l'autre État membre a fait valoir que la Commission n'apprécie pas correctement la situation nationale d'une région si elle effectue son analyse à partir d'indicateurs communautaires pour ne tenir compte qu'ensuite des disparités nationales ;

#### IV

considérant que les aides projetées par le gouvernement danois en faveur de certaines régions sont de nature à affecter les échanges entre États et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92, seules dérogations susceptibles d'être appliquées dans le cas d'espèce s'agissant d'aides à finalité régionale, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales ; que, en particulier, ces dérogations ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contri-

buer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations ;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indûs à certains États membres ;

considérant que lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause ;

considérant que, suite à une communication de la Commission, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 <sup>(1)</sup>, que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté ; que dès lors et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchère, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, tenir compte à la fois de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire et des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays ;

considérant que lorsqu'elle a examiné le régime danois d'aides à finalité régionale en 1977, la Commission a considéré qu'en raison de la situation prospère du Danemark dans son ensemble comparée à celle du reste de la Communauté seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE était susceptible d'être appliquée ; que cette situation n'ayant pas changé depuis lors, c'est donc cette seule dérogation qui pouvait être envisagée par la Commission lors de l'examen du projet danois de nouvelle délimitation des zones d'aide ;

<sup>(1)</sup> JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.

considérant que, pour déterminer la compatibilité avec le marché commun des aides envisagées par le gouvernement danois en faveur de certaines régions, la Commission a appliqué les principes rappelés ci-avant ; que, ainsi, après avoir replacé les régions danoises en cause dans un contexte communautaire en comparant le produit intérieur brut par habitant et la situation du chômage dans les régions concernées avec les moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre les régions au niveau national et de justifier l'octroi d'une aide à finalité régionale ; que, à cette fin, la Commission a utilisé un certain nombre d'indicateurs à savoir le revenu imposable, le chômage, l'emploi dans le secteur des services, l'emploi dans le secteur manufacturier, ainsi que l'emploi dans le secteur primaire, la densité de population et le solde migratoire ;

considérant que, sur la base de l'analyse socio-économique des régions ainsi effectuée, la Commission a estimé que pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides que le gouvernement danois envisageait d'octroyer, au titre de zones d'aide spéciales, dans le comté de Nordjylland, dans le comté de Bornholm, en faveur des municipalités de Hanstholm, Sydthy, Thisted, Morsø, Sallingsund, Sundsøre, Møldrup et Ålestrup dans le comté de Viborg, des municipalités de Lemvig, Thyborøn-Harboør, Thyholm et Ulfborg-Vemb dans le comté de Ringkøbing, des municipalités de Mariager et Samsø dans le comté de Århus, ainsi que des îles de Langeland et Aerø dans le comté de Fyn et de toutes les petites îles habitées qui ne constituent pas en elles-mêmes des municipalités et dont la population est pour chacune d'entre elles inférieure à 1 000 habitants ; que, de même, la Commission n'a pas soulevé d'objections en ce qui concerne les aides que le gouvernement danois envisage d'octroyer au titre de zones d'aide normales en faveur des municipalités de Fjends, Skive et Spøttrup dans le comté de Viborg, des municipalités de Bramming, Ribe et Holsted dans le comté de Ribe, des municipalités de Gram, Nørre Rangstrup, Rødding, Lundtoft, Rødekro et Åbenrå dans le comté de Sønderjylland, des municipalités de Langå, Nørhald, Purhus, Randers, Rougsø, Sønderhald, Ebeltoft, Grenå, Midtdjurs et Nørre Djurs dans le comté de Århus, et des municipalités de Struer et Vinderup dans le comté de Rindkøbing ;

considérant que, suite aux observations présentées par le gouvernement danois, la Commission estime que la partie sud du comté de Ringkøbing peut être rattachée aux fins de l'analyse à la zone d'aide située au nord et à l'est du comté ; que, après examen, il apparaît que la situation socio-économique de cette région justifie le maintien de son statut de zone d'aide ; que la Commission peut dès lors considérer comme compatible avec le marché commun l'octroi d'aides au titre de zones d'aide ordinaires en faveur des municipalités

de Trehøje, Videbaek, Åskov et Brande, tel que proposé par le gouvernement danois, mais ne peut considérer comme compatible avec le marché commun l'octroi d'aides en faveur des municipalités d'Egvad, Holmsland, Ringkøbing et Skjern qu'au titre de zones d'aides normales, étant donné la situation plus favorable de cette partie du comté par rapport au nord de la région qui bénéficie du statut de zones d'aide spéciales ;

considérant que, en ce qui concerne le Lolland, et sur la base des informations complémentaires fournies par le gouvernement danois, la Commission reconnaît que cette région souffre effectivement d'un problème régional spécifique, eu égard aux difficultés que connaît son principal employeur industriel et que les prévisions des autorités danoises sont fondées ; que, en conséquence, il apparaît justifié de maintenir les municipalités du Lolland parmi les zones aidées, comme prévu par la notification du gouvernement danois ; que, toutefois, il ne s'agit que de prévisions et qu'il importe d'examiner si celles-ci se vérifient ; que la Commission, dès lors, ne peut considérer comme compatible avec le marché commun l'octroi d'aides en faveur des municipalités du Lolland que jusqu'au 31 décembre 1983, et se réserve de réexaminer le statut de cette région au-delà de cette date ;

considérant que l'attrait que peuvent exercer sur les investisseurs, à titre de lieu d'implantation alternatif, les régions aidées allemandes limitrophes de la partie sud-ouest du comté de Sønderjylland, justifie le même plafond d'intensité de l'aide de part et d'autre de la frontière ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que cet attrait jouera surtout pour les investissements mobiles nouveaux et non pour ceux des entreprises existantes et que la partie occidentale de la région a connu peu de créations d'entreprise au cours des dix dernières années, la Commission peut considérer comme compatible avec le marché commun le maintien du statut de zones d'aide spéciales à l'égard des municipalités de Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skaerbaek, Tønder, Tinglev et Bov dans le comté de Sønderjylland pour les créations d'entreprise, étant entendu que le plafond d'intensité des aides serait ramené à 15 % de l'investissement en équivalent-subvention net pour les autres cas ;

considérant, en revanche, que la Commission considère comme incompatibles avec le marché commun les aides que le gouvernement danois envisage d'octroyer en faveur des municipalités de Møn dans le comté de Storstrøm, de Blåbjerg, Blåvandshuk, Ølgod et Varde dans le comté de Ribe ; que, en effet, s'agissant de Møn, cette municipalité est reliée par un pont aux municipalités de la partie sud du Sjælland, ce qui détermine un regroupement aux fins de l'analyse socio-économique, laquelle démontre que la situation de la région est bonne par rapport à l'ensemble du Danemark ; que, s'agissant des municipalités situées au nord du comté de Ribe, la Commission estime que les

découvertes de pétrole et de gaz en mer du Nord ne manqueront pas d'exercer une influence favorable sur les investissements dans cette zone, compte tenu de la proximité du port d'Esbjerg, principal centre des activités en mer du Nord, et du réseau de communications tant routier que ferroviaire existant; que, en conséquence, ces municipalités ne peuvent plus bénéficier du statut de zone aidée;

considérant, toutefois, que pour les régions qui, sur la base de la nouvelle délimitation, perdent leur statut de zone aidée ou passent du statut de zone d'aide spéciale à celui de zone d'aide normale, il convient de prévoir une période de transition expirant respectivement le 31 décembre 1983 et le 31 décembre 1982, au cours de laquelle ces régions pourront introduire des demandes d'aide auprès des autorités danoises au titre de leur ancien statut;

considérant que, pour permettre à la Commission de procéder, conformément à l'article 93 paragraphe 1 du traité CEE, à l'examen permanent du régime d'aides danois à finalité régionale, le gouvernement danois soumettra à la Commission un rapport annuel qui portera notamment sur le montant total des aides accordées, le montant des investissements bénéficiant d'une aide, ainsi que le nombre de cas concernés; que la Commission se réserve d'examiner un certain nombre de cas individuels;

considérant que la présente décision ne préjuge pas le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux aides accordées dans certains secteurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

#### *Article premier*

Sont incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CEE, les aides à finalité régionale que le gouvernement danois envisage d'octroyer en faveur des municipalités de Møn dans le comté de Storstrøm, et de Blåbjerg, Blåvandshuk, Ølgod et Varde dans le comté de Ribe.

En conséquence, ces municipalités ne peuvent plus bénéficier du statut de zone aidée.

Toutefois, à titre transitoire, les municipalités susmentionnées peuvent conserver leur statut de zone aidée, tel qu'il résulte de la délimitation des zones d'aide en vigueur depuis 1977, jusqu'au 31 décembre 1983.

#### *Article 2*

Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CEE, les aides à finalité régionale que le gouvernement danois envisage d'octroyer, pour une période de cinq

ans, au titre de la catégorie de zones d'aide normales, en faveur des municipalités de Trehøje, Videbaek, Åskov et Brande dans le comté de Ringkøbing.

#### *Article 3*

Ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CEE, pour une période de cinq ans, les aides à finalité régionale en faveur des municipalités d'Egvad, Holmsland, Ringkøbing et Skjern, qu'à la condition que le gouvernement danois ne leur accorde que les aides prévues au titre de zones d'aide normales.

En conséquence, ces municipalités ne peuvent ni conserver, ni acquérir le statut de zone d'aide spéciale.

Toutefois, à titre transitoire, les municipalités qui, sur la base de la délimitation des zones d'aide en vigueur depuis 1977, avaient le statut de zone d'aide spéciale, peuvent conserver ce statut jusqu'au 31 décembre 1982.

#### *Article 4*

Ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CEE, les aides à finalité régionale que le gouvernement danois envisage d'octroyer en faveur des municipalités de Højreby, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg, Holeby, Maribo, Nysted, Rødby et Saksøbing dans le comté de Storstrøm, que jusqu'au 31 décembre 1983. Avant cette date, la Commission réexaminera la situation socio-économique de la région afin de décider de son statut futur.

À cette fin, le Danemark soumettra chaque année à la Commission un rapport dont le premier lui parviendra un an après la date de la présente décision, qui portera sur l'évolution économique du Lolland et plus particulièrement sur la situation de l'emploi du chantier naval de Nakskov. Ce rapport précisera le nombre de pertes nettes d'emploi enregistrées au chantier naval et les prévisions pour le futur, ainsi que le nombre d'emplois créés dans d'autres secteurs.

#### *Article 5*

Ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CEE, pour une période de cinq ans, les aides à finalité régionale en faveur des municipalités de Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærebæk, Tønder, Tinglev et Bov dans le comté de Sønderjylland, qu'à la condition que l'intensité des aides régionales cumulées octroyées par le gouvernement danois pour ces municipalités n'excède pas 20 % de l'investissement en équivalent-subvention net en cas de création d'entreprises, et 15 % de l'investissement en équivalent-subvention net dans les autres cas.

Toutefois, à titre transitoire, ces municipalités peuvent conserver, jusqu'au 31 décembre 1982, le statut de zone d'aide spéciale qu'elles avaient sur la base de la délimitation des zones d'aide en vigueur depuis 1977.

*Article 6*

Le Danemark communique à la Commission, avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indiquant le montant des aides régionales octroyées, celui des investissements aidés, ainsi que le nombre des cas concernés, ces données étant ventilées régionalement selon les régions de niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes et sectoriellement selon les branches à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes de l'Office statistique desdites Communautés.

En outre, le Danemark communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les données nécessaires pour lui permettre de procéder à l'examen d'un certain nombre de cas individuels.

*Article 7*

L'octroi des aides au titre de la présente décision ne préjuge pas le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux aides accordées dans certains secteurs.

*Article 8*

Le Danemark informe la Commission, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

*Article 9*

Le Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

---

Journal officiel des Communautés européennes  
14.10.82  
N° 2 290/39-44

## II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1983

relative à deux régimes d'aide en faveur du secteur textile/habillement en France  
par le moyen de taxes parafiscales

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(83/486/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,

### I

considérant que, en date du 13 janvier 1983, le gouvernement français a notifié à la Commission deux décrets portant modification et prorogation pour la période 1983-1985 des deux régimes d'aide existant en France, l'un en faveur du textile et l'autre de l'habillement, financés par deux taxes parafiscales prélevées suivant les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes en France des produits du textile et de l'habillement;

considérant que, par décrets n° 82/1242 et n° 82/1243 publiés au *Journal officiel de la République française* n° 10 du 13 janvier 1983, ces deux régimes d'aide sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1983; que, ce faisant, le gouvernement français a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3;

considérant que ces décrets conduisent à la prorogation jusqu'au 31 décembre 1985 des régimes d'aide qui permettent d'affecter à l'industrie du textile et de l'habillement un montant annuel d'environ 240 millions de francs français; qu'une partie de ce montant, de

l'ordre de 40 %, est réservée à des actions collectives de recherche effectuées essentiellement par des instituts techniques sectoriels; que le reste du produit des taxes parafiscales est affecté à des actions individuelles d'aide aux entreprises du textile et de l'habillement; que ces aides comportent l'octroi de subventions de 10 à 15 % des investissements de modernisation et de rénovation; que ces régimes sont en vigueur — à travers des prorogations et des modifications successives — depuis 1965 et 1969 respectivement;

considérant que, en ce qui concerne les actions collectives de recherche, la Commission n'a pas d'objections à l'égard du soutien accordé à ces actions dès lors qu'elles s'insèrent dans le cadre des actions menées au plan communautaire;

considérant, en revanche, que la Commission estimant à l'issue d'un premier examen que les régimes en cause n'étaient pas, pour le reste, compatibles avec le marché commun a, en conséquence, décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE à leur égard; que, à cet effet, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations, par lettre du 18 mars 1983;

### II

considérant que, dans sa réponse en date du 31 mai 1983, le gouvernement français souligne qu'une part considérable des aides va à des actions collectives de recherche et que la Commission a déjà précisé dans sa lettre du 18 mars 1983 qu'elle n'entend pas s'opposer à ces actions pour autant qu'elles visent effectivement la recherche sectorielle;

considérant en outre que le gouvernement français estime dans sa réponse que les aides aux investissements de modernisation qui existent depuis 1965 et 1969 visent des programmes exceptionnels mais qu'il ne précise pas toutefois en quoi consiste ce caractère exceptionnel alors que les textes des décrets indiquent uniquement l'objectif général de rénovation des structures industrielles et commerciales ;

considérant que, comme il ressort en outre de sa réponse, le gouvernement français estime que l'application du critère de la sélectivité, soulevée par la Commission, devrait faire l'objet d'une analyse plus fine en ce qui concerne la politique industrielle relative au secteur du textile/habillement ; qu'il estime en outre que vu la modestie des montants d'aides en cause, la question du cumul avec les autres régimes existant en France apparaît dépourvue d'enjeu réel et peu significative ;

considérant que deux États membres ainsi qu'une fédération du secteur ont déclaré partager le point de vue exprimé par la Commission, et souligné leurs préoccupations à l'égard des régimes d'aide en question ;

### III

considérant que l'octroi d'aides d'État à des entreprises individuelles procédant à des investissements de modernisation et de rénovation constitue une aide sectorielle qui diminue d'autant les charges leur incombant normalement ; qu'il est notoire que s'agissant des secteurs du textile et de l'habillement, secteurs qui connaissent une situation difficile dans toute la Communauté et dans lesquels la concurrence est très vive entre États membres, ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant les entreprises françaises ou leur production ;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un compor-

tement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions ;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait, en accordant des avantages indus à certains États membres, à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière ;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de régimes d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises en question ;

considérant que, dans le cas d'espèce, le système de l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie dans le chef des entreprises bénéficiaires ;

considérant, en effet, que le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de constater que le niveau de vie en France n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a) ; que par leur champ d'application, à savoir toutes les entreprises d'un secteur économique donné, quelle que soit leur localisation, les régimes d'aide en cause n'ont pas pour objectif le développement de régions au sens de la dérogation visée au point c) ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point b) de l'article 92 du traité CEE, il est manifeste que les régimes d'aide en cause ne sont pas destinés à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française ; que d'ailleurs, à cet égard, d'après les informations socio-économiques disponibles pour la France, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, telle que celle visée par l'article 92 paragraphe 3 point b) ;

considérant que, par ailleurs, des aides couvrant une partie des frais de modernisation et de rénovation ne peuvent bénéficier d'une dérogation à l'incompatibilité de principe des aides avec le marché commun, que si, compte tenu des modalités et des critères retenus pour l'octroi des aides, la Commission était à même de déceler un élément de contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires en ce sens que l'octroi des aides serait lié à un effort spécial de l'entreprise qui réponderait à l'intérêt communautaire;

considérant que, s'agissant du secteur textile/habillement, la Commission a précisé dans les encadrements communautaires en matière d'aides à ce secteur, définis avec les États membres en 1971 et 1977, les objectifs à poursuivre dans l'intérêt communautaire; que ces lignes directrices visent notamment un assainissement sélectif des entreprises du secteur, la non-augmentation des capacités de production dans les sous-secteurs déjà structurellement excédentaires, la promotion des reconversions externes ou internes au secteur, la dégressivité des interventions; qu'elles excluent tout soutien à caractère uniquement conservatoire qui ne ferait que transférer les difficultés d'un État membre à un autre;

considérant que les régimes d'aide français en faveur du secteur textile/habillement sous forme de subventions en faveur des investissements de modernisation et de rénovation s'appliquent à toutes les entreprises du secteur qui procèdent à de tels investissements; qu'il n'est exigé aucune contrepartie de la part des entreprises, ni en termes de restructuration, ni en termes de réductions de capacité dans les sous-secteurs déjà excédentaires sur le plan communautaire ou dans lesquels l'industrie française est particulièrement performante; qu'il n'est prévu aucune sélectivité quant à la nature des investissements, qui peuvent dès lors être le simple remplacement des équipements et installations existants, ni quant au choix des bénéficiaires eu égard à leur viabilité financière à terme; qu'enfin aucune dégressivité n'est prévue pendant la période au cours de laquelle les aides sont octroyées et qu'elles peuvent se cumuler, d'ailleurs, avec les aides existantes tant sectorielles que générales; qu'il est dès lors patent que les aides en faveur d'actions individuelles ne répondent pas aux objectifs définis dans les encadrements communautaires en matière d'aides au secteur du textile et de l'habillement;

considérant que, en conséquence, vu la forme des aides, et compte tenu de l'absence de contrepartie dans l'intérêt communautaire, les aides en cause, dans un

secteur où de plus la concurrence intracommunautaire est très vive, sont de nature à altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, dès lors, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer les régimes d'aide considérés de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en les faisant bénéficier de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;

considérant, compte tenu de ce qui précède, que les aides en faveur d'actions individuelles d'investissement de modernisation et de rénovation dans le secteur textile/habillement, prévues par les décrets n° 82/1242 et n° 82/1243 publiés au *Journal officiel de la République française* n° 10 du 13 janvier 1983, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et ne doivent par conséquent plus être octroyées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

*Article premier*

Les aides en faveur d'actions individuelles, prévues par les décrets n° 82/1242 et n° 82/1243 publiés au *Journal officiel de la République française* n° 10 du 13 janvier 1983, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et ne doivent par conséquent plus être octroyées.

*Article 2*

La République française informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la présente décision.

*Article 3*

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1983

concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polyester

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(83/487/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission, le 1<sup>er</sup> février 1983, un projet d'aide en application de la section 8 de l'Industrial Development Act 1982 sous forme d'une subvention de 7,2 millions de livres sterling en faveur d'un projet d'investissement évalué à 35 millions de livres sterling visant un accroissement de capacité de production de film polyester à Dumfries en Écosse;

considérant que l'investissement envisagé aura pour but de moderniser l'unité de production existante de 17 000 tonnes pour la production de film mince en polyester et de l'accroître pour atteindre 26 000 tonnes par an;

considérant que la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE le 16 mars 1983, estimant que l'aide envisagée était susceptible d'altérer les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et que l'aide ne paraissait pas nécessaire pour obtenir de la part de l'entreprise concernée un comportement qui permettrait à la Commission d'appliquer une des dispositions dérogatoires au principe de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun;

considérant que, dans le cadre de ladite procédure, le gouvernement britannique a fait parvenir ses observations le 3 mai 1983 et le 7 juin 1983; que cette réponse souligne la nécessité de l'aide étant donné que le projet d'investissement ne serait pas réalisé en l'absence de son octroi en raison de l'insuffisance des ressources financières dont dispose l'entreprise en cause; que la réalisation de ce projet relèverait de l'intérêt communautaire puisqu'il permettrait de renforcer la position de l'industrie communautaire dans ce domaine face à la concurrence des entreprises des pays

tiers; que l'accroissement de capacité envisagé n'est pas susceptible de conduire à des distorsions de concurrence à l'égard des autres producteurs de la Communauté de film polyester; que ce projet permettrait de créer 95 emplois nouveaux dans la région de Dumfries;

considérant que les gouvernements de deux États membres, une organisation professionnelle relevant du secteur en cause ainsi qu'une entreprise concurrente ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard des distorsions de concurrence susceptibles de découler du projet d'aide britannique;

considérant que le projet d'aide britannique est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et menace de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production de film polyester;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans le cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu de forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question ;

considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;

considérant en effet que le gouvernement britannique n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, les seules susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Dumfries n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a) ; que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), le projet d'aide britannique ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévue par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que la région de Dumfries fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives au Royaume-Uni, il n'y a pas d'élément permettant de

conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité ; que l'intervention du gouvernement britannique n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ;

considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution de secteur du film polyester conduit à la conclusion que la modernisation et l'accroissement de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun en raison des distorsions de concurrence susceptibles de découler des aides envisagées pour les autres producteurs de film mince en polyester dans la Communauté ; que cette constatation reste valable même lorsque les nouvelles installations conduisent à une certaine amélioration des techniques de production ;

considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement britannique ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,

#### A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

##### *Article premier*

Le gouvernement du Royaume-Uni ne peut mettre à exécution le projet d'aide en faveur d'une entreprise du secteur chimique pour la modernisation de l'unité de production de film polyester et son accroissement, notifié à la Commission le 1<sup>er</sup> février 1983.

##### *Article 2*

Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

##### *Article 3*

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1983.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 janvier 1983

relative à un régime d'aide en faveur du secteur textile/habillement en France

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(83/245/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,

### I

considérant que, en date du 19 février 1982, le gouvernement français a notifié à la Commission un projet d'ordonnance visant à instituer un régime d'aide en faveur du secteur textile/habillement sous forme d'une prise en charge par l'État d'une partie des cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs du secteur; que les modalités d'application dudit régime annoncées par le gouvernement français ont été effectivement notifiées le 16 avril 1982;

considérant toutefois que, par ordonnance n° 204 du 1<sup>er</sup> mars 1982, le régime d'aide précité est entré en vigueur et que les modalités d'application ont été mises en vigueur le 16 avril 1982 par décret n° 82340, publié au *Journal officiel de la République française* le 17 avril 1982; que, ce faisant, le gouvernement français a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3;

considérant que ce régime d'aide se traduit par une prise en charge par l'État d'une partie des cotisations de sécurité sociale à raison de 10 % du montant total des rémunérations servant de base, dans la limite du plafond, au calcul des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs du textile/habillement, lorsque les entreprises en cause s'engagent à maintenir le niveau de l'emploi et à réaliser un

certain niveau minimal d'investissement; que cette prise en charge est portée à 12 % lorsque l'entreprise en cause s'engage en outre à procéder à des créations nettes d'emplois;

considérant que les entreprises dont les difficultés seraient susceptibles d'affecter l'équilibre économique et social d'une région peuvent obtenir un allègement égal à 8 % sans être tenues aux mêmes conditions relatives à la main-d'œuvre et aux investissements sur présentation d'un plan de modernisation et d'adaptation de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi approuvé par l'autorité administrative compétente;

considérant que la prise en charge des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la conclusion entre l'État et l'employeur concerné d'un contrat d'une durée égale à 12 mois renouvelable pour une nouvelle période de 12 mois;

considérant que la Commission, à l'issue d'un premier examen, a estimé que le régime en cause n'était pas compatible avec le marché commun et a, en conséquence, décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 première phrase du traité CEE à l'égard de ce régime; qu'à cet effet elle a mis par lettre du 14 mai 1982 le gouvernement français en demeure de présenter ses observations;

### II

considérant que le gouvernement français, suite à l'ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, a présenté ses observations par lettre du 16 juillet 1982;

considérant que, dans cette lettre, le gouvernement français a souligné les difficultés de l'industrie du textile et de l'habillement en France en termes de pertes d'emplois, de production, de pénétration des importations et de l'accroissement probable de ces

difficultés en cas d'accession future dans la Communauté économique européenne de l'Espagne et du Portugal ; qu'il justifie l'institution des nouvelles aides par le niveau élevé des charges sociales auxquelles sont soumis les employeurs en France par rapport aux autres États membres de la Communauté ; qu'il insiste en particulier sur le fait qu'il s'agirait d'une mesure exceptionnelle visant à inciter l'investissement et à maintenir l'emploi ; qu'il ne peut pas partager l'avis de la Commission selon lequel il s'agirait d'une aide au fonctionnement ;

considérant que, dans le cadre de cette même procédure, cinq États membres ont présenté leurs observations et ont souligné que les aides françaises en question sont cumulables avec les aides déjà existantes et ne tiennent compte ni des exigences d'une restructuration véritable ni de l'intérêt communautaire et qu'elles sont, par leur intensité et leur forme, de nature à provoquer un transfert des difficultés vers d'autres États membres sans pour autant faciliter l'assainissement structurel de l'industrie française ;

considérant que, dans ce même cadre, trois fédérations ont souligné de leur côté que les mesures françaises qui visent l'augmentation des investissements et de l'emploi sans opérer aucune sélectivité ne peuvent que provoquer une augmentation artificielle des capacités de production dont les entreprises des autres États membres, qui connaissent des difficultés égales ou supérieures à celles de l'industrie du textile et de l'habillement en France, subiront les effets ;

### III

considérant que la prise en charge par l'État des cotisations de sécurité sociale dues par les entreprises, lorsqu'elle favorise uniquement certains secteurs économiques, constitue une aide sectorielle qui diminue d'autant les charges leur incombant normalement ; qu'il est notoire que s'agissant des secteurs du textile et de l'habillement, secteurs qui connaissent une situation difficile dans toute la Communauté et dans lesquels la concurrence est très vive entre États membres, ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant les entreprises françaises ou leur production ;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce,

précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions ;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait, en accordant des avantages indus à certains États membres, à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière ;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de régimes d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises en question ;

considérant que, dans le cas d'espèce, le système de l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie dans le chef des entreprises bénéficiaires ;

considérant, en effet, que le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de constater que le niveau de vie en France n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a) ; que par son champ d'application, à savoir toutes les entreprises d'un secteur économique donné, quelle que soit leur localisation, le régime d'aide en cause n'a pas pour objectif le développement de régions au sens de la dérogation visée sous c) ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous b) de l'article 92 du traité CEE, il est manifeste que le régime en cause n'est pas destiné à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française; que d'ailleurs, à cet égard, d'après les informations socio-économiques disponibles pour la France, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, telle que celle visée par l'article 92 paragraphe 3 sous b);

considérant que, par ailleurs, la prise en charge par l'État des cotisations de sécurité incombant aux entreprises d'un secteur industriel déterminé est assimilable à une aide au fonctionnement pour les entreprises concernées de caractère strictement conservatoire; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée aux aides de fonctionnement, étant donné qu'habituellement ces aides ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions qui les rendraient susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le « développement » de l'activité économique en cause tel que prévu par cette même disposition; que le caractère d'aide assimilable à une aide au fonctionnement est d'autant plus évident dès lors que la réduction des charges sociales s'applique à la totalité des salariés et non pas uniquement à ceux qui occuperaient des emplois nouvellement créés;

considérant que de telles mesures d'aide ne pourraient perdre leur caractère d'aide assimilable à une aide au fonctionnement, et bénéficière, le cas échéant, d'une dérogation à l'incompatibilité de principe des aides avec le marché commun, que si, compte tenu des modalités et des critères retenus pour l'octroi des aides, la Commission était à même de déceler un élément de contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires en ce sens que la prise en charge par l'État des cotisations de sécurité sociale serait liée à un effort spécial de l'entreprise qui répondrait à l'intérêt communautaire;

considérant que, s'agissant du secteur textile/habillement, la Commission a précisé dans les encadrements communautaires en matière d'aides à ce secteur, définis avec les États membres en 1971 et 1977, les objectifs à poursuivre dans l'intérêt communautaire; que ces lignes directrices visent notamment un assainissement sélectif des entreprises du secteur, la non-augmentation des capacités de production dans les sous-secteurs déjà structurellement excédentaires, la promotion des reconversions externes ou internes au secteur, la dégressivité des interventions; qu'elles excluent tout soutien à caractère uniquement conservatoire qui ne ferait que transférer les difficultés d'un État membre à un autre;

considérant que le régime d'aide français en faveur du secteur textile/habillement sous forme d'une prise en charge par l'État des cotisations de sécurité sociale

dues par les entreprises s'applique à toutes les entreprises du secteur qui mettent en œuvre un programme de modernisation et d'adaptation; que l'aide est octroyée, sur base de contrats entre les employeurs et l'État, à condition uniquement que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter le niveau de l'emploi et des investissements; qu'il n'est exigé aucune autre contrepartie de la part des entreprises, ni en termes de restructuration, ni en termes de réductions de capacité dans les sous-secteurs déjà excédentaires sur le plan communautaire ou dans lesquels l'industrie française est particulièrement performante; qu'il n'est prévu aucune sélectivité quant à la nature des investissements, qui peuvent dès lors être le simple remplacement des équipements et installations existants, ni quant au choix des bénéficiaires eu égard à leur viabilité financière à terme; qu'il n'y a aucune relation directe entre le nombre d'emplois maintenus ou créés et l'importance de l'aide, puisqu'elle porte sur la totalité de la main-d'œuvre indépendamment du nombre d'emplois maintenus ou créés; qu'enfin aucune dégressivité n'est prévue pendant la période au cours de laquelle les aides sont octroyées et peuvent se cumuler, d'ailleurs, avec les aides existantes tant sectorielles que générales; qu'il est dès lors patent que le régime d'aide en cause ne répond pas aux objectifs définis dans les encadrements communautaires en matière d'aides au secteur du textile et de l'habillement et que les conditions imposées aux entreprises à titre de contrepartie sont insuffisantes;

considérant que, en conséquence, vu la forme des aides, et compte tenu de l'absence de contrepartie valable dans l'intérêt communautaire, les aides en cause, dans un secteur où de plus la concurrence intracommunautaire est très vive, sont de nature à altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, dès lors, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer le régime d'aide considéré de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en le faisant bénéficière de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE;

considérant que les arguments avancés par le gouvernement français en présentant ses observations ne sont pas de nature à modifier cette position; que si, en effet, la situation du secteur textile/habillement s'est détériorée en France au cours de ces dernières années, il s'agit là, cependant, d'une constatation commune à l'ensemble des industries du textile et de l'habillement de la Communauté et les difficultés auxquelles doivent faire face les entreprises des autres États membres sont au moins égales sinon supérieures à celles auxquelles les entreprises françaises sont confrontées; qu'il en est ainsi tant en ce qui concerne le passif des échanges intracommunautaires que le taux de pénétration des importations par rapport à la consommation et la diminution des postes de travail; que si les charges

sociales dues par les employeurs en France sont élevées, les salaires français sont, en ce qui concerne la charge salariale totale, dans une situation actuellement plus avantageuse par rapport à la majorité des entreprises des autres États membres; que, en tout état de cause, si les conditions générales dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités sont susceptibles de varier d'un pays de la Communauté à l'autre, un État membre ne peut cependant isoler tel élément particulier de ces conditions générales et compenser par des aides les coûts supplémentaires qui en résultent à ce titre pour ses entreprises par rapport à leurs concurrentes dans les autres États membres;

considérant, compte tenu de ce qui précède, que le régime d'aide français en faveur du secteur textile/habillement, instauré par l'ordonnance n° 204 du 1<sup>er</sup> mars 1982 et le décret n° 82340 du 16 avril 1982, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et doit en conséquence être supprimé; que le gouvernement français ne doit dès lors conclure aucun contrat comme prévu par les dispositions précitées et doit mettre fin aux contrats d'ores et déjà conclus avec les entreprises, et ce en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

*Article premier*

La République française supprime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le régime d'aide en faveur du secteur textile/habillement,

institué sous forme d'une prise en charge par l'État d'une partie des cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs du secteur, par l'ordonnance n° 204 du 1<sup>er</sup> mars 1982 et dont les modalités d'application sont prévues par le décret n° 82340 du 16 avril 1982.

En outre, la République française n'accorde plus aucune aide en vertu du régime en question à partir de la date de la notification de la présente décision.

*Article 2*

La République française communique à la Commission les dispositions qu'elle a adoptées pour se conformer à la présente décision au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 1<sup>er</sup> premier alinéa.

*Article 3*

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1983.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

---

Journal officiel des Communautés européennes  
26.5.83  
N° L 137/24-27

## II

*(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)*

# COMMISSION

## DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1983

relative à une aide envisagée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de fibres synthétiques

*(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seules faisant foi.)*

(84/111/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avoir mis conformément aux dispositions dudit article les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,

### I

considérant que, par lettre du 20 juillet 1983, enregistrée le 25 juillet 1983, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à une entreprise en faillite, produisant des fibres synthétiques située à Zwijnaarde ; que l'aide se chiffrait à 725 millions de francs belges, dont 550 millions à verser lors du démarrage du projet et le solde, le 1<sup>er</sup> janvier 1984 ; que l'aide prendrait la forme d'une prise de participation majoritaire de Socobesom [Koöperatievevenootschap voor Bedrijfsomschakeling, filiale de la Nationale Investeringsmaatschappij (NIM)] dans une nouvelle société à créer, dans laquelle un important groupe textile privé, qui se consacre essentiellement à la fabrication de tapis, doit prendre une participation minoritaire de 200 millions de francs belges et utiliser une partie de l'aide pour procéder à l'opération de sauvetage de l'entreprise en faillite par des investis-

sements qui permettraient de poursuivre la fabrication de nylon ; qu'une autre partie de l'aide doit être utilisée pour reconvertir une partie des moyens de production de l'usine de Zwijnaarde en de nouvelles capacités de production de PVC (revêtement de sol non textile) et pour moderniser et accroître les capacités de production existantes de polymère 6-6 ; que le groupe textile précité envisage enfin de construire un vaste centre de distribution pour la vente de sa production de tapis à Zwijnaarde, sur le site de la société en faillite, qui sera rachetée avec le solde de l'aide ;

considérant que, dès avant la date de la notification, la Commission avait reçu des plaintes des gouvernements de divers autres États membres et de certaines associations professionnelles, sur base desquelles elle avait rappelé au gouvernement belge, par télex des 2 juin, 22 juin et 12 juillet 1983, ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui exige la notification préalable des aides ;

considérant que, par lettre du 28 juillet 1983, la Commission a accusé réception de la notification ;

considérant que la Commission a engagé, le 8 août 1983, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 première phrase à l'égard de l'aide en question, pour le motif qu'elle risquait d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et qu'elle serait, dès lors, incompatible avec le marché commun ;

considérant que la Commission a également estimé que l'aide ne répondait pas aux conditions fixées dans le régime d'aides au secteur du textile et de l'habillement, approuvé par la Commission le 9 février 1983 et applicable en Belgique pour 1983 ; que la Commission se référerait notamment au fait que l'aide envisagée ne tiendrait pas compte des conditions prévues par ce régime quant à la forme de l'aide, son intensité et l'exclusion de certains sous-secteurs ; que la Commission a également souligné que l'aide envisagée enfreindrait la discipline en matière de fibres synthétiques, instaurée en 1977 et prorogée en 1979, 1981 et 1983, selon laquelle les aides à la création de capacités nouvelles dans le secteur en cause sont interdites ; que la Commission a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations par lettre du 8 août 1983 ;

considérant que la Commission a appris qu'une première tranche d'aide, soit 550 millions de francs belges, avait été versée lorsque la nouvelle société est entrée en exploitation, le 1<sup>er</sup> août 1983 ; que, par ses téléx des 11 août et 5 septembre 1983, elle a rappelé au gouvernement belge ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, aux termes duquel il ne peut mettre à exécution la mesure envisagée avant que la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'ait abouti à une décision finale ; qu'aucune réponse ne lui est parvenue ;

## II

considérant que le gouvernement belge, en présentant, par lettre du 6 septembre 1983, ses observations dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, a fait valoir que le projet serait économiquement viable ; qu'il soulignait que la discipline prévue en matière de fibres synthétiques ne s'appliquait pas en l'occurrence, puisque l'aide était destinée à une opération de restructuration du producteur de fibres synthétiques en question, dont l'activité, pour autant qu'il s'agit de sa production de nylon, n'avait jamais été interrompue, et que cette aide ne servirait donc pas à créer de nouvelles capacités dans ce sous-secteur de l'industrie du textile et de l'habillement ;

considérant que, dans sa réponse, le gouvernement belge fait également valoir qu'il ne considère pas l'intervention envisagée comme une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, pour la raison qu'un investisseur privé participe au projet à concurrence de 200 millions de francs belges ; que, d'après le gouvernement belge, le projet doit être considéré comme une reconversion partielle des moyens de production de l'usine de fibres synthétiques de Zwijnaarde, en vue de produire des revêtements de sol en PVC et de créer un centre de distribution de tapis, tout en réduisant les capacités de production en nylon de 6 000 à 4 000 tonnes par an ;

considérant que les observations de trois États membres autres que la Belgique, de dix fédérations d'entreprises du secteur et de cinq entreprises individuelles, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, rejoignent les préoccupations de la Commission ; qu'elles mettent l'accent sur les problèmes de surcapacité dont souffre le sous-secteur des fibres synthétiques, ainsi que sur la sensibilité du sous-secteur de la fabrication des tapis, due au volume des échanges et au niveau élevé de la concurrence existant entre les États membres ; que ces mêmes observations soulignent que l'aide envisagée transférerait les problèmes du producteur de fibres synthétiques en cause par ses concurrents et qu'elle accorderait un avantage indu au producteur de tapis concerné dans la concurrence qu'il livre aux autres fabricants de tapis du marché commun ;

## III

considérant que la prise de participation au capital d'une entreprise par l'État ou par un organisme public relevant de l'État peut constituer une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ;

considérant que l'entreprise de fibres synthétiques de Zwijnaarde, qui appartient à l'État belge depuis février 1978, enregistre depuis longtemps des pertes d'exploitation considérables ; que ces pertes n'ont fait qu'augmenter entre 1979 et 1982 et leur total a atteint quelque 1 050 millions de francs belges en 1982, dépassant ainsi 30 % du chiffre d'affaires en 1981 et 1982 ; que ces pertes ont été couvertes au moyen de ressources publiques, tandis qu'un certain nombre de projets de restructuration sont demeurés sans succès, durant la même période ;

considérant que, le 23 avril 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission un projet de restructuration, sur la base d'une étude rédigée par un groupe indépendant d'experts, qui prévoyait la cessation de la production de nylon, ce qui apparaissait comme le seul moyen d'assurer le retour à la viabilité de l'entreprise ; que le gouvernement belge n'a cependant pas donné suite à ce projet ;

considérant que, au cours de la même année 1982, l'entreprise a été déclarée en faillite et qu'un curateur a été désigné le 5 novembre 1982 ; que, sous son contrôle, l'usine de nylon a continué à produire, alors que toutes les autres unités cessaient de fonctionner ;

considérant que, en acquérant une participation majoritaire de 725 millions de francs belges dans une société nouvelle gérée par le fabricant de tapis en question, qui y prendrait une participation minoritaire

et qui dirigerait l'opération, le gouvernement belge se propose d'injecter des fonds dans le but de sauver l'entreprise de fibres synthétiques en faillite ;

considérant que l'opération envisagée constitue donc, en l'occurrence, une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ;

considérant qu'une partie substantielle de la production de fibres synthétiques de l'entreprise en faillite, ainsi qu'une partie très importante de la production du fabricant de tapis, sont exportées vers d'autres États membres — ce dernier s'est d'ailleurs vu décerner en 1982 l'Oscar belge des exportations — et que l'aide octroyée par le gouvernement belge affecte dès lors les échanges entre États membres ;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations ;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres ;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question ;

considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef des deux entreprises bénéficiaires de l'aide ;

considérant en effet que le gouvernement belge n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone dans laquelle l'usine de l'entreprise bénéficiaire est située n'est pas de celles où le niveau de vie est anormalement bas et où sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a) ; que, en ce qui concerne la dérogation prévue au point c), l'aide ne faciliterait pas le développement de certaines régions économiques au sens de cette disposition, objectif pour la réalisation duquel cette aide n'est d'ailleurs pas prévue ;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), la mesure ne comporte aucun élément permettant de la qualifier. Le projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, et dont la poursuite justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b), à l'interdiction des aides énoncée à l'article 92 paragraphe 1 ; que, si la Belgique connaît des difficultés socio-économiques graves, elles ne sont pas les plus graves de la Communauté ; que c'est en pareille situation que le risque d'une surenchère des aides d'État est des plus réels et que toute aide d'État est la plus susceptible d'affecter les échanges entre États membres ;

considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de ne pas élever d'objection à l'égard de la mise en œuvre d'un régime d'aides au secteur belge du textile et de l'habillement ; que, à partir de la mise en application du régime d'aide sectorielle, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale ;

considérant que, le 9 février 1983, à la demande expresse du gouvernement belge, qui souhaitait supprimer le système appliqué en 1982 aux prises de participation d'État dans le capital des entreprises bénéficiaires du régime, la Commission a autorisé pour 1983 un programme d'aides modifié, en vertu duquel toute aide ne pourrait prendre d'autre forme que celle de prêts jusqu'à concurrence de 50 % de l'investissement total ;

considérant que, dans sa décision du 9 février 1983, la Commission excluait du régime — comme en 1982 — la production de fibres et de fils synthétiques; qu'elle étendait notamment l'exclusion à la production de tapis tuftés, tout en exigeant la notification préalable des interventions destinées à promouvoir la fabrication d'autres tapis;

considérant que ces exclusions étaient motivées par les problèmes persistants et incontestés que ses excédents de capacité posent à l'industrie des fibres synthétiques dans la Communauté et par le haut niveau de compétitivité atteint dès à présent par l'industrie belge du tapis et du tapis tufté;

considérant que, en 1983 comme en 1982, les entreprises du secteur belge du textile et de l'habillement ne peuvent prétendre à aucune autre aide ni spécifique, ni régionale, ni générale;

considérant en outre que l'intervention prévue, pour autant qu'elle concerne la modernisation de la production de nylon, méconnaît que les fibres synthétiques ont été exclues du régime d'aides sectorielles applicable en Belgique en 1983; que l'aide servirait, en effet, à promouvoir la production du nylon 6-6, qui est un polyamide; que le polyamide figure parmi les groupes de produits mentionnés spécifiquement par la Commission dans ses lettres des 18 novembre 1981 et 15 février 1983 au gouvernement belge, qui autorisent le régime d'aides au secteur, et excluent de son bénéfice la production du polyester, du polyacrylique et du polyamide;

considérant que le groupe textile, qui est appelé à prendre une participation minoritaire dans la société dont la création a pour but de sauver l'entreprise de fibres synthétiques, entend construire sur le site de cette entreprise en faillite, au moyen de l'aide, un grand centre de distribution de tapis; que la partie de l'intervention devant être utilisée à cette fin méconnaît dès lors la condition selon laquelle les tapis tuftés sont à exclure du programme sectoriel applicable en Belgique et du bénéfice de toute autre aide;

considérant dès lors que l'aide destinée au redémarrage de l'usine à nylon et à la création d'un centre de distribution de tapis, tous deux à Zwijnaarde, ne peut être admise au titre du régime d'aides sectorielles applicable en Belgique, ni quant à la forme de l'aide, ni quant aux produits bénéficiaires; que ces objectifs ne peuvent bénéficier d'aucune autre aide, étant donné les excédents de capacité qui caractérisent le secteur des fibres synthétiques et le haut niveau de compétitivité déjà atteint par l'industrie belge du tapis;

considérant qu'une autre fraction de l'aide est destinée à financer en partie la création d'une vaste unité de

production de revêtements de sol en PVC; que les capacités afférentes à ce produit ne sont utilisées qu'à raison de 50 à 55 % dans la Communauté économique européenne et qu'il ne convient pas d'encourager la création de nouvelles capacités dans ce domaine au moyen d'aides d'État octroyées dans ce but; que, au surplus, l'aide envisagée est susceptible d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, étant donné que les autres producteurs de revêtements de sol en PVC dans la Communauté sont confrontés à des graves problèmes de surcapacité;

considérant que le solde de l'aide envisagée doit servir à moderniser et à augmenter les capacités de production du polymère 6-6, destiné au moins en partie à la production de fibres en polyamide; que le secteur de la production de plastiques, et surtout celui des résines de polyamide, doit faire face à de sérieuses difficultés dues aux excédents de capacité et que, dès lors, l'aide envisagée est contraire à l'intérêt commun;

considérant que, en conséquence, la totalité de l'aide, étant dénuée de toute justification compensatoire dans l'intérêt de la Communauté et applicable dans un secteur marqué par une très vive concurrence à l'intérieur même de cette Communauté, est susceptible d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que rien n'autoriserait donc la Commission à déroger au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en exemptant ladite aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;

considérant dès lors que la partie de l'aide afférente à la deuxième phase du projet, dont la mise à exécution est prévue pour le 1<sup>er</sup> janvier 1984, ne peut être accordée; que la restitution de l'aide s'impose pour la partie, soit 550 millions de francs belges, déjà accordée, le 1<sup>er</sup> août 1983, et ce en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui oblige les États membres à ne pas mettre leurs projets à exécution avant que la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'ait abouti à une décision finale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

#### *Article premier*

L'aide que le gouvernement belge a notifiée à la Commission par lettre du 20 juillet 1983, en faveur d'un producteur de fibres synthétiques établi à Zwijnaarde, et simultanément, en faveur du groupe textile appelé à reprendre et à gérer l'usine de Zwijnaarde, est

incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. En conséquence, cette aide doit être supprimée et, de plus, la partie de l'aide afférente à la deuxième phase du projet dont l'exécution est prévue pour le 1<sup>er</sup> janvier 1984 ne peut être accordée.

*Article 2*

Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

*Article 3*

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1983.

*Par la Commission*

Frans ANDRIESEN

*Membre de la Commission*

---

Journal officiel des Communautés européennes  
3.3.84  
N° L 62/18-22

## BIBLIOGRAFIA

- BANCO DE BILBAO. «La renta nacional y su distribución provincial.» 1984.
- BERNINI, Giorgio. «Las reglas de la competencia», en «Treinta años de Derecho Comunitario», pags. 349-405.
- CARTOU, Louis. «Communautés Européennes». 6.<sup>a</sup> Edic. París, Dalloz, 1979.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Rapport sur la politique de concurrence. Bruselas y Luxemburgo. I-1972; II-1973; III-1974; IV-1975; V-1976; VI-1977; VII-1978; VIII-1979; IX-1980; X-1981; XI-1982; XII-1983; XIII-1984.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. «Les regions de L'Europe». Bruselas. 1984.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. «Les régimes d'aide régionale dans la Communauté européenne». Bruselas 1979
- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. «Recueil de la Jurisprudence de la Cour». Luxemburgo. Publicación Anual.
- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. «Répertoire de Jurisprudence de droit communautaire».
- DASHWOOD, Alan. «*Control of state aides in the E.E.C.: Prevention and cure under Article 93*». CMLR, 1975, pag. 43.
- FERNANDEZ-FARRERES, Germán. «*La subvención: concepto y régimen jurídico*». Madrid I.D.F. 1983.
- FERNANDEZ-LERGA GARRALDA, Carlos. «*Política de la Competencia*». D.A. n.º 185, pags. 437-468.
- GIDE LOYRETTE-NOUEL. «Dictionnaire du Marche Commun». Jurisdictionnaires Joly. París 1984 (actualizables).
- GILMOUR, David R. «*The enforcement of Community Law by the Commission in the context of state aids*». CMLR, 1981. pag. 63.
- GOBIERNO VASCO. «Euskadi en la Comunidad Económica Europea». Vicepresidencia para el desarrollo Autonómico. Vitoria-Gasteiz, 1984.

- IPSEN, Mans-Peter. «*Subventionen in Gemeinsamen Market*». DÖV, 1977, pag. 613.
- KOVAR, Robert. «*Le régime des aides en droit communautaire*». rev. dr. int. 1974, pag. 416.
- LESGUILLONS, Henry. «*Le régime communautaire de protection contre le dumping et les subventions*». París, feduci, 1983
- LOUIS, Jean-Victor. «*El ordenamiento jurídico comunitario*». Bruselas, 1980.
- MEGRET, Jaques. «*Le droit de la Communauté Economique Européenne*». Vol. IV. Concurrence. Bruselas, 1972.
- MORTELMANS, Kamiel. «*The compensatory justification criterion in the practice of the Commission in decisions on state aids*», CMLR, 1984. pag. 405.
- MOUSSIS, Nicolás. «*Les politiques de la communauté économique*», París, Dalloz. 1982.
- MUFFAT-JEANNET, Danielle. «*Le contrôle de la Commission des Communautés européennes sur les aides individuelles acordeés par les Etats*» en Rev. trim. dr. eur. pag. 1
- PLENDER, Richard; PEREZ SANTOS, José. «*Introducción al Derecho Comunitario Europeo*». Madrid. Civitas. 1984.
- REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. 1981. N.º 161-162. Julio-Diciembre. Madrid.
- ROMUS, Paul. «*Economie regionale européenne*». Bruselas, PUB. 1983.
- SACLE, Armand. «*Les aides d'Etat et le Communauté Economique Européenne*». R.M.C., 1965, pag. 136.
- SAENZ DE BURUAGA, Gonzalo. «*Los incentivos regionales en Europa y en España*». Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda. 1983.
- SCHEUING, Dieter Helmut. «*Les aides financières publiques aux entreprises privées en droit français et européen*». París Bergerle. 1974.
- STRASSER, Daniel. «*La Hacienda de Europa*». Bruselas. Luxemburgo 1982.
- VENCESLAI, Stelio W. «*Progetti di aiuto e comunicazione nel quadro dell'esame preventivo di cui all'art. 93.3 del Trattato di Roma*». Riv. dir. eur. 1969. pag. 177.
- VILA COSTA, Blanca. «*El abuso de posición dominante en la CEE*». Madrid. INAP 1979.